

Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia

Cuatro casos de estudio



Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -
CCEEU, Nodo Antioquia 2017



Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia.

Cuatro casos de estudio.

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Nodo Antioquia 2017



@2017, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia, Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Corporación Jurídica Libertad, Fundación Sumapaz.

Carrera 47 No. 53-45 Piso 8
Teléfonos: (57-4) 2318355 – 2516350
Medellín, Colombia
cjl@une.net.co
www.cjlibertad.org

Coordinación y elaboración del informe

Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño- ASOVISNA
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Sumapaz

Análisis de datos

Mapas y datos estadísticos
Xana Villa García

Revisión y corrección de estilo:

Xana Villa García
Leider Restrepo Monsalve

Imagen y diseño de cubierta:

Leider Restrepo Monsalve

Diagramación e impresión:

Leider Restrepo Monsalve

ISBN: 978-958-57178-9-3

Diciembre de 2017
Medellín, Colombia



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Esta investigación contó con el apoyo del Proyecto financiado a los delegados de las plataformas de derechos humanos, expertos y experta integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El contenido de esta investigación es responsabilidad exclusiva de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan esta publicación.

Contenido

Tabla de Figuras	ii
Presentación	1
Contexto regional de Antioquia	4
Presencia paramilitar en Antioquia	4
Presencia de fuerza pública en Antioquia	12
Dinámica de violencia y conflicto	15
Casos de estudio	26
Nordeste	26
Paramilitarismo y fuerza pública	27
Dinámicas económicas y sociales	33
Agresiones contra Líderes Sociales	35
Urabá.....	37
Paramilitarismo y fuerza pública	39
Dinámicas económicas y sociales	47
Agresiones contra Líderes Sociales	52
Norte	55
Paramilitarismo y fuerza pública	57
Dinámicas económicas y sociales	63
Agresiones contra Líderes Sociales	68
Valle de Aburrá.....	72
Paramilitarismo y fuerza pública	73
Dinámicas económicas y sociales	84
Agresiones contra Líderes Sociales	92
Consideraciones finales	97
Referencias.....	99
Referencias.....	99

Tabla de Figuras

Figura 1: Mapa presencia paramilitar en Antioquia	5
Figura 2: Presencia de algunas estructuras paramilitares en Antioquia, 2016-2017 (nov.).....	6
Figura 3: Número de municipios con presencia paramilitar, Antioquia, 2016-2017 (nov.).....	7
Figura 4: Presencia de grupos según municipio	7
Figura 5: Cantidad de municipios con presencia de las AGC, Antioquia, 2016-2017 (nov.)	8
Figura 6: Cantidad de municipios con presencia de la OVA, Antioquia, 2016-2017 (nov.)	8
Figura 7: Principales grupos que componen otras estructuras paramilitares	9
Figura 8: Cantidad de municipios con presencia de otros grupos armados, Antioquia, 2016-2017 (nov.).....	9
Figura 9: Mapa presencia de fuerza pública en Antioquia	13
Figura 10: Operaciones realizadas por el Ejército Nacional, Antioquia, 2016-2017 (oct.).....	13
Figura 11: Cantidad de homicidios y tasa de homicidio en Antioquia, 2016-2017 (sep.)	15
Figura 12: Tasas de homicidio en Antioquia 2016-2017 (sep.).....	16
Figura 13: Homicidios en diez municipios 2016-2017 (sep.).....	17
Figura 14: Desplazamiento forzado en Antioquia 2016-2017 (oct.)	18
Figura 15: Desplazamiento forzado en diez municipios 2016-2017 (oct.)	18
Figura 16: Homicidios y amenazas a líderes en Antioquia, 2016-2017 (oct.).....	22
Figura 17: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH, Antioquia, 2016–2017 (oct.).....	23
Figura 18: Homicidios responsabilidad de la fuerza pública y paramilitares en Antioquia, 2016-2017 (oct.)	23
Figura 19: Amenazas individuales en Antioquia, 2016-2017 (oct.)	24
Figura 20: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Nordeste, Antioquia	30
Figura 21: Presencia de fuerza pública en Nordeste, Antioquia	32
Figura 22: Homicidios en Nordeste, Antioquia 2016-2017 (sep.).....	35
Figura 23: Desplazamiento forzado en Nordeste, Antioquia 2016-2017 (oct.)	35
Figura 24: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Nordeste, Antioquia, 2016–2017 (oct.)	36
Figura 25: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Nordeste, Antioquia, 2016-2017 (oct.).....	37
Figura 26: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Urabá, Antioquia	41
Figura 27: Presencia de fuerza pública en Urabá, Antioquia	46
Figura 28: Homicidios en Urabá, Antioquia 2016-2017 (sep.)	51
Figura 29: Desplazamiento forzado en Urabá, Antioquia 2016-2017 (oct.).....	51
Figura 30: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Urabá, Antioquia 2016–2017 (oct.).....	53
Figura 31: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Urabá, Antioquia, 2016–2017 (oct.).....	53
Figura 32: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Norte, Antioquia.....	58
Figura 33: Presencia de fuerza pública en Norte, Antioquia	62
Figura 34: Homicidios en Norte, Antioquia, 2016–2017 (sep.).....	66
Figura 35: Desplazamiento forzado en Norte, Antioquia, 2016-2017 (oct.)	67
Figura 36: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Norte, Antioquia 2016 – 2017 (oct.).....	69
Figura 37: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Norte, Antioquia 2016 – 2017 (oct.)	70
Figura 38: Estructuras paramilitares en Valle de Aburrá, Antioquia	75
Figura 39: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en el Valle de Aburrá, Antioquia.....	77
Figura 40: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Medellín, Antioquia	78
Figura 42: Algunas CONVIVIR de Medellín	80
Figura 43: Mapa presencia de fuerza pública en el Valle de Aburrá, Antioquia.....	82
Figura 44: Homicidios en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (sep.)	88
Figura 45: Homicidios en Medellín, Antioquia, 2016 – 2017 (sep.), por comuna.....	88
Figura 46: Desplazamiento forzado en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (oct.)	90

Figura 47: Desplazamiento forzado en Medellín, Antioquia, 2016-2017 (sep.)	91
Figura 48: Agresiones a líderes en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016 – 2017 (nov.)	93
Figura 49: Presuntos responsables de agresiones a líderes en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (nov.)	94

Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia: cuatro casos de estudio.

Presentación

El informe sobre “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Nordeste, Norte, Urabá y Valle de Aburrá de Antioquia”, fue coordinado y elaborado por la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Sumapaz conjuntamente para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia. Este documento es el resultado de un trabajo colectivo desarrollado¹ con otros espacios sociales y procesos organizativos de la región durante el presente año.

La información utilizada se generó durante el periodo de enero 2016 a octubre 2017. Para este texto se contó con la cartografía social realizada por la Mesa Territorial de Garantías Antioquia², espacio de interlocución que durante 2017 llevó a cabo el análisis sobre la situación de riesgo para la labor de las y los defensores de derechos humanos en el departamento (9 subregiones). Este insumo fue complementado con talleres y entrevistas³ a actores claves de los territorios de estudio. También se abordaron los Informes de Riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, las estadísticas de homicidios de la base de datos de la Policía Nacional (17 de septiembre) e información de desplazamiento forzado de la Unidad para las Víctimas (1 de octubre), así como los datos sobre agresión a la labor de las y los defensores en Antioquia, del Observatorio de la Fundación Sumapaz y las respuestas a los derechos de petición enviados a algunas entidades del Estado (30 de octubre).

Los resultados se presentan en tres ejes: la presencia de los grupos paramilitares que operan en los territorios; dinámicas económicas, principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control sobre la población; agresiones, específicamente homicidios y amenazas contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras de derechos humanos⁴. Las subregiones analizadas

¹ Este informe contó con el apoyo de la Comisión de Paz del Nodo Antioquia de la CCEEU, la Asociación Campesina de Antioquia, la Asociación Campesina de San José de Apartadó, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Acción Humanitaria del Nordeste Antioqueño, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Corporación Gustavo Marulanda, la Corporación Para el Desarrollo y la Paz y el Instituto Popular de Capacitación.

² La Mesa Territorial de Garantías para Antioquia es un espacio de interlocución entre el Estado y organizaciones sociales, comunitarias y de DDHH, articuladas al Proceso Social de Garantías.

³ Los talleres y entrevistas se realizaron en el 2º semestre de 2017 por el equipo coordinador de este informe. Agradecemos a todas las organizaciones, líderes, lideresas, procesos sociales y defensores que participaron en los espacios de trabajo.

⁴ Aunque el Acuerdo de La Habana estableció: (1) una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres de defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o

son: Nordeste, Norte, Urabá y Valle del Aburrá debido a la fuerte presencia paramilitar, el alto número de violaciones a los derechos humanos y la persecución a la labor de las, los defensores, líderes y lideresas.

Como sostienen diversas organizaciones, plataformas de derechos humanos y movimientos sociales, en estudios y denuncias⁵, el paramilitarismo continúa operando en el país. Las estructuras que surgieron posterior al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2003-2006), aunque con variaciones, siguen ejerciendo poder territorial y violando los derechos humanos.

Esta nueva fase paramilitar presenta cambios notables respecto a décadas anteriores. En la actualidad, estos grupos no requieren exacerbar sus mecanismos de terror, por el contrario, acuden a estrategias mucho más sofisticadas y latentes para ejercer su poder y relacionarse con agentes estatales, instituciones públicas y empresarios, entre otros. La población más vulnerable padece el control económico, social y cotidiano de estas estructuras que preservan el orden social vigente. Muestra de esto son las prácticas coercitivas contra sectores de la sociedad declarados como “problemáticos”, la imposición de reglas de comportamiento que restringen las libertades y el ataque a habitantes de los territorios por considerarlos auxiliares de la insurgencia y opositores a su régimen social. Además, continúan agrediendo sectores sociales organizados (práctica contrainsurgente) que persisten en la búsqueda de cambios democráticos para el país.

Los grupos paramilitares son por definición actores armados ilegales con una vocación anti-insurgente, que funcionan con la complicidad de elementos estatales, y de sectores económicos. Su ubicación dentro de la ilegalidad los articula con economías ilegales, estas economías incluyen narcotráfico, contrabando, extorsiones, minería ilegal, tráfico de armas entre muchas otras. Los grupos paramilitares se definen en función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia” y no de sus actividades económicas”. (CCEEU, 2016, p.2)

Las nuevas estructuras paramilitares han presentado un proceso de reingeniería sin concentración de poder o aglutinamiento bajo una sola organización como fueron las AUC. Esta división se manifiesta a través de las confrontaciones y disputas que han tenido varios de estos grupos con nuevas denominaciones “nuevas denominaciones”, entre ellas: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Nueva Generación (NG), Águilas Negras, Los Rastrojos, Ejército Antirrestitución de Tierras,

atenten contra quienes implementen los acuerdos de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Decreto 898 del 29 de mayo de 2017), (2) un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 del 29 de mayo de 2017) y (3) la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 del 3 de febrero de 2017); su papel y capacidad real de responder a los objetivos propuestos se verá truncado mientras el Estado siga negando la existencia de paramilitares y su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, la persecución contra el movimiento social, los asesinatos de ex combatientes de las FARC - EP y la persistente relación con agentes estatales.

⁵ Informes elaborados por: Indepaz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Plataforma Política y Social Marcha Patriótica, el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, Comisión Colombiana de Jurista, Programa Somos Defensores, Fundación Paz y Reconciliación, entre otros.

etc. No obstante, las AGC son la estructura paramilitar con mayor capacidad de concentración de poder como evidencia su presencia a nivel nacional.

Estas denominaciones, aunque pretenden apartarse de las viejas formas, representan la vigencia del proyecto paramilitar de la década del 60. Como señala la Comisión Colombiana de Juristas, (2010), intentar disfrazar el paramilitarismo con otras denominaciones, como se hizo en la época de los 60 bajo el nombre de autodefensas, y posteriormente usando los términos "grupos de limpieza social o de seguridad privada, no es más que una estrategia de ocultamiento de la violencia sociopolítica y un mecanismo de impunidad". (CJL, 2017, p.190)

En Antioquia, esta reingeniería ha resultado en un importante número de estructuras⁶. Algunas han emergido en los últimos años y otras se mantienen desde la década de los 90. También se han conformado alianzas, urbano - rurales (ejemplo: Alianza Criminal del Norte - ACN) y se han establecido poderes confederados, como el caso de la Oficina del Valle de Aburrá (OVA)⁷.

En este contexto, las estructuras paramilitares han "refinado" las estrategias de control del ámbito social, antes de la desmovilización eran frecuentes las masacres, los altos índices de homicidios y desplazamiento forzado masivo, como parte de la expansión y consolidación (...) En la actualidad, tras haber logrado implantar dispositivos de disciplinamiento social por medio de la coerción y el terror, las prácticas utilizadas principalmente son: las amenazas, la intimidación, el desplazamiento individual, los atentados y el asesinato selectivo (...) existe un marcado interés por obtener ganancias (...) (Economía lícita e ilícita). Para ello han ampliado su red y presencia en los negocios del narcotráfico, la minería, la compra-venta de tierras, la trata de personas, las extorsiones, y otros sectores. Esta estrategia que aparenta ser el objetivo principal de estos grupos, en realidad es uno de los elementos, no el principal como se ha querido demostrar por parte del Estado. El objetivo en últimas de esta reingeniería, no es otro que asegurar el orden social vigente, el control territorial de zonas geoestratégicas... eliminar las diversas expresiones del movimiento social y evitar a toda costa, cambios estructurales que permitan la construcción de una sociedad democrática y pluralista (implementación del Acuerdo de Paz). (CJL, 2017, p.190)

El Estado colombiano insiste que estas estructuras son Bandas Criminales, Grupos Armados Ilegales o Grupos Organizados Delincuenciales, argumentando que su principal fin es el económico ignorando la relación entre estas estructuras y la imposición del modelo económico extractivista, la preservación de los poderes políticos locales, regionales y nacional, el control de la vida civil y las agresiones contra defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. El desmonte de estas grupos es una necesidad para asegurar la vida de los pobladores, garantizar los derechos humanos, así como la implementación del Acuerdo de Paz⁸ y generar condiciones reales de democracia; de lo contrario continuarán aumentando las

⁶ En 2016, la Corporación Para El Desarrollo y La Paz- Corpades- informó que en el "Valle de Aburrá existían 500 estructuras armadas, con aproximadamente 13.000 integrantes". Muchas de ellas bajo el mando de la Oficina del Valle de Aburrá y Las Autodefensas Gaitanistas que aparecen en estos territorios en 2012.

⁷ Conocida como la Oficina de Envigado. Su influencia se ha extendido no solo al Valle de Aburrá sino a otros municipios de Antioquia.

⁸ El Consejo Nacional Gremial en el mes de agosto instó al Congreso de la República a "abstenerse de continuar el trámite de una reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo en Colombia. El Consejo Gremial manifiesta que "los propósitos que se persiguen son de orden político" (...) incluir este postulado en la Constitución puede tener la implicación "gravísima" de "degradar, de manera inexorable, la legitimidad del Estado" (El Espectador, 2017c).

agresiones y el afianzamiento del poder en las regiones por parte de los paramilitares, quienes durante 2017 han venido copando los territorios donde antiguamente hacían presencia las FARC- EP aumentando el riesgo de las poblaciones, que ven retorno estos actores.

Contexto regional de Antioquia

El departamento de Antioquia ha sido un territorio en permanente disputa en el marco del conflicto político, social y armado debido a la diversidad de sus bienes comunes⁹, a su carácter estratégico para la economía internacional y nacional en el desarrollo de megaproyectos, no solo extractivistas, sino también urbanísticos y de bienes y servicios, a la conexión con otros departamentos (Boyacá, Córdoba, Chocó, Santander y Sur de Bolívar) y a sus salidas al mar. Estas características económicas y socioterritoriales conjugadas, han determinado las dinámicas y rutas del conflicto, y el accionar de los actores armados tanto legales como ilegales que se despliegan en las subregiones. La violencia sociopolítica que se ha instaurado como un régimen de terror ha dejado un alto número de víctimas. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, en el departamento hay 1.642.778 víctimas (RUV, 2017), de las cuales alrededor de 600 mil viven en la ciudad de Medellín (El Tiempo, 2016b).

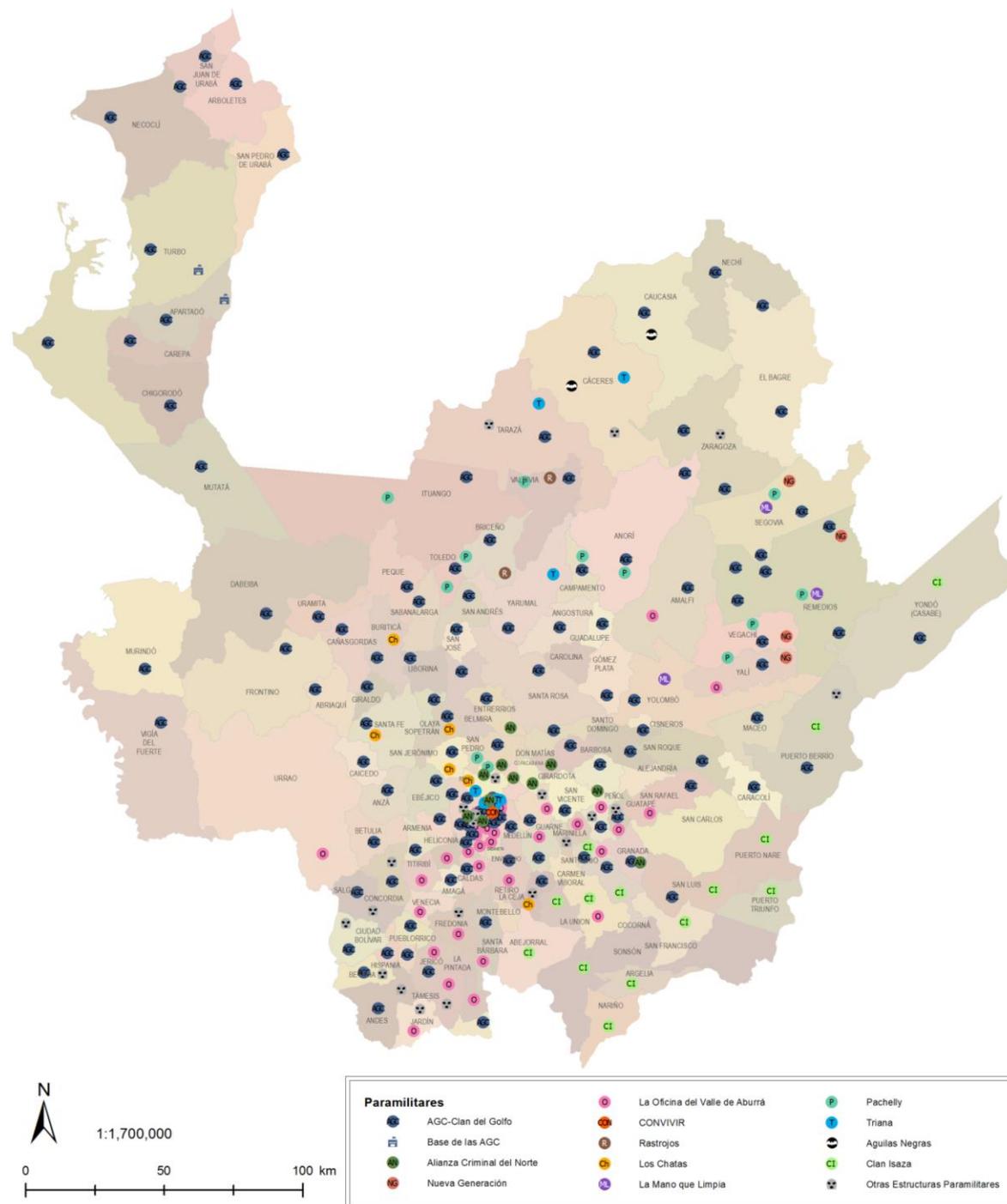
Que un cuarto de la población de Antioquia sea considerada víctima se puede relacionar con el origen, desarrollo y consolidación del paramilitarismo iniciado desde el Magdalena Medio y Urabá, la fuerte presencia de la insurgencia y las acciones violatorias de agentes del Estado, que de manera individual o coordinada con paramilitares, llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos.

Presencia paramilitar en Antioquia

En Antioquia, tras el proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha registrado una reconfiguración de estas estructuras. Según la cartografía social, el 96% (121) de los municipios en Antioquia reportan presencia paramilitar.

⁹ Los bienes comunes son todos aquellos que suelen denominarse como recursos naturales.

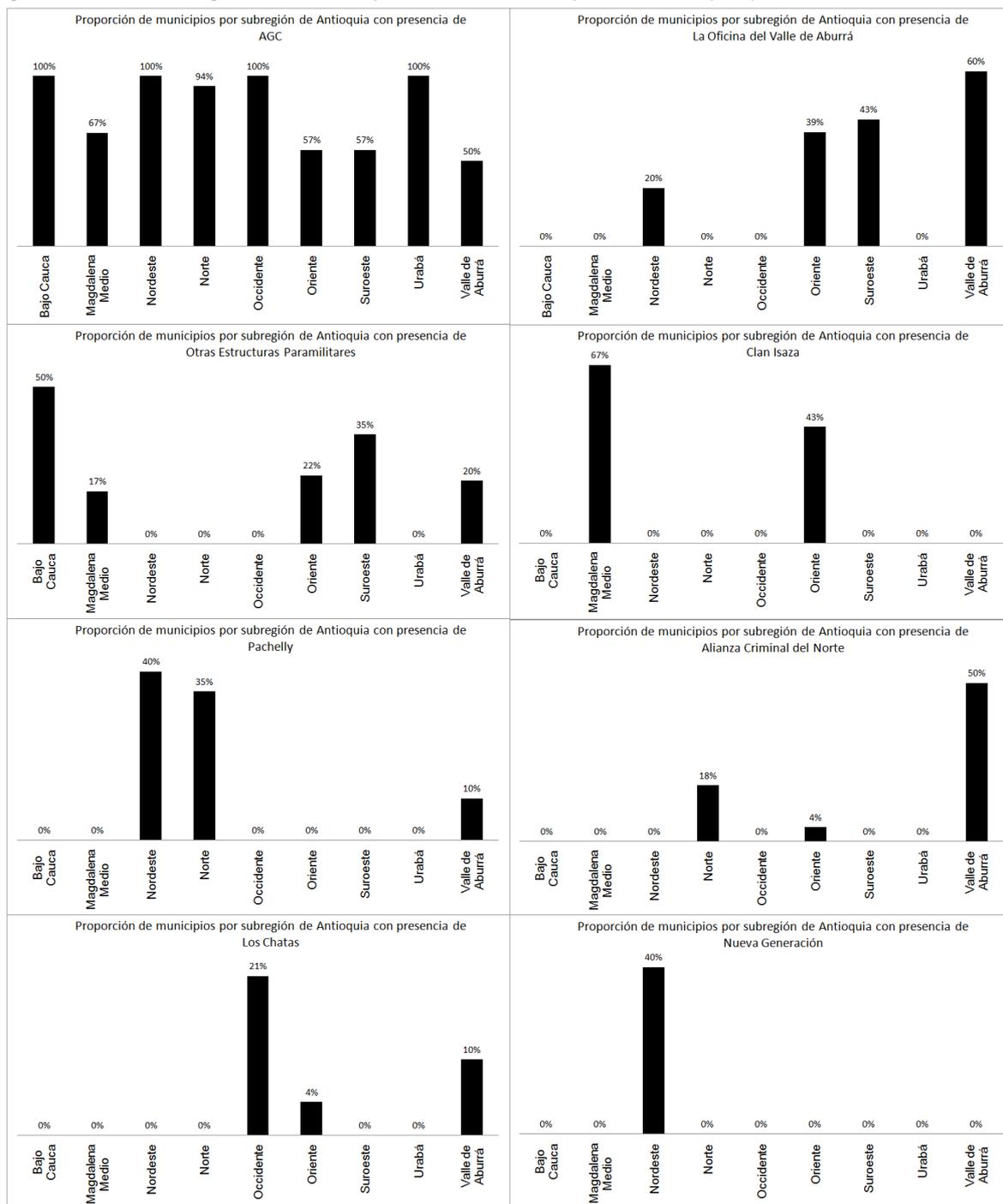
Figura 1: Mapa presencia paramilitar en Antioquia



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

En la actualidad, la expansión y dominio principal es de las AGC, conocidas también como Clan del Golfo o los Urabeños (97 municipios). La segunda estructura con mayor presencia en la región es la OVA (27 municipios), seguida por otras estructuras paramilitares (19), el Clan Isaza (14), Pachelly (11), ACN (9), Los Chatas (6), Los Triana (5), Nueva Generación (4), La Mano que Limpia (3), Los Rastrojos (2), Águilas Negras (2), y los grupos denominados Convivir, con presencia en Medellín (35 grupos).

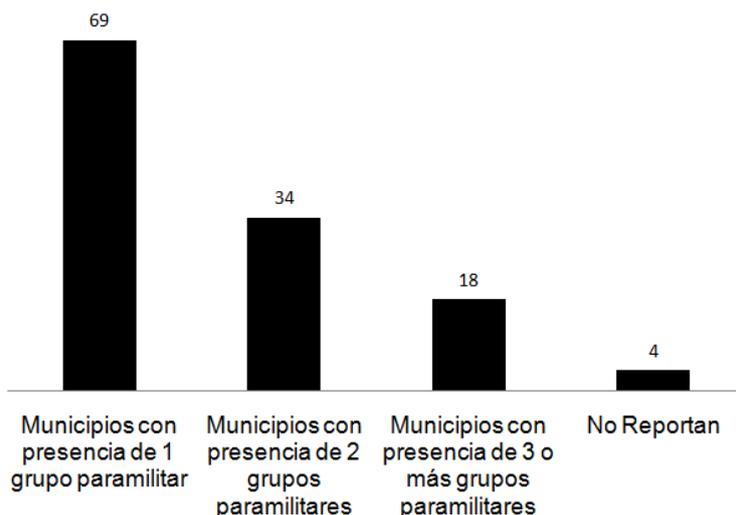
Figura 2: Presencia de algunas estructuras paramilitares en Antioquia, 2016-2017 (nov.)



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

De los 121 municipios que reportan presencia de grupos paramilitares, 69 tienen presencia de un grupo paramilitar, 34 de dos grupos y 18 de tres o más estructuras, lo que evidencia el grado de copiamiento de algunos territorios. A esto se suma el posicionamiento, en particular de las AGC, en zonas donde las FARC - EP hacían presencia, por ejemplo en Briceño e Ituango, en la subregión Norte.

Figura 3: Número de municipios con presencia paramilitar, Antioquia, 2016-2017 (nov.)



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

Las subregiones con municipios que presentan una mayor presencia paramilitar (tres o más grupos) son: el Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Oriente. Las zonas donde hay mayor presencia paramilitar son aquellas donde existen intereses geoestratégicos importantes para la economía (minería, hidroeléctricas, proyectos de bienes y servicios y grandes intervenciones urbanísticas). También son centros de poder político y financiero (Valle de Aburrá).

Figura 4: Presencia de grupos según municipio

Cantidad de Grupos	Municipios de Antioquia
Municipios con presencia de 1 grupo paramilitar	Abejorral, Amagá, Angelópolis, Angostura, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Armenia, Belmira, Betulia, Caicedo, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Carepa, Chigorodó, Cisneros, Concepción, Copacabana, Dabeiba, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, Envigado, Frontino, Giraldo, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guadalupe, Heliconia, Hispania, La Pintada, La Unión, Liborina, Maceo, Murindó, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Olaya, Peque, Pueblorrico, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Roque, San Vicente, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Sonsón, Tarso, Titiribí, Turbo, Uramita, Urao, Valparaíso, Venecia, Vigía del Fuerte, Abriaquí, Santa Bárbara.
Municipios con presencia de 2 grupos paramilitares	Amalfi, Andes, Anorí, Barbosa, Betania, Buriticá, Caldas, Campamento, Caucasia, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concordia, El Carmen de Viboral, El Retiro, Entreríos, Fredonia, Itagüí, Ituango, Jardín, Jericó, La Estrella, Marinilla, Rionegro, Salgar, San Jerónimo, San Luis, San Rafael, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Támesis, Toledo, Yolombó, Yondó, Zaragoza.
Municipios con presencia de 3 o más grupos paramilitares	Briceño, El Santuario, Guarne, Guatapé, La Ceja, Puerto Berrío, San Pedro de los Milagros, Tarazá, Vegachí, Yalí, Cáceres, El Peñol, Remedios, Segovia, Yarumal, Valdivia, Bello, Medellín.
No Reportan	Alejandría, Carolina del Príncipe, Montebello, San Carlos.

Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

Las AGC, son el grupo paramilitar con mayor copamiento territorial del país.

Durante los últimos diez años, el Clan amplió su territorio de presencia y hoy sustenta sus operaciones en 22 departamentos en un eje urbano – rural que va desde Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Su centro de gravedad es Medellín, en donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico - militar que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, tienen control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y controlan con sus bandas a La Estrella, Caldas, La Sierra y Barbosa. Junto con La Oficina y otros grupos menores imponen su ley en las comunas populares, cobran cuotas de seguridad o extorsión en el comercio, transporte, negocio sexual, microtráfico y regulan la vida social en muchos sectores. (Indepaz, 2017a, p.11)

Las AGC tienen presencia en las 9 subregiones de Antioquia y han concentrado, en el primer semestre de 2017, el 70% de las estructuras paramilitares con una amplia red de aliados a nivel nacional, 211 municipios en 22 departamentos (Indepaz, 2017a, p.8). “El Clan cuenta con cuatro mil efectivos, que con aliados cercanos ascendería a siete mil integrantes armados en todo el país. Son cifras muy subjetivas, (...), pero pueden tomarse como percepción de influencia” (p.9).

En Urabá, las AGC se imponen como única fuerza. El segundo territorio de mayor dominio es el Occidente (99%). En el Valle de Aburrá esta estructura hace presencia de manera autónoma y en otros casos genera alianzas con grupos de menor escala. Se ha reportado la presencia de carteles mexicanos (Sinaloa y Zetas) en el Bajo Cauca y Urabá y su relación con las AGC.¹⁰

Figura 5: Cantidad de municipios con presencia de las AGC, Antioquia, 2016-2017 (nov.)

	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburrá	TOTAL ANTIOQUIA
AGC	6	4	10	16	19	13	13	11	5	97

Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

La OVA se concentra en el Suroeste, Oriente y Valle de Aburrá, donde también hacen presencia las AGC y otras estructuras paramilitares. Se coordina con estructuras de carácter barrial o municipal para ejercer dominio territorial y realizar negocios. Se han extendido a países de América Latina. (Análisis Urbano, 2016c)

Figura 6: Cantidad de municipios con presencia de la OVA, Antioquia, 2016-2017 (nov.)

	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburrá	TOTAL ANTIOQUIA
OVA	0	0	2	0	0	9	10	0	6	27

Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

Otras estructuras paramilitares, son grupos posicionados principalmente en el Valle de Aburrá que se coordinan generalmente con las AGC o la OVA¹¹ para ejercer control, en otras ocasiones mantienen, cierto nivel de autonomía. Varios de estos grupos han estado en los municipios o barrios por décadas.

¹⁰ Blue Radio, 12 de mayo, 2017: Autoridades colombianas confirman vínculo del Clan del Golfo con carteles mexicanos.

¹¹ El 65% de estas estructuras son controladas por la OVA. (El Colombiano, 2017)

Figura 7: Principales grupos que componen Otras estructuras paramilitares

Estructura	Grupo
Otras estructuras paramilitares	Banda Los Johnis, Botalones, El Laberinto, La Cabaña, El Mesa, Los Guarneños, Los Pamplona, Los Payasos, La Piedra, Los Pelipintados, Los Viejos, Montero, Niquia Camacol, La Miel, La Unión, San Pablo, Trianón, La Sexta, La Agonía, Soto, La Camila, Los Conejos, Los Pragas, Los Chamizos, Los Pájaros, Pesebreros, Chiquitines, Chivos, Picacho, Mondongueros, Robledo.

Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

Según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), en el Valle de Aburrá “hay por lo menos 500 bandas criminales, también denominadas Bacrim, en las que delinquen más de 13 mil personas (...) Solo en Medellín hay 350 grupos criminales”. En el caso de Medellín, muchos de los denominados “combos” se coordinan u obedecen a la OVA o las AGC.

Figura 8: Cantidad de municipios con presencia de otros grupos armados, Antioquia, 2016-2017 (nov.)

	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburrá	TOTAL ANTIOQUIA
Otras estructuras	3	1	0	0	0	5	8	0	2	19
Clan Isaza	0	4	0	0	0	10	0	0	0	14
Pachelly	0	0	4	6	0	0	0	0	1	11
ACN	0	0	0	3	0	1	0	0	5	9
Los Chatas	0	0	0	0	4	1	0	0	1	6
Triana	2	0	0	1	0	0	0	0	2	5
Nueva Generación	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Rastrojos	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
La Mano que Limpia	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Águilas Negras	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CONVIVIR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

El Clan Isaza tiene presencia importante en 14 municipios, principalmente en el Oriente de Antioquia.¹² Esta estructura, heredera del poder de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) comandadas por Ramón Isaza y alias MacGiver, ejerce dominio y control junto con las AGC, la OVA y la ACN.

En el casco urbano de San Francisco hace presencia un grupo paramilitar que se presume son desmovilizados del Frente José Luis Zuluaga, que fue comandado por alias MacGiver (ACMM). Este grupo es coordinado por alias Miranda quien al parecer continúa bajo el mando de Ramón Isaza. Es de resaltar que al parecer MacGiver tiene relación con la estructura Los Pamplona para evitar la entrada de las AGC al territorio. En 2016 se presentó la muerte de alias Patillas, quien tenía al mando 40 hombres armados en la zona de Río Verde y el Melcocho y allí se presentaban como AGC. Para 2017 Río Verde y el Cañón del Río Santo Domingo no reportaron presencia paramilitar”. (Testimonio de un participante, 2017, p. 2)

Según la Fundación Ideas para la Paz (2017), el Clan Isaza se encuentra en los municipios de “Puerto Nare, Puerto Triunfo y San Luis”. En la cartografía social, se referencia su presencia en otros municipios. Este grupo no se ciñe a una dinámica

¹² De acuerdo con la Cartografía realizada y otras fuentes consultadas, se reporta la presencia del CI en municipios como Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón. Sin embargo no se ha podido precisar actos de estas estructuras entre 2016- 2017, lo que no indica que no operen en los territorios.

exclusivamente económica de “prestación de servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de ‘arriendo’ y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga” (p.7), sino que ejercen control social y presionan a las comunidades por ejemplo, para la venta de tierras.

Es importante señalar el poder que han adquirido estructuras como Los Chata (9 municipios), Los Pachelly (10), Los Chamizos y La Raya (estos dos últimos solo en Medellín), que hacen presencia tanto individualmente en Bello y Medellín, como en coordinación con las AGC, para expandir su poder a otras subregiones (ACN).

La ACN, que no es otra cosa que el conglomerado o la confederación de bandas de Bello y Medellín. No cualquier banda hace parte de esta: Pachelly, Chatas, Mesa, Chamizos o BJ, La Raya, entre otras, auspiciadas por las AGC y que han venido expandiéndose en el territorio urbano y rural de Antioquia. Es una realidad que preocupa. Lo que pasa en la comuna 16, el principal centro electoral de Medellín, está en manos de ACN. (Análisis Urbano, 2017a, párr. 2)

La ACN (Oriente, Norte y Valle de Aburrá) surge al interior de la OVA. Facción apadrinada por las AGC, no están subordinados sino que se coordinan para ejercer dominio territorial, social y económico. Actualmente, se posicionan como una fuerza determinante y autónoma en el marco de las estructuras paramilitares de Antioquia.

Los Triana han tenido presencia histórica en la zona nororiental de la capital, especialmente en la comuna 2 - Santa Cruz. También se reporta su presencia en las comunas de: Popular, Robledo, Aranjuez, y en el municipio de Bello. Durante 2017, este grupo ha llegado al Bajo Cauca (Tarazá y Cáceres) y al Norte (Yarumal).

Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), conformadas por 35 grupos, se ubican en la ciudad de Medellín, principalmente en la comuna 10 - La Candelaria (centro de la ciudad). “Esta estructura delincriminal mal llamada “convivir” actualmente utiliza como fachadas supuestas cooperativas de trabajo y asociaciones de vigilancia, las cuales no tienen sedes establecidas ni legalidad definida, según las autoridades” (Minuto 30, 2017, párr. 4). Su fuerte presencia en el centro obedece al alto número de establecimientos comerciales. Estos grupos ejercen control del espacio público, extorsionan a los comerciantes, coordinan plazas de vicio y ejercen violencia contra personas adictas, habitantes de calle y ladrones. Muchas de estas estructuras son coordinadas por la Terraza (OVA).

La presencia paramilitar coincide con las dinámicas económicas ilegales y un mayor nivel de coerción a las comunidades ya extorsionadas, despojadas de la tierra o de vivienda, perseguidas y, en algunos casos, asesinadas por no querer continuar con la siembra de cultivos de uso ilícito. A esto se suma, la imposición de comprar los productos de la canasta familiar a grupos de personas que gozan del patrocinio de estas estructuras (Medellín), los pagadarios, el contrabando, el manejo de minas ilegales, las rentas de la cadena del narcotráfico, incluido el microtráfico, la trata de personas, en especial la explotación sexual, la seguridad a establecimientos comerciales, el cobro de dinero por ejecución de proyectos del Estado o de infraestructura y vivienda privada¹³, entre otros.

¹³ Caracol Radio, 21 de junio, 2017: Autoridades de Antioquia crean plan contra extorsiones a constructores.

Conforme al ejercicio de cartografía de dinámicas económicas, 88 municipios reportan microtráfico; 42, presentan extorsión¹⁴ (denuncias ubicadas en los mapas); 36, siembra de cultivos de uso ilícito; 30, minería ilegal; 29, explotación sexual - trata de personas; 27 tienen laboratorios para procesamiento de drogas; en 26 hay comercialización de droga y 17 tienen riesgo por erradicación de cultivos de uso ilícito. En el caso de Urabá, se ha presentado la compra de tierras, presumiblemente por las AGC a través de terceros, para construir infraestructura (carretas y vivienda) como parte de su “política social”. Además, 27 municipios tienen megaproyectos que podrían ser un fortín en términos de extorsión.

En cuanto a las dinámicas sociales y territoriales, durante 2016 - 2017, 124 de los 125 municipios de Antioquia reportaron homicidios y 121 desplazamiento forzado. Además, en 45 municipios se reportó desaparición forzada y en 30, Minas Antipersonal-Munición Sin Explotar-Artefactos Explosivos Improvisado (MAP-MUSE-AEI). En la cartografía hay 22 municipios con comunidades étnicas, 29 con procesos de microfocalización de tierras, uno con proceso de zona de reserva campesina y varios con procesos de solicitud de reclamación de tierras. Este entramado social se encuentra en riesgo por a la fuerte presencia y control de los grupos paramilitares.

A estas dinámicas sociales se suma la persistente presión de los paramilitares sobre la vida organizativa de las comunidades. En Bajo Cauca, Urabá y Norte, estos grupos han citado a líderes sociales para expresarles su “apoyo” como parte de una agenda social y política caracterizada por el desarrollo de programas comunitarios (viviendas, carreteras, brigadas de salud, conservación del medio ambiente, etc) y el acercamiento no violento (inicialmente) a comunidades y organizaciones. La finalidad es controlar las dinámicas organizativas y transformarlas en función de sus propios objetivos.

La situación de control y avance paramilitar ha sido evidenciada por las organizaciones sociales y por la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que ha emitido 9 Informes de Riesgo (2016 - 2017) sobre algunos de los municipios de Antioquia: Briceño (2), El Bagre (1), Medellín (1), Remedios y Segovia (1) e Ituango (1). En el caso de Urabá se han emitido 3 informes para los casos de: Apartadó, Turbo, y Carepa y Chigorodó. En todos estos informes se hace referencia al peligro que representa la presencia paramilitar.

La presencia ubicua de grupos paramilitares en Antioquia es resultado del poder que han acumulado las AGC y la OVA y del surgimiento de alianzas (ACN) que parten del Valle de Aburrá hacia las zonas rurales del departamento. El fortalecimiento de las estructuras de carácter más local conlleva graves riesgos para los pobladores ya que el poder y control que ejercen se traduce en homicidios, desplazamientos y desapariciones. Además realizan un fuerte ejercicio de coerción social y económica, impidiendo a las comunidades vivir de manera libre, sin temor y con plenos derechos, entre ellos los de expresión, asociación y organización.

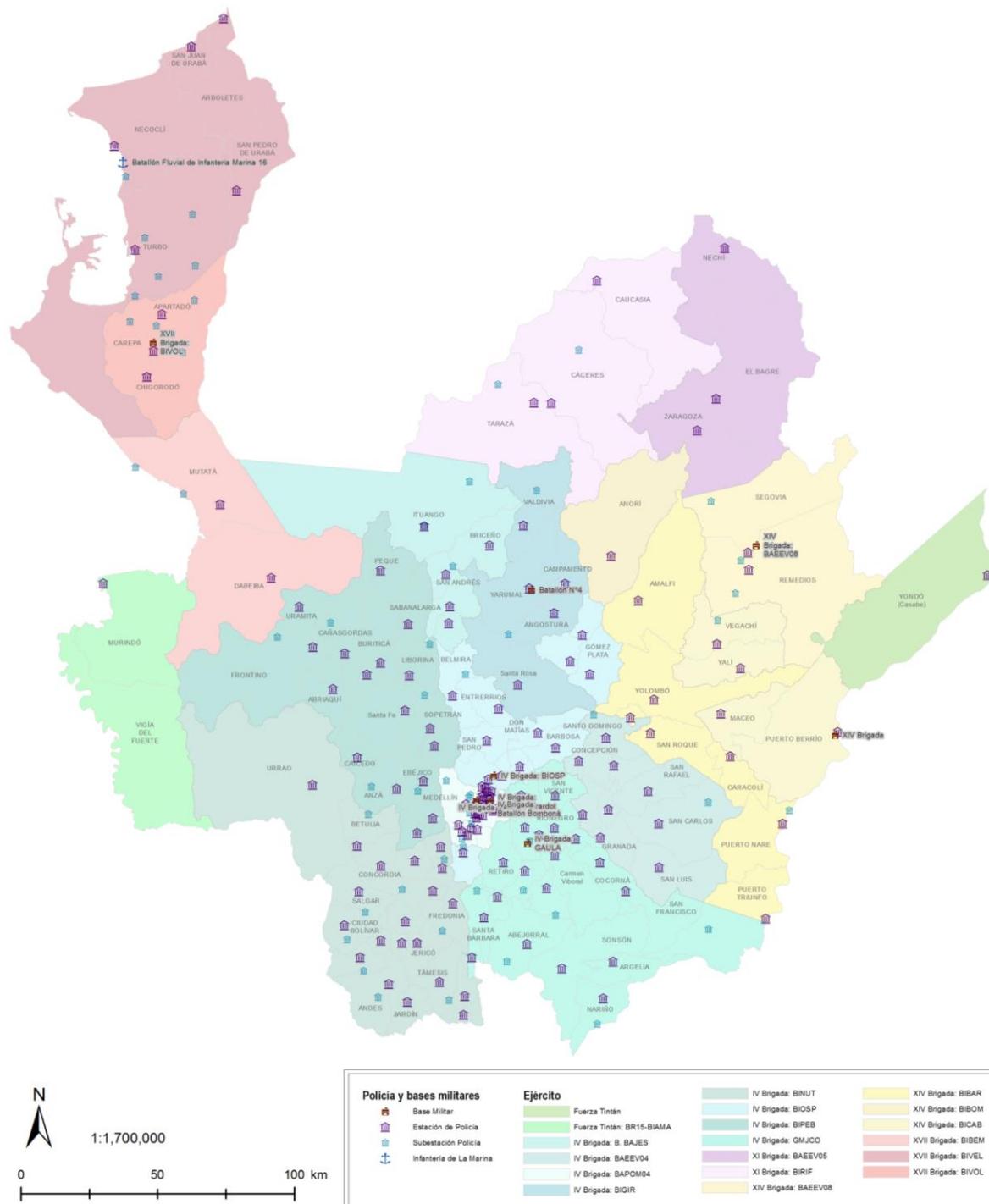
¹⁴ De acuerdo con la información suministrada por el departamento de Policía de Antioquia entre 2016- 2017 se han registrado 262 casos de extorsión. Estos datos no contienen registros de Valle de Aburrá y Urabá

En este contexto, una de las cuestiones que podría plantearse es: ¿qué funcionalidad e importancia tiene el crear alianzas, principalmente entre grupos del Valle de Aburrá y las AGC? En principio, estas alianzas permiten que los primeros puedan expandirse a otros municipios. Tal es el caso de la ACN y Los Triana. En consecuencia, se aseguraría que en una posible “negociación de las AGC con el Estado” queden imperando en los territorios los grupos paramilitares provenientes del Valle de Aburrá a través de estas alianzas. De concretarse este escenario, estaríamos ante una tercera fase de reingeniería paramilitar y ante una nueva fallida desmovilización de estos grupos. Otra lectura sobre la funcionalidad de la ACN, es que grupos como Los Pachelly, El Mesa, Los Chatas o Los Triana buscarían en estas alianzas con las AGC adquirir reconocimiento para iniciar una posible negociación con el Estado.

Presencia de fuerza pública en Antioquia

En Antioquia, la Policía Nacional hace presencia a través del Departamento de Policía de Antioquia, el Departamento de Policía de Urabá y el Departamento de Policía del Valle de Aburrá. El Ejército Nacional, con la Séptima División, cubre todas las subregiones contando con aproximadamente 23.000 efectivos.

Figura 9: Mapa presencia de fuerza pública en Antioquia



Fuente: Policía Nacional- Ejército Nacional.

Durante 2016 – 2017, el Ejército Nacional reportó 2.636 operaciones militares (1.492 en 2016 y 1.144 hasta octubre 2017) contra estructuras armadas ilegales principalmente en Urabá, Valle de Aburrá, Occidente y Bajo Cauca.

Figura 10: Operaciones realizadas por el Ejército Nacional, Antioquia, 2016-2017 (oct.)

AÑO	DELINCUENCIA	GAO	GDO	NARCO
2016	881	594	6	11
2017	668	404	64	8
TOTAL	1.549	998	70	19

Fuente: Cartografía del proceso social de garantías, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

Por su parte, la Policía Nacional - Departamento de Policía de Antioquia¹⁵ reportó que desde 2016 realizó 99 operaciones contra Bandas Criminales (BACRIM), Grupos Armados Organizados (GAO), y Grupos Delictivos Organizados (GDO), resultando en 339 capturas en 2016 y 255 en 2017 (hasta octubre). Además reportan haber incautado 46 armas en 2016, y 31 en 2017 (hasta octubre).

Aunque la fuerza pública, Policía Nacional y Ejército Nacional, ya hace presencia en los territorios de Antioquia, este año, el gobierno central dispuso para el combate contra las organizaciones paramilitares más de 3.000 efectivos adicionales. La misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Agamenón, apoyada por los Estados Unidos pretende reducir a las AGC¹⁶. En este sentido se debe señalar que no se trata exclusivamente del aumento del número de efectivos, sino ante todo, de desmontar las relaciones de connivencia existentes entre miembros de la fuerza pública¹⁷ y de otras instituciones estatales con estas estructuras paramilitares. Ejemplo de esto es el ex Secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas quien fue detenido por sus presuntos nexos con la OVA en junio de 2017. Aunque se presenten resultados, la connivencia sigue siendo un notable obstáculo para avanzar hacia el desmonte del paramilitarismo y asegurar la vida e integridad de las comunidades.

Es mucho más la alianza con el Ejército Nacional que con la Policía, pero en la zona rural. En lo urbano es con la Policía. Eso es evidente, por ejemplo, en Turbo, todo el mundo sabe en dónde quedan las casa de vicio, ellos las cuidan. Los combos, realmente son de los Gaitanistas y les obedecen, además, hacen el control político, económico y territorial. (Testimonio de participante, 2017, p.1)

Las personas que capturan muchas veces en la comuna 2 de Medellín son presentadas como mandos importantes y en realidad son carritos¹⁸, es decir, que no tienen poder en el grupo. La Policía sabe esto y aun así son presentados como grandes resultados; por ejemplo Los Triana muchas veces mantienen¹⁹ a estos pelaos que son detenidos en las cárceles porque ellos resguardan los verdaderos mandos. (Testimonio de participante, 2017, p.7)

El padre Javier Giraldo (...) Acerca de la situación de la comunidad de San José de Apartadó: “la Comunidad ha denunciado presiones del paramilitarismo, pero a la Alcaldía, la Brigada XVII y la Defensoría del Pueblo, les dio por ir a una verificación. Fue algo muy formal y fugaz. Se nota que buscaban ocultar lo que pasaba. Fueron con periodistas, descendieron del helicóptero unos momentos y les preguntaron a los habitantes si había paramilitares. Obviamente, con paras ahí, ¿quién dice que sí? (El Espectador, 2016a, párr. 9)

Seis policías, entre ellos uno de la Policía de Antioquia, dos de la Sijín Metropolitana, tres policías de cuadrantes en Bello, fueron capturados por supuestos nexos con la banda delincuencia “los Chatas”. “Estas capturas obedecen a un vínculo que existía de seis

¹⁵ Esta información no contiene los datos de la Policía de Urabá ni del Valle de Aburrá, solo del resto de las subregiones.

¹⁶ El Tiempo, 22 de junio, 2017: Policía liderará Fuerza de Tarea Conjunta contra el Clan Úsuga.

¹⁷ La Vanguardia, 12 de octubre, 2016: Capturan a 21 militares y policías por nexos con las bandas criminales.

¹⁸ Son jóvenes y a veces menores de edad que en las comunas llevan a cabo tareas de inteligencia, vigilancia y cuidado de los lugares donde se venden drogas, llevan recados a los mandos y están alertas para avisar sobre la presencia de la fuerza pública.

¹⁹ Manutención económica.

uniformados de diferentes especialidades con la organización delincriminal “los Chatas”. Muchos omitían actuar ante la presencia de estos delincuentes, otros lógicamente percibían algún dinero”, indicó el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. (El Colombiano, 2016a, párr.1)

Durante el periodo de estudio se han reportado casos que constata la omisión de la fuerza pública para garantizar la seguridad de la ciudadanía ya que no se han tomado las medidas pertinentes para proteger a las comunidades. Un ejemplo es el desplazamiento reportado en Puerto Claver, El Bagre, donde 570 personas tuvieron que abandonar el territorio por enfrentamientos entre las FARC-EP²⁰ y las AGC (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 007-16, 2016b, p.5) y donde hace presencia el Batallón Especial Energético Vial N°5. En la vereda Pio X de Ituango hubo desplazamiento forzado de 12 familias (31 personas) (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037, 2017a, p.15), a pesar de estar ubicada a menos de 10 minutos del casco urbano donde hay efectivos de la Policía Nacional. Incluso en zonas de intensa presencia de la fuerza pública (municipio de Medellín), se reportan casos como el desplazamiento de 76 personas del corregimiento de Altavista (Defensoría del Pueblo- SAT, 2017, Informe de Riesgo N°033, 17, 2017d, p.4).

Otra forma de omitir el papel de garante y de protección por parte del Estado, es el no realizar investigaciones contra quienes hostigan, torturan, y persiguen a las comunidades y ejercen control territorial bajo las prácticas del terror y el miedo.

Dinámica de violencia y conflicto

Durante 2016 - 2017 (hasta septiembre), la Policía Nacional reportó 3.251 homicidios en Antioquia. La subregión con más casos fue Valle de Aburrá, principalmente por los 1.322 casos reportados en Medellín. Esta gran cantidad de homicidios obedecen principalmente a la dinámica de violencia que generan las aproximadamente 350 estructuras armadas que operan en la ciudad, además de las disputas territoriales y la reacomodación de los grupos armados que fluctúa de acuerdo a los intereses de las AGC y la OVA²¹.

Figura 11: Cantidad de homicidios y tasa de homicidio en Antioquia, 2016-2017 (sep.)

Subregión	2016		2017 (hasta sep.)		Total
	cantidad	Tasa	cantidad	tasa	
Bajo Cauca	147	48,2	94	41,1	241
Magdalena Medio	38	32,4	45	51,1	83
Nordeste	118	62,7	87	61,6	205
Norte	117	44,8	97	49,5	214
Occidente	117	58,5	78	52,0	195
Oriente	160	27,3	69	15,7	229
Suroeste	213	56,5	154	54,4	367
Urabá	203	29,4	192	37,0	395
Valle de Aburrá	757	19,8	565	19,7	1.322

²⁰ Los combates presentados entre las FARC- EP y las AGC, en el primer semestre de 2016, no significó en ningún caso un acto violatorio al Cese Unilateral al Fuego decretado por la insurgencia.

²¹ RCN, 1 de agosto, 2017: Alerta en Medellín por altos índices de homicidios.

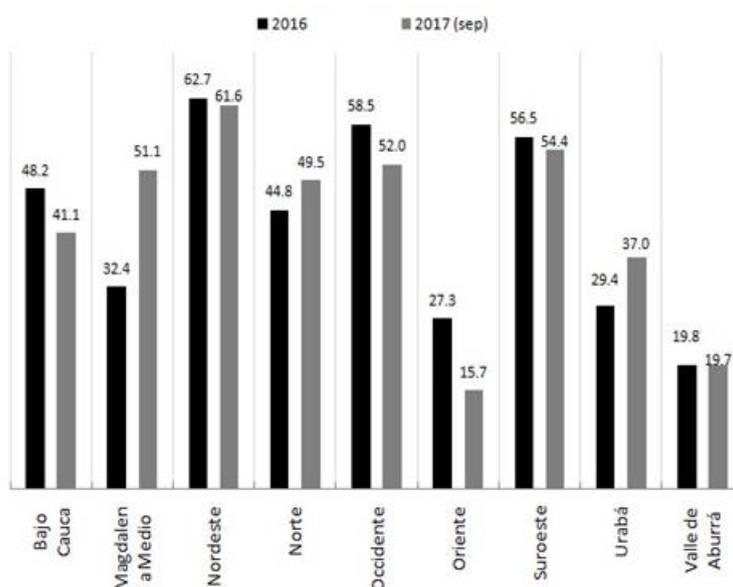
TOTAL	1.870	28,6	1.381	21,1	3.251
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Fuente: Policía Nacional: homicidios; Medicina Legal y cálculos propios: tasas de homicidio

Durante el periodo, la tasa más alta de homicidio se reportó en el Nordeste Antioqueño, con mayor número de homicidios en Segovia (84) y Remedios (35), territorios en donde los paramilitares están en permanente disputa por el control de las minas de oro y el negocio del narcotráfico. A esto se suma la disputa territorial por parte del ELN, quien busca consolidarse en antiguos territorios de las FARC. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo:

En los municipios Segovia y Remedios, el riesgo actual para la población civil como consecuencia del conflicto armado, se deriva de la disputa territorial que desde enero de 2016 ha tenido lugar entre los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, las AGC y la llamada Nueva Generación así como por las acciones que la guerrilla del ELN adelanta en la zona con el fin de fortalecerse militar y territorialmente ante una eventual dejación de armas por parte de las FARC. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 007-16, 2016b, p.1)

Figura 12: Tasas de homicidio en Antioquia 2016-2017 (sep.)



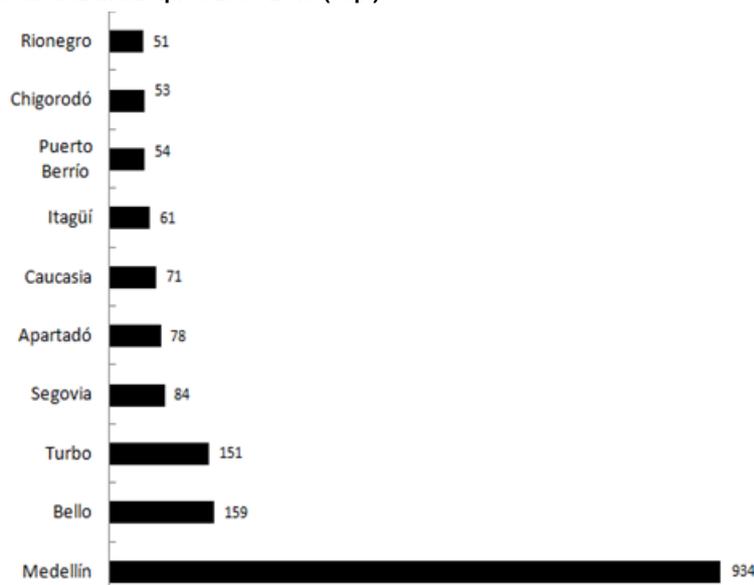
Fuente: Datos de Medicina Legal y cálculos propios

Durante 2017, Norte, Urabá y Magdalena Medio exhiben un incremento en la tasa de homicidios.²² En el Magdalena Medio²³, de acuerdo con la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), el aumento de homicidios, el más pronunciado de Antioquia, obedece principalmente al control territorial por parte de los grupos paramilitares que operan en la zona más que a un simple asunto de narcotráfico.

²² Caracol Radio, 6 de junio, 2017: Turbo es el segundo municipio con mayor tasa de homicidios en Colombia.

²³ Dígame, 20 de septiembre, 2017: Subió 81% tasa de homicidios en el Magdalena Medio.

Figura 13: Homicidios en diez municipios 2016-2017 (sep.)

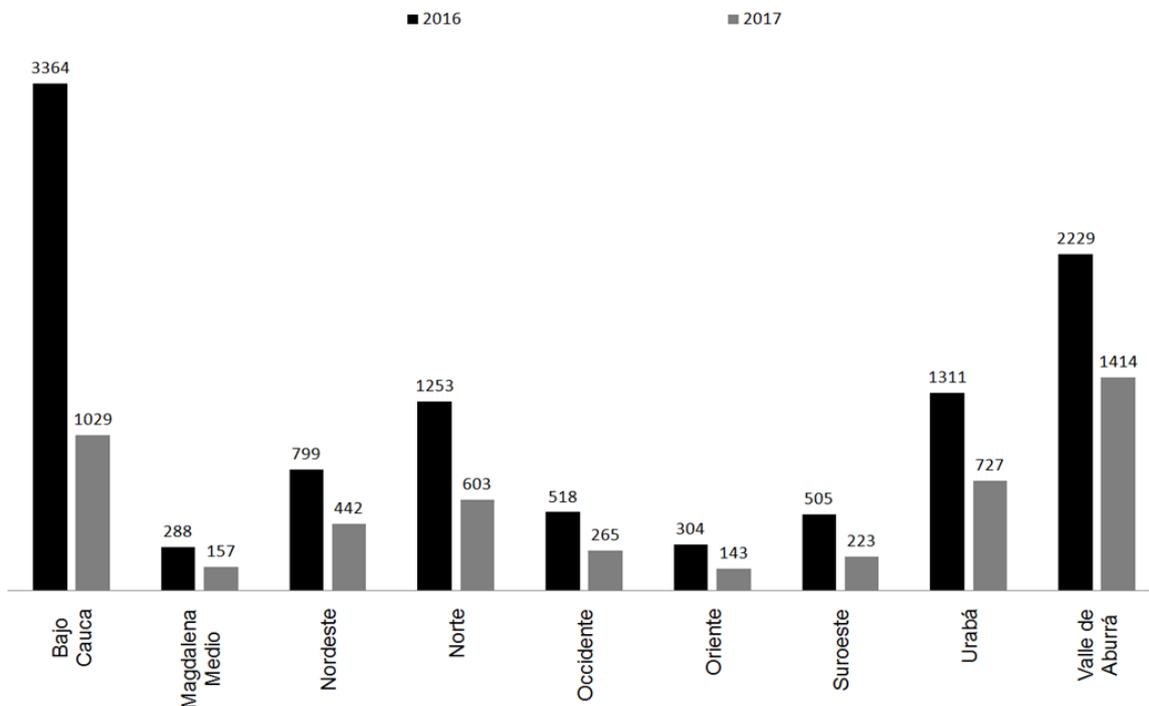


Fuente: Policía Nacional

En 2017, tres exguerrilleros de las FARC fueron víctimas de homicidio, todos en el municipio de Ituango, donde se instaló una Zona Veredal que hoy se denomina Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. El primero fue Juan Fernando Amaya, asesinado el 12 de julio de 2017 en la vía que conduce al corregimiento de la Granja. Jesús Adán Mazo fue asesinado el 14 de agosto de 2017 en la vereda Santa Lucía, a pocos metros de la antigua Zona Veredal, donde había presencia de la fuerza pública. El último caso reportado fue el asesinato de Daladier Ortiz el 11 de noviembre en el casco urbano de Ituango. También se han asesinado a familiares de exguerrilleros, como a la familia de Guillermo León Osorio el 27 de abril de 2017 en el barrio María Gaín de Tarazá, donde mataron a tres familiares suyos, incluida a una menor de edad de 14 años (Alberto Elías Osorio Chancí, Kelly Tatiana Henao y la menor Marcela Osorio).

En Antioquia la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) ha registrado 15.574 casos de desplazamiento forzado durante 2016 - 2017, de los que 10.571 fueron en 2016 y 5.003 en 2017 (hasta octubre).

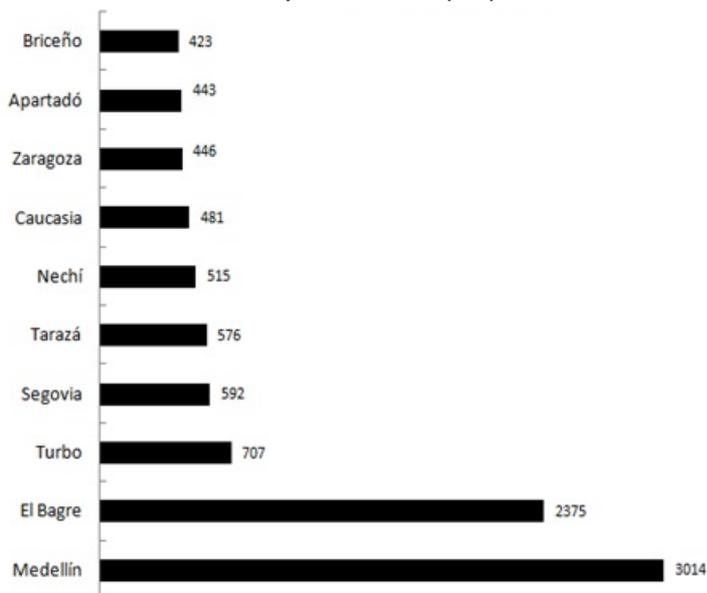
Figura 14: Desplazamiento forzado en Antioquia 2016-2017 (oct.)



Fuente: UARIV

El Bajo Cauca, Vallé de Aburrá y Urabá fueron las principales subregiones victimizadas. De acuerdo con la UARIV (2017), 10 municipios concentraron el 61% de los casos de desplazamiento durante este tiempo.

Figura 15: Desplazamiento forzado en diez municipios 2016-2017 (oct.)



Fuente: UARIV

De acuerdo al Instituto Popular de Capacitación- IPC (2015) y retomando datos de la Unidad de Planeación Minero Energética, tres de los municipios, El Bagre, Caucaasia y Segovia producen dos terceras partes de todo el oro extraído en Antioquia (p. 241). Todos los municipios tienen una alta presencia y actividad paramilitar, además de disputas territoriales con el ELN. A esto se suman los

combates entre la fuerza pública principalmente, con el ELN²⁴. Medellín, Turbo, Apartado, Segovia y Cauca aparecen tanto en los 10 municipios con más homicidios, como en los 10 con más desplazamiento forzado, esto indica la intensidad del conflicto en estas zonas.

En informes de la Defensoría del Pueblo se advierte del riesgo en que se encuentra la población civil y del desplazamiento forzado que provocan las confrontaciones armadas, las amenazas, la extorsión, los señalamientos y los homicidios:

Urabá: la expansión de las AGC para ejercer el control social y territorial de áreas rurales y urbanas del municipio, se ha constituido en un hecho que incrementa el riesgo de que se produzcan, contra la población civil, amenazas, confinamiento, reclutamiento forzado, utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; señalamientos, constreñimiento electoral, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, nuevas estrategias de despojo sobre zonas de interés económico estratégico y, presiones contra líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal y campesinos y campesinas (particularmente los vinculados a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó), integrantes de partidos políticos como la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, al igual que contra defensores y defensoras de derechos humanos incluyendo acompañantes internacionales e integrantes de organizaciones no gubernamentales – ONG. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 035-16, 2017b, p.4)

Segovia y Remedios: Si bien la consolidación de un actor armado ilegal, supondría la disminución de la vulneración a los derechos humanos en tanto desaparece la confrontación, el copiamiento del territorio “ganado” implica el mantenimiento del control alcanzado, por lo que los actos de intimidación, la limitación de las libertades y la regulación de la vida cotidiana, continuaron imponiéndose sobre la población de los municipios de Segovia y Remedios, exacerbándose nuevamente a partir de 2016 cuando emergen en el escenario visos de una nueva confrontación, esta vez entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los llamados Nueva Generación que desde el mes de julio del presente año han venido retomando el apelativo de Seguridad Héroes del Nordeste (...) De lo registrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en términos generales los hechos victimizantes frente a los cuales se ha reconocido hasta el momento un mayor número de víctimas en los municipios de Segovia y Remedios han sido en su orden el desplazamiento forzado, la amenaza y el homicidio. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N°029- 16b, p.11)

Briceño: Por información allegada a la Defensoría del Pueblo, de las 38 veredas que conforman el municipio, un total de 10 veredas se encuentran en particular riesgo como consecuencia de las reiteradas amenazas que viene profiriendo presuntamente el grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, contra la población que habita las veredas La Calera, Orejón, Alto de Chirí, Buena Vista, La Mina, Berlín y San Pedro pertenecientes al corregimiento Pueblo Nuevo y las veredas La América, La Vélez y Travesías. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 006-16, 2016d, p.1)

Como evidencia la Defensoría del Pueblo, muchos casos de desplazamiento forzado están ligados a la presencia de estructuras armadas ilegales. Se destaca la expansión de las AGC, que en subregiones como el Norte, Urabá, Bajo Cauca y el Nordeste vienen asentándose en antiguos territorios de las FARC, lo que ha generado gran temor entre la población. En el caso de la ciudad de Medellín, la presencia de estructuras paramilitares, su disputa por el control de los barrios y las amenazas a la población generan esta grave situación.

²⁴ El Colombiano, 13 de septiembre, 2017: En 2017, el ELN ha perdido nueve cabecillas en Antioquia.

Urabá: Con el propósito de controlar las zonas y áreas geográficas dejadas por las FARC-EP, particularmente aquellas en que existen: intereses políticos y económicos para implementar proyectos de explotación agroindustrial, recursos naturales o proyectos minero energéticos, o economías ilícitas (tráfico de drogas, armas y personas), las cuales permitan obtener rentas ilegales a las AGC, estas han expandido su accionar hacia las veredas del corregimiento de San José de Apartadó. La dinámica armada de estas estructuras que hacen presencia en los municipios afecta a la población civil y también a los líderes y defensores de derechos humanos quienes se encuentran en grave riesgo. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 035-16, 2017b, p.5)

La incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de Ituango, comenzó a sentirse con mayor rigor a lo largo del mes de enero de 2017, cuando iniciaron sus recorridos por la zona rural en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas, intimidando con ello a los habitantes de las veredas Pascuita, Villegas, El Recreo y Camelia Baja en el corregimiento Santa Rita, vereda La América en el corregimiento El Aro, veredas Chontaduro y El Zancudo en el corregimiento La Granja y las veredas El Cedral, Guacharaquero y Santa Ana. Uno de los elementos que con mayor énfasis han señalado las AGC a las comunidades, es que su interés primordial radica en la permanencia de los cultivos de uso ilícito a fin de controlar hegemonícamente la cadena de producción, procesamiento y comercialización. Sin embargo, en su actuar se registran otras conductas vulneradoras: La restricción de las libertades personales de la población asentada en la zona rural del municipio de Ituango, la permanente amenaza a su vida e integridad personal y los señalamientos contra quienes reivindican y reclaman la garantía de los derechos humanos en la región y contra quienes denuncien la situación de agresiones a DDHH que actualmente se vive en la zona.(Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.5)

Los desplazamientos forzados acontecidos durante 2016 - 2017 demuestran que esta modalidad de agresión continua siendo una estrategia clave para los grupos paramilitares, que siguen despojando a las comunidades de sus tierras y viviendas, y ejerciendo control sobre los pobladores, determinando quienes pueden o no vivir en los territorios y controlando los bienes comunes. Entre 2016 y 2017 se reportó el desplazamiento forzado de siete líderes y defensores de derechos humanos en Antioquia. Los desplazamientos ocurrieron en Medellín, El Bagre, Carepa, Apartadó y Armenia Mantequilla (Observatorio sobre el Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Líderes y Lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz, 2017).

En este contexto territorial, se debe señalar que los líderes sociales y defensores de derechos humanos, continúan siendo víctimas del accionar paramilitar, de la fuerza pública y de grupos desconocidos. Además del desplazamiento forzado, se resaltan dos modalidades adicionales de agresión a líderes: los homicidios y las amenazas tanto individuales como colectivas.²⁵

²⁵ En la última década, a nivel nacional, se han registrado más de “3.000 casos de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos incluyendo...más de 500 (...) asesinados” (Somos Defensores, 2017, p.47). Durante 2016, según el Centro de Investigación y Educación Popular para la Paz (CINEP), 101 defensores fueron asesinados y en 2017 (primer semestre) se registraron 52 casos (Somos Defensores, 2017, p.47). Estas agresiones no son aisladas, al contrario, conforman dinámicas persistentes que buscan “eliminar” a quienes denuncian y exigen cambios en las estructuras de poder. Se han reportado agresiones principalmente en “Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. El asesinato del 70% de las víctimas que tenían rol de liderazgo ocurrió en

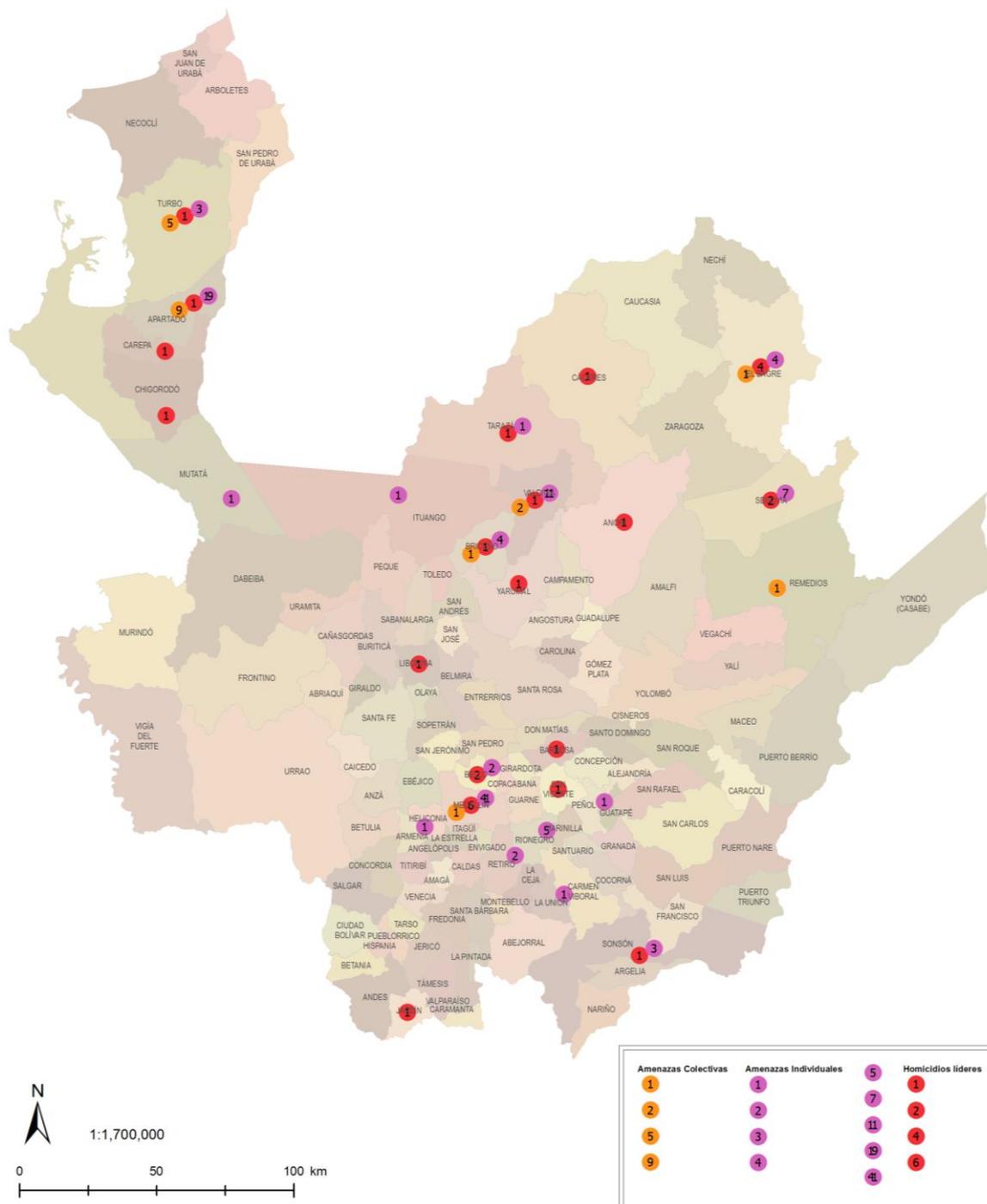
De acuerdo con el Observatorio sobre nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia, durante 2016 se reportaron 207 agresiones (11 asesinatos) y durante 2017 hasta octubre²⁶, 235 (18 asesinatos). En todo el periodo, 110 han recibido amenazas individuales y 21 procesos organizativos han recibido amenazas colectivas²⁷. Las subregiones con más agresiones son Urabá, Valle de Aburrá, Norte y Nordeste. Territorios, como se evidenció, que con gran presencia de estructuras paramilitares.

áreas dejadas por las FARC. Son lugares donde todos los indicadores de violencia han aumentado” (El Espectador, 2017, párr. 5).

²⁶ Durante la construcción del informe se perpetraron dos asesinatos más contra líderes sociales. Esto fue en el mes de noviembre. Los datos reportados por la Fundación Sumapaz, fueron hasta octubre.

²⁷ El gobierno de Juan Manuel Santos por su parte, niega que se trate de una situación sistemática donde los principales responsables sean paramilitares y fuerza pública (caso más reciente: el asesinato de campesinos en Tumaco por la Policía Nacional). A la pregunta de si los asesinatos de líderes responden a una estrategia específica, el ministro Guillermo Rivera responde: “Reconocemos la gravedad del caso, pero frente a la sistematicidad la información de la Fiscalía muestra que no hay un mismo patrón en los homicidios. Sí son líderes, pero varios crímenes corresponden a razones distintas al liderazgo. Admito que falta acción y que hay que hacer presencia efectiva en zonas que dejaron las FARC” (El Espectador, 2017d, párr.6).

Figura 16: Homicidios y amenazas a líderes en Antioquia, 2016-2017 (oct.)



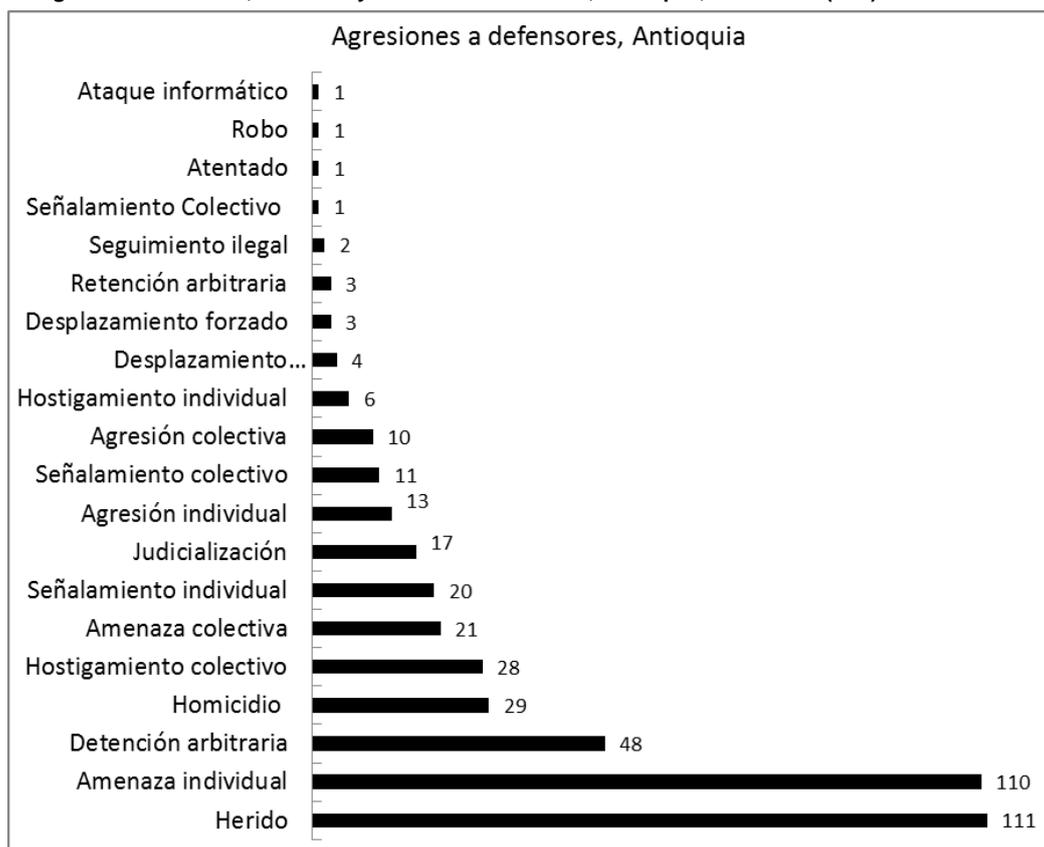
Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

En el 51%²⁸ de los casos de agresiones (2016-2017) registrados por la Fundación Sumapaz, el presunto responsable es la fuerza pública, en el 24% la responsabilidad es de paramilitares y en el 19% de desconocidos. A menudo, las víctimas no pueden establecer el actor que llevó a cabo el hecho y otras veces, el

²⁸ Durante el periodo, la mayoría de agresiones fueron cometidas por la Policía Nacional (200 casos), en especial por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, responsable de 162 agresiones, todas en el marco de protestas sociales. El caso de Remedios y Segovia (73 agresiones, incluidos 2 homicidios), evidencia el tratamiento de guerra que el Estado da a la protesta y movilización social.

miedo impide la denuncia, pero se debe enfatizar que en el escenario territorial se impone la fuerza de los grupos paramilitares, quienes podrían ser los autores.

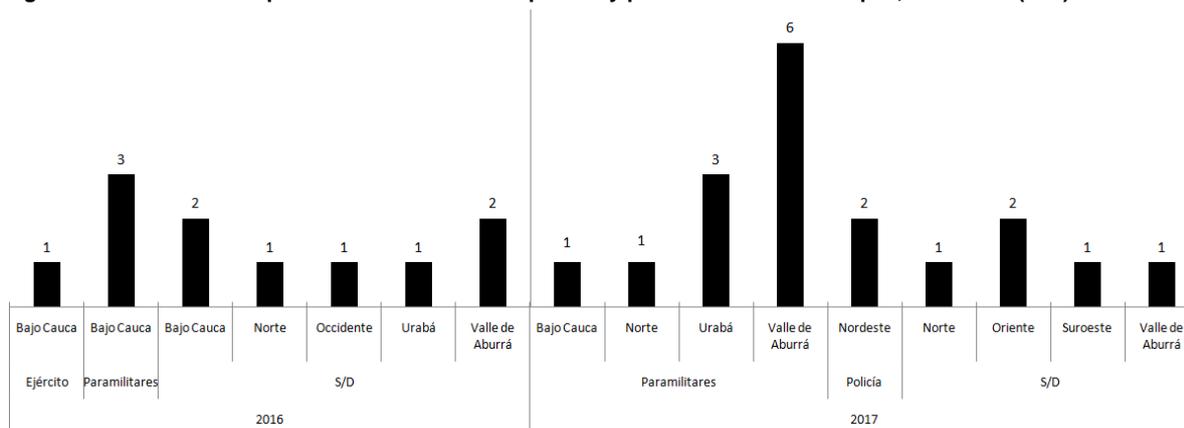
Figura 17: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH, Antioquia, 2016–2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Los paramilitares son los principales responsables de los homicidios de líderes (14 casos). Los dos territorios que más homicidios de líderes reportan, son el Valle de Aburrá, seguido por el Bajo Cauca, donde han sido las AGC quienes han asesinado a la mayoría de los líderes (3 de 7). En Urabá, los 3 casos presentados en 2017, según se denuncia, son de responsabilidad de las estructuras paramilitares, en cuyo caso serían las AGC, único actor presente en la subregión.

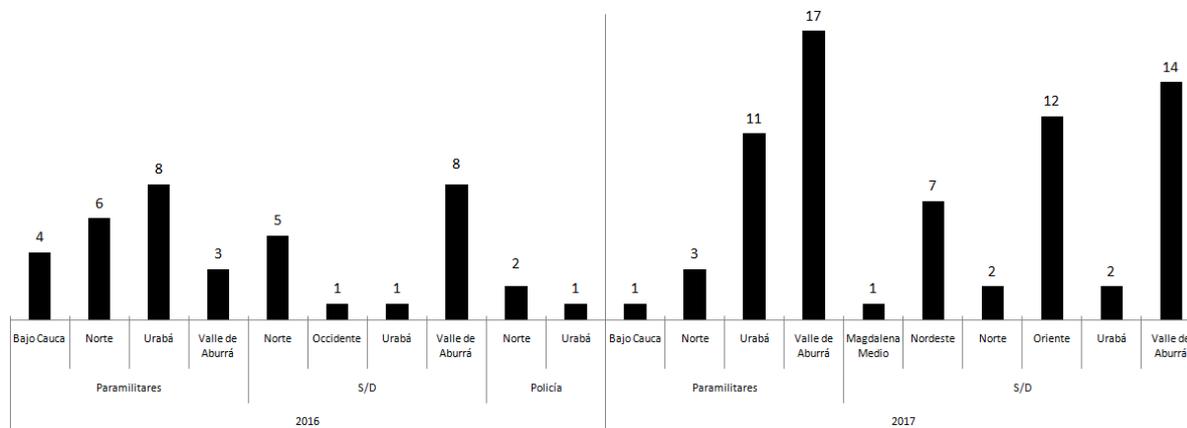
Figura 18: Homicidios responsabilidad de la fuerza pública y paramilitares en Antioquia, 2016-2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Entre los responsables reconocidos de amenazas individuales a líderes y defensores durante 2016 - 2017, son de nuevo los paramilitares los culpables de la mayoría (53 casos). La principal estructura victimaria es las AGC (34 casos). Nuevamente son los territorios como el Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Urabá los que más casos reportan. A este listado se suma el Norte de Antioquia con 9 casos.

Figura 19: Amenazas individuales en Antioquia, 2016-2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Se presentaron 21 casos de amenazas colectivas contra procesos organizativos (2016- 2017), de los cuales 17 son responsabilidad de los paramilitares. De estos, 15 fueron perpetrados por las AGC: Urabá (12 casos), Norte (2) y Bajo Cauca (1). El aumento de agresiones contra procesos organizativos, líderes y defensores en Colombia, y en especial, en Antioquia ha impulsado a la Defensoría a emitir el Informe de Riesgo N°010 – 17, donde señalan los peligros a los que se encuentran sometidos los sectores organizados debido a la actuación y avance de los grupos paramilitares, así como la relación de empresarios con estas estructuras.

Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios. Cambio que en buena medida es consecuencia directa del proceso de concentración y tránsito a la vida civil de las FARC EP en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos con el Gobierno Nacional. El ingreso de nuevos actores armados a estas regiones plantea escenarios de disputa por el control de los mismos y de las economías ilegales que fueran del dominio de las FARC-EP. Estas circunstancias han venido impactando principalmente sobre personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, la restitución de tierras, quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial. A lo anterior se suman los intereses de élites y grupos de poder regionales que han manifestado su oposición a los acuerdos de paz y a las reformas y cambios que estos conllevan, especialmente en lo atinente a medidas de retorno, restitución y reparación en materia agraria. Algunos de estos actores al parecer asociados a grupos armados ilegales, estarían promoviendo amenazas, hostigamientos y atentados en contra de defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, organizaciones y movimientos políticos de oposición, expresados en situaciones de estigmatización, panfletos amenazantes, homicidios y desapariciones forzadas. (Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo N°010- 17, 2017d, p. 18)

La labor de las organizaciones y sus líderes se encuentra en riesgo no solo por la actividad militar de estas estructuras, sino también por el interés de posicionar una agenda social que les permita ser aceptados por las comunidades como un orden legítimo. A través de la cooptación de procesos sociales y la apertura de ONG, tienen como fin determinar los presupuestos comunitarios y direccionar las propuestas organizativas para que sean funcionales a la estrategia paramilitar.

Un posible caso de cooptación podría ser lo acontecido con la Corporación Guadalupe Social en Medellín (comuna 1), cuando en abril de 2017 fue detenida Mara Yuli Toro Castaño, directora de la organización acusada de nexos con el grupo La Terraza perteneciente a la OVA²⁹. La Policía sostiene que “Toro Castaño es señalada de utilizar la ONG, presuntamente, como fachada para movimientos financieros de la banda que delinque en las comunas 3 y 4 (Manrique y Aranjuez) de Medellín”, (El Colombiano, 2017d, párr.2).

La Corporación Guadalupe Social fue fundada en 2009 y desarrolla programas sociales en la zona nororiental de Medellín, por medio de una escuela infantil de fútbol, un comedor comunitario, una asociación de alistadores de buses y jornadas con adultos mayores, entre otros proyectos que incluso han contado con el apoyo de recursos del Presupuesto Participativo de la Alcaldía. (El Colombiano, 2017d, párr.6).

Las agresiones permanentes contra las organizaciones sociales, líderes, defensores y en general, la población civil, surge de la presencia permanente y de prácticas contrainsurgentes de grupos paramilitares. El contexto de Antioquia muestra el alto riesgo de victimización que tienen las comunidades y los sectores organizados, por la fuerte presencia de estas estructuras.

La inoperancia estatal y la pervivencia de relaciones de connivencia entre instituciones del Estado y los grupos paramilitares, impiden desmontar estos grupos estratégicos para preservar el orden social vigente. El alto número de homicidios y de desplazamientos forzados presentado en los territorios, da cuenta de la dinámica armada y su efecto en la vida de las comunidades. Así mismo, las prácticas de disciplinamiento social y el posicionamiento de una agenda comunitaria que los legitime son expresiones de poder y control sobre la vida cotidiana de las comunidades. Como ha sido advertido por las organizaciones sociales y de derechos humanos, de no desmontarse las estructuras paramilitares y poner fin a los nexos entre la institucionalidad y estas estructuras, será imposible avanzar hacia la construcción de una democracia amplia e implementar el Acuerdo de Paz.

En este contexto marcado por la presencia paramilitar, la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y los ataques contra líderes y lideresas sociales, las organizaciones de derechos humanos exigen al Estado el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz, en especial el desmonte de estas estructuras, además, el brindar seguridad a los defensores de derechos humanos y avanzar en los procesos de investigación y judicialización a los agentes estatales que han actuado en connivencia con estos grupos, o por omisión, al no garantizar los derechos de la población. Solo así se lograría que el país realmente avanzara hacia una democracia amplia.

²⁹ A la fecha el proceso judicial sigue en curso.

Casos de estudio

La elección de las subregiones analizadas en este informe fue determinada por la fuerte presencia de grupos paramilitares y los efectos que esta produce. El alto número de homicidios, desplazamientos forzados y agresión contra la labor de las y los defensores de derechos humanos, aparte de ser graves violaciones a los derechos humanos, podrían significar un riesgo para el proceso de reincorporación a la vida civil de ex combatientes de las FARC- EP los cuales se encuentran ubicados en tres de las cuatro subregiones de análisis.

Las subregiones de Nordeste y Valle de Aburrá, son en la actualidad escenarios de disputa entre distintas estructuras paramilitares. Norte y Urabá, sin embargo, presentan una dinámica más consolidada de control por parte de estos grupos. Si bien la fuerza pública hace presencia en todas estas subregiones, su papel es cuestionado por los habitantes, organizaciones del territorio y de derechos humanos del departamento, que reclaman efectividad en la protección y garantía de los derechos humanos, así como la desestructuración de las relaciones de connivencia entre los paramilitares y las fuerzas del Estado.

Las comunidades de las cuatro subregiones claramente son víctimas del control paramilitar, pues estos ejercen presión social y económica sobre la cotidianidad de la población. Este escenario acarrea un alto riesgo para realizar la labor de defensa de los derechos humanos ya que aún persiste la visión contrainsurgente que tiene como objetivo atacar al movimiento social o a cualquier expresión organizativa que pueda poner en tensión el régimen existente. Muestra de ello son las agresiones que entre 2016 y 2017 han reportado los territorios de estudio. A esto se suma el posicionamiento de una “agenda social” marcada por el interés de ganar legitimidad entre las comunidades mientras perduran las amenazas.

Para la CCEEU- Nodo Antioquia, es preocupante la configuración territorial y el impacto que continúa teniendo la vigencia del paramilitarismo sobre la vida de las comunidades, ya que esto, aunado a los incumplimientos del Gobierno en materia de los acuerdos de La Habana, impiden lograr los cambios necesarios para construir una paz estable y duradera. Como espacio de derechos humanos se exige que la Unidad creada en el marco del Acuerdo de Paz que tiene por objetivo combatir este tipo de estructuras, tenga la efectividad establecida, y que se avance de manera efectiva en las investigaciones y sanciones contra los agentes estatales que tienen alianzas con los grupos paramilitares.

Nordeste

El nordeste antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia ubicado en el costado oriental de la cordillera central. Limita con el sur del departamento de Bolívar al noreste y las subregiones del Norte Antioqueño al occidente, Magdalena Medio al oriente, Bajo Cauca al norte, Valle de Aburrá al sureste, y Oriente Antioqueño al sur. Históricamente la subregión ha sido conocida por su potencial minero, especialmente en los municipios de Remedios y Segovia, siendo la

extracción aurífera la principal actividad económica. En menor medida, se presenta producción de caña de azúcar, extracción de madera y ganadería.

La minería, además de configurarse como el centro de la economía, ha sido causa de un conflicto social que viene agudizándose en los últimos años. La presencia en el territorio desde 2010 de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que adquirió a través de la Zandor Capital S.A. el título minero a perpetuidad que antes había poseído la Frontino Gold Mines, ha significado una puja por la imposición de las dinámicas económicas y sociales de la empresa en contraposición a la actividad tradicional minera de estas poblaciones, que involucra todos los niveles de la cadena de producción, como son minas, chatarreros, entables y comercializadoras³⁰.

Debido a la actividad minera y a su ubicación geográfica estratégica para el desarrollo del conflicto que ha vivido el país, el Nordeste antioqueño ha sido escenario de una continua disputa entre diferentes actores armados. El Informe de Riesgo de la Defensoría N° 002- 12, señala que: “El Territorio de los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, tiene un altísimo valor estratégico para la salida y entrada de armas, hombres, coca y minerales: constituye un corredor hacia el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca, que coincide con el paso del oleoducto que atraviesa la región” (p.6).

La zona históricamente ha contado con presencia tanto de grupos guerrilleros como paramilitares. El ELN ha incidido en la región a través del Frente José Antonio Galán, y las FARC con los Frentes 4 y 36 principalmente. En razón de esto, se ubicó una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en la vereda de Carrizal, municipio de Remedios, que reunió a cerca de 200 guerrilleros de las FARC pertenecientes a los Frentes 4, 24, 35 y 37 del Bloque Magdalena Medio; y un Punto Transitorio de Normalización (PTN) en la vereda La Plancha, municipio de Anorí, en donde se concentraron más de 150 guerrilleros del Frente 36.

Paramilitarismo y fuerza pública

Desde principios del decenio de los 80 el nordeste ha sido epicentro de grupos paramilitares. La confluencia de miembros de la fuerza pública, en asociación con civiles y grupos armados ilegales (Villamil, 2016), como Muerte a Revolucionarios del Nordeste, Los Realistas, Macogue, Autodefensas del Nordeste Antioqueño, Grupo de Autodefensas del Nordeste Antioqueño, Fuerza del Pueblo en Acción, entre otros, llevarían a cabo una estrategia contrainsurgente en donde la guerra sucia y la violencia política contra la población civil sería el factor determinante.

En la segunda mitad de los 90, con la consolidación de las AUC como estructura nacional, haría presencia el Bloque Metro, en las zonas del Nus y la Meseta, en municipios como Yolombó, Cisneros, San Roque y Santo Domingo. Además, el Bloque Central Bolívar, dirigido por Julián Bolívar, Ernesto Báez y Javier Montañez alias ‘Macaco’, hizo presencia en la subregión desde finales de los 90, logrando copar varios de los territorios dejados por el Bloque Metro después de la guerra

³⁰ Verdad Abierta, 4 de septiembre, 2017: El problema ancestral de la minería Segoviana.

interna de las AUC, hasta el 2005, cuando se desmovilizaron cerca de 2.000 hombres en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios.

Estos grupos tuvieron un accionar contrainsurgente caracterizado por la realización de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado contra habitantes del territorio y líderes sociales. Expresiones de carácter político de izquierda como el Partido Comunista, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, la Unión Patriótica y A Luchar en los años 80; y organizaciones cívicas, sindicales y de derechos humanos en los 90 fueron exterminadas por la violencia sistemática ejercida por paramilitares y miembros de las fuerzas armadas que arrasó con los movimientos alternativos.

La desmovilización de las Autodefensas no significó el fin de esta estrategia, al contrario, desde entonces se han reconfigurado nuevos actores armados que han modificado algunas de las dinámicas bélicas, aunque manteniendo el control heredado de sus antecesores. Ejemplo de ello son los Rastrojos y las AGC, que posterior a la desmovilización se disputaron el territorio y el control de rutas de narcotráfico, la extorsión a minas y comerciantes, y la explotación aurífera ilegal. Además reclutaron a muchos de los desmovilizados “de manera forzada o voluntaria” (Defensoría del Pueblo, SAT, Informe de Riesgo N° 002- 12, 2012, p. 12).

No obstante, en el año 2012 un acuerdo entre las partes significó la cesión del territorio por parte de los Rastrojos a las AGC³¹, que consolidarían su poder territorial hasta el 2016, cuando nuevos grupos locales como La Nueva Generación, surgirían disputando esta hegemonía.

La actuación de los grupos paramilitares ha contado con el apoyo de sectores y agentes institucionales. Durante los 80 y 90, la conformación de redes con miembros de la fuerza pública y de administraciones municipales para incidir en la subregión fue una práctica recurrente que perdura hasta el presente.

Prueba de ello fue la captura de Carlos Mario Salazar Londoño, alias “Félix”, ex Secretario de Gobierno de Segovia, detenido en la cárcel La Picota, sindicado de concierto para delinquir, de ser presunto integrante de los Rastrojos y de la muerte cuatro mineros en diciembre de 2011³²; y del capitán Javier Francisco Patiño González en 2016, quien se desempeñó como jefe de la SIJIN de Segovia en 2012 y es señalado de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y homicidio³³. En septiembre (2017) fueron capturados cinco patrulleros de la Policía Nacional quienes “exigían dineros para no capturar a los cabecillas e integrantes del

³¹ La Defensoría (2012) señala que una facción de los Rastrojos se negó a entrar en el acuerdo, lo que prolongó la confrontación entre ambos bandos, con evidente supremacía de las AGC.

³² El Espectador, 17 de julio, 2014: A la cárcel exsecretario de gobierno de Segovia por homicidio de mineros.

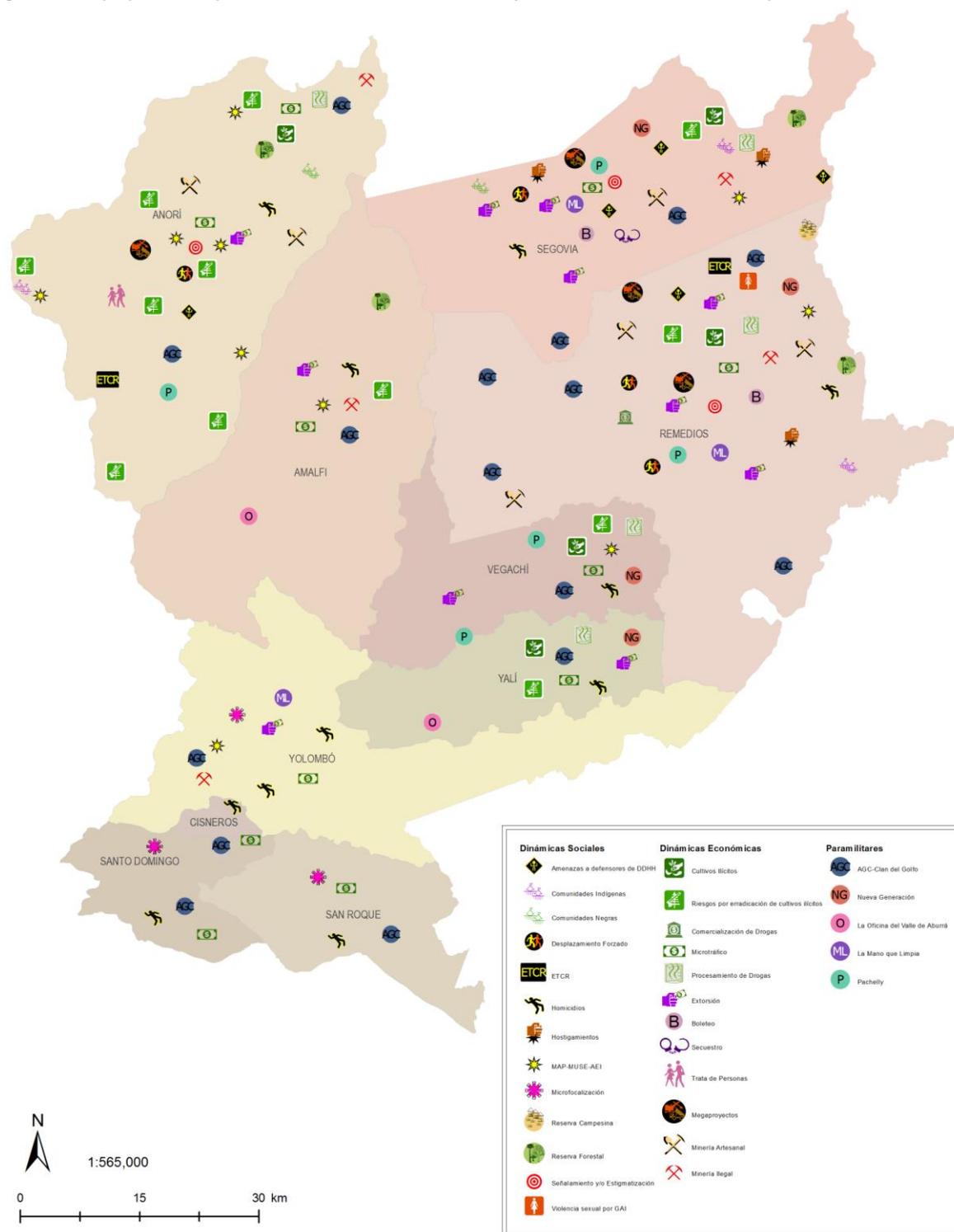
³³ Caracol Radio, 14 de julio, 2016: Encarcelan a capitán de la Policía por presuntos nexos con 'Los Rastrojos'.

Clan del Golfo y no cumplir con los procedimientos de incautación, además de permitir extorsión, el microtráfico y la minería ilegal en el municipio”³⁴.

En años recientes, las confrontaciones de grupos armados, han puesto en peligro a la población de la región, especialmente a la que se agrupa en organizaciones de víctimas, derechos humanos, campesinas y mineras. Ante esto, las organizaciones han hecho un trabajo permanente de denuncia y movilización. La Defensoría del Pueblo emitió en 2012 y en 2016 Informes de Riesgo en los cuales anunció el peligro en que se encontraban los pobladores, producto de la confrontación y disputa entre los grupos armados y las dinámicas de control que estos imponen.

³⁴ Caracol Radio, 29 de septiembre de 2017: Capturan a cinco policías en Remedios por nexos con el Clan del Golfo.

Figura 20: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Nordeste, Antioquia



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias

En el Nordeste se identificó la presencia de las AGC, la NG, la OVA, la Mano que Limpia y los Pachelly. Las AGC hacen presencia en Remedios, Segovia, Anorí (especialmente en la vereda La Plancha y en el corregimiento Liberia), Amalfi, Cisneros, Yolombó, Santo Domingo y San Roque. Las AGC tienen mayor control territorial en los cascos urbanos, principalmente en la zona minera (Remedios y Segovia), donde disputan con otras organizaciones armadas el control de las extorsiones a negocios relacionados con la minería y la consolidación de las plazas

de vicio en algunos barrios. Luego de la guerra con los Rastrojos (2012), las AGC lograron control territorial y han ocupado zonas dejadas por las FARC tras su traslado a los puntos de transición. La salida de las FARC como organización armada dejó varias áreas del Nordeste en disputa y con vacíos de poder, reconfigurando el mapa de los demás actores armados que continúan el conflicto para controlar territorio, recursos y comunidades.

La NG³⁵ hace presencia en Remedios y Segovia y aparece a comienzos de 2016 con el objetivo de disputar el control territorial que había consolidado las AGC. A través de diferentes panfletos, esta organización ha declarado objetivo militar a personas de la población acusadas de ser “jíbaros”, violadores y colaboradores del grupo contradictor³⁶.

La Mano que Limpia se encuentra en Remedios, Segovia y Yolombó. En sus panfletos declaran actuar en alianza con NG y con “alias J7”, e identifican como objetivo militar a la Mesa Minera³⁷ que ha liderado protestas por la formalización y legalización de este oficio. En Yolombó, señalaron a varias personas de ser expendedores de droga y declararon objetivo militar a “placeros y combos”³⁸.

La OVA, a través de la Oficina de Cobro y Sicariato “Los Yepes” demostró su capacidad de accionar en Segovia. En mayo de 2017, circuló un panfleto en el que amenazaba de muerte a Angélica Rendón, gerente del Hospital San Juan de Dios, y a su familia en Medellín. La comunicación expresa que no hay intención de hacer incursión en la zona ya que solo se trata de “negocios”³⁹.

En el tercer trimestre de 2017, se registró la expansión de Los Pachelly, oriundos de Bello, hacia algunas zonas rurales del departamento, incluyendo Nordeste, ilustrando el alto grado de coordinación entre estructuras urbanas y rurales.

En las zonas rurales de Remedios y Segovia han hecho aparición diversos grupos de encapuchados desarrollando acciones de ataque e intimidación a la población civil. Estos grupos no se han identificado pero las comunidades afirman que el modo de actuar se asemeja al de los paramilitares que han tenido asiento en la región⁴⁰. Se han presentado casos de ataques a locales comerciales, patrullajes de grupos de 3 a 8 hombres encapuchados, con armamento de largo alcance y preguntando insistentemente por líderes sociales de las veredas. CAHUCOPANA, organización con asiento en el territorio, ha denunciado 24 casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas la forma de actuar de estos grupos desconocidos.

³⁵ De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo de N° 029- 16 (2016,) este grupo recibe también la denominación de “Seguridad Héroe del Nordeste”.

³⁶ La Nueva Generación (LNG) aliada con el viejo J7. Febrero 6 de 2017. Segovia, Antioquia.

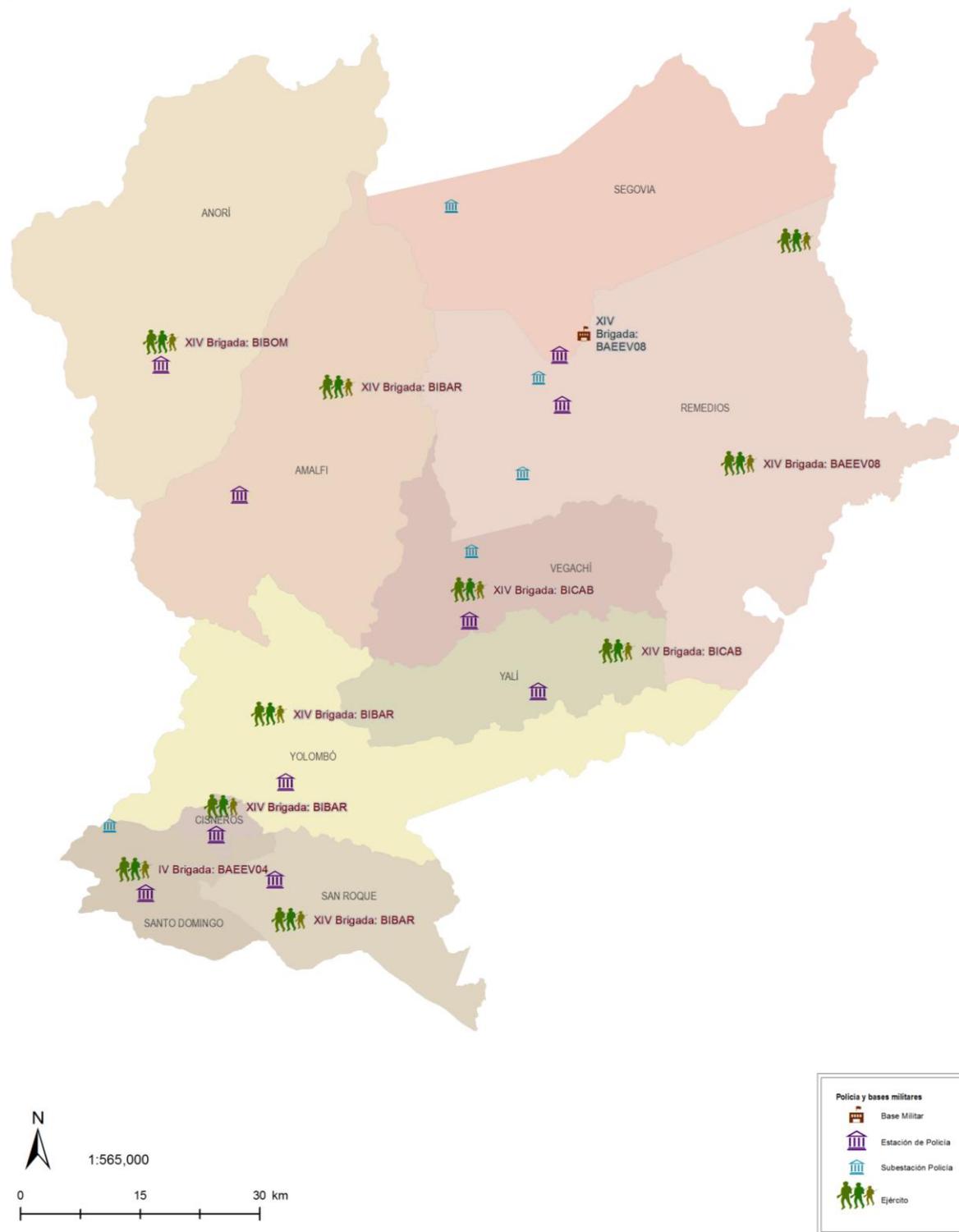
³⁷ La Mano que Limpia. 3 de marzo, 2017. Segovia, Antioquia.

³⁸ La Mano que Limpia aliados con alias J7. 27 de julio, 2017. Yolombó, Antioquia.

³⁹ Oficina de cobro y sicariato “Yepes”. 17 de mayo, 2017. Segovia, Antioquia.

⁴⁰ Las organizaciones señalan que la operatividad que se ha dado en la parte rural con las detonaciones en locales es similar a lo que se dio en 1996 con atentados dinamiteros a casas de familiares de presuntos guerrilleros en el municipio de Segovia.

Figura 21: Presencia de fuerza pública en Nordeste, Antioquia



Fuente: Policía Nacional y Ejército Nacional

Este copiamiento paramilitar en los municipios del Nordeste, no ha sido detenido por la fuerza pública. La Policía Nacional cuenta con Estaciones en cada una de las 10 cabeceras municipales de la subregión; además del Puesto de Policía de Porce III y las subestaciones de Porcesito, Cristales, San José del Nus, El Tigre, Santa Isabel, La Cruzada y Fraguas Machuca.

El Ejército Nacional despliega sus tropas en el nordeste antioqueño a través de la XIV Brigada principalmente. En los municipios de la zona minera se encuentra como encargado el Batallón Especial Energético Vial N. 08; en Anorí, el Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná; en Amalfi, Yolombó, Cisneros y San Roque el Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbulas; en Vegachí y Yalí el Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibío (que también hace presencia en la zona rural del municipio de Remedios); y en Santo Domingo el Batallón Especial Energético Vial N. 04, perteneciente a la IV Brigada.

Si bien la fuerza pública está en todo el Nordeste, la reingeniería del paramilitarismo ha continuado, pero presentando cambios en las dinámicas militares en relación a las de los grupos de finales de los 90 y primeros años del 2000. Ejemplo de ello es la presencia itinerante que han demostrado en las zonas rurales. Hasta ahora, no se registran zonas campamentarias.

Respecto a las cabeceras urbanas, el control y la presencia son permanentes ya que allí concentran gran parte de sus actividades de extorsión y del negocio del narcotráfico, entre otras. Esto demuestra una capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas de los territorios y la consolidación del poder territorial, además de la coerción a la población civil, a través de nuevas formas de actuación militar, que tienen una serie de implicaciones sociales y económicas en la subregión.

Dinámicas económicas y sociales

La actuación de los grupos paramilitares en el Nordeste antioqueño ha generado una serie de factores que impactan en las dinámicas económicas y sociales de la población.

El vínculo existente entre conflicto armado, grupos paramilitares y la rentabilidad del narcotráfico, ha generado que en los municipios de Amalfi, Yalí, Yolombó, Vegachí, Remedios, Segovia y Anorí, existan cultivos ilícitos, lugares para el procesamiento de droga y riesgo para las comunidades por la erradicación de los mismos. El caso de Anorí es el más preocupante debido a las constantes amenazas de las que son objeto los cultivadores de coca y marihuana, que exigen se implemente el punto 4 de los acuerdos de La Habana para la sustitución efectiva de cultivos.

Según informes, grupos paramilitares habían declarado objetivos militares a los campesinos involucrados en los esfuerzos de sustitución de cultivos, objetivos militares diciendo que eran "sapos" o informantes que perturban el tráfico de drogas (...) se firmaron cinco acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos con las autoridades colombianas en Tarazá, Cacaré, Anorí, Ituango, Campamento y en la región del Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Si bien se entregaron algunos de los artículos prometidos a pequeña escala, el principal problema sigue siendo la necesidad general de infraestructura, servicios sociales, mercados y otros artículos más grandes necesarios para hacer que la sustitución de cultivos sea sostenible para los campesinos locales. (Wola, 2017, párr.6)

En estos mismos municipios se han presentado casos de extorsión a los comerciantes. Así mismo, en todos los municipios de la subregión está presente el microtráfico.

El caso más preocupante y ya referido anteriormente, es el de los municipios de Segovia y Remedios en donde las amenazas, los ataques armados y la intimidación

han sido las estrategias para hacerse con el control de algunos barrios y de las rentas que otorgan las plazas de vicio, y el cobro de extorsiones a entables y minas.

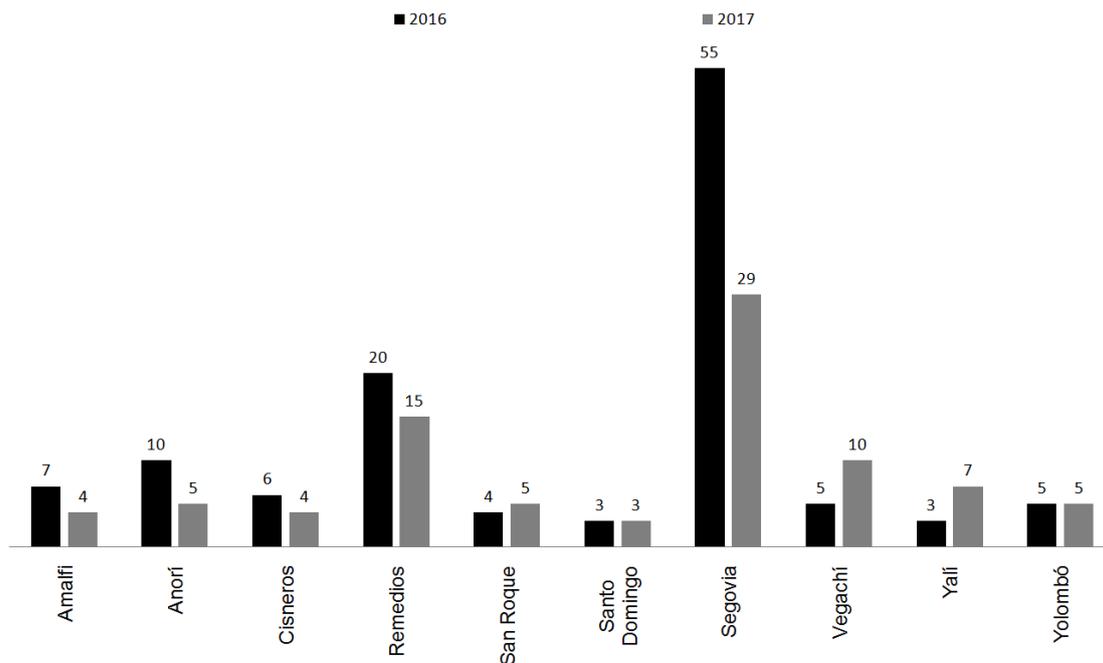
El interés de los grupos armados ilegales por el control territorial, ahora en disputa, se relaciona con el significativo incremento del precio del oro en el 2016, a pesar de la ostensible disminución de la actividad minera en el municipio de Segovia, que ha originado que muchos de los mineros tradicionales migren hacia Buriticá u otros municipios del departamento. Los grupos armados ilegales buscan controlar las minas que continúan en producción, con el fin de aprovechar la demanda que se mantiene para fortalecer sus finanzas, no obstante que las zonas de explotación minera, por razones de riesgo geológico, se han reducido (...) En los municipios de Segovia y Remedios, gran parte de las acciones de los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC están actualmente centradas en la intimidación, amenaza y extorsión al sector minero con cifras que oscilan alrededor de tres millones de pesos mensuales. (Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo N° 029 - 16, 2016c, p.6)

La problemática minera que se vive en la subregión está relacionada con la gran cantidad de bienes comunes que son objeto de disputa para distintos grupos armados y la confrontación entre mineros tradicionales y multinacionales. En San Roque, la minera sudafricana Ashanti Gold desarrolla el proyecto de exploración y explotación de oro de Gramalote, que también afectará a Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael y Yolombó, bajo un ambiente de protestas ciudadanas enmudecidas por el accionar de grupos armados. También hay registro de minería ilegal en los municipios de Yolombó, Amalfi, Anorí, Segovia y Remedios, además, en estos tres últimos hay minería artesanal y megaproyectos adicionales.

Otros factores de las dinámicas económicas y sociales que se han presentado en el territorio son la trata de personas en el municipio de Anorí, el secuestro en Segovia, y el boleteo en Segovia y Remedios. Así mismo se ha presentado a través de los ya referidos panfletos, especialmente en estos dos últimos municipios, lo que estos grupos insisten en llamar “limpieza social”, donde se amenaza y asesina a consumidores de droga, personas LGTBI y prostitutas. Además imponen toques de queda y restricciones a la movilidad.

Segovia y Remedios presentan las cifras más altas de homicidios en el Nordeste antioqueño. En 2016, según la Policía Nacional (2017), estos dos municipios representaron casi dos tercios del total de homicidios en el Nordeste (118). En 2017 (hasta septiembre), ambos municipios sumaron 44 homicidios de un total de 87 en todo la subregión, teniendo nuevamente la cifra más alta Segovia con 29 homicidios y Remedios con 15.

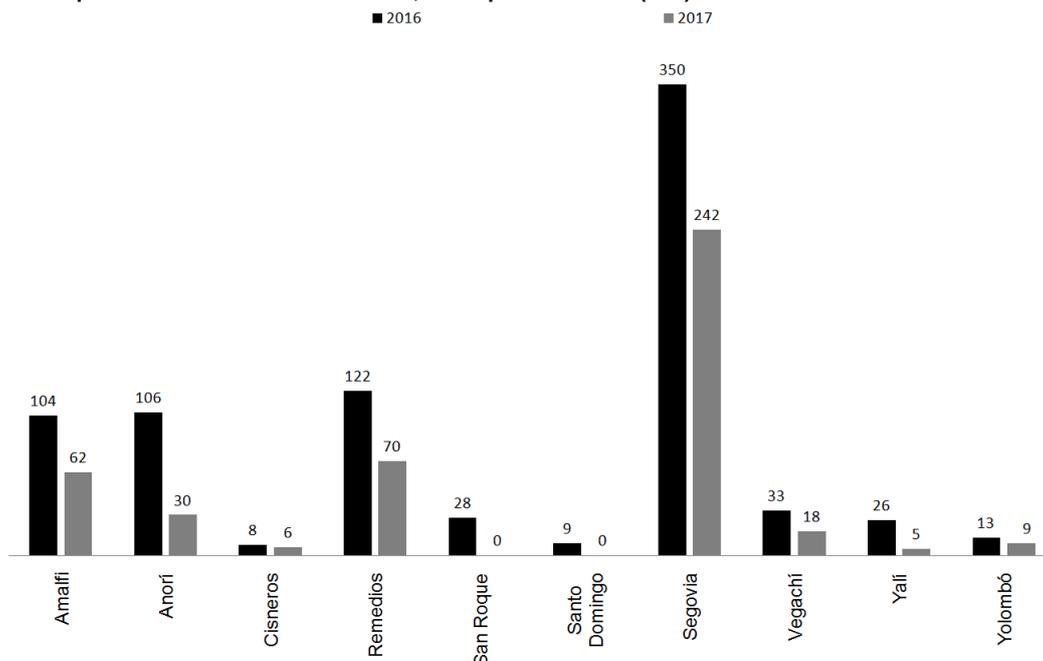
Figura 22: Homicidios en Nordeste, Antioquia 2016-2017 (sep.)



Fuente: Policía Nacional

De igual manera, el desplazamiento forzado confirma el nivel de conflictividad que se vive en la zona minera. Entre los años 2016 y 2017, según la UARIV (2017), los desplazamientos forzados en el nordeste antioqueño fueron 1.241, de estos 592, casi la mitad, ocurrieron en Segovia, seguido de Remedios con 192.

Figura 23: Desplazamiento forzado en Nordeste, Antioquia 2016-2017 (oct.)



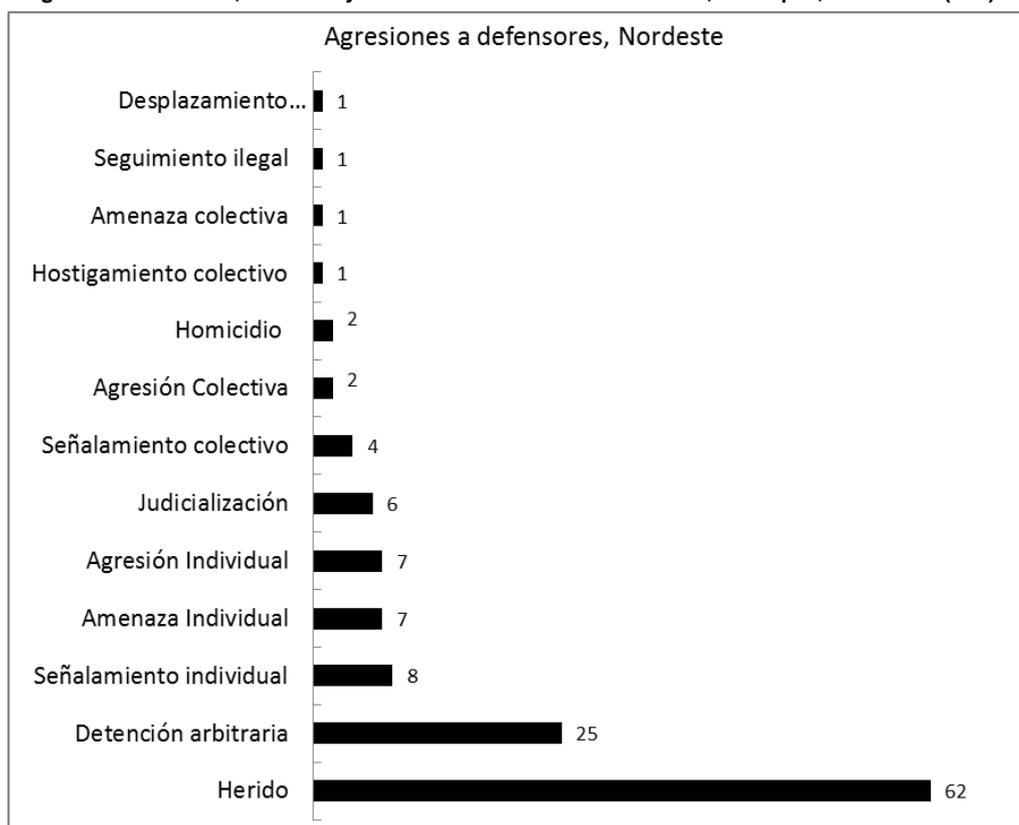
Fuente: UARIV

Agresiones contra Líderes Sociales

En el Nordeste, decenas de líderes sociales han sido agredidos por su labor. Entre 2016 y 2017, hubo 127 agresiones, 84 se presentaron en el marco del paro minero

de 2017. Dos manifestantes fueron asesinados presuntamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD): Brandon Estiv Ochoa Estrada y Alexis Gregorio Acevedo Galvis.

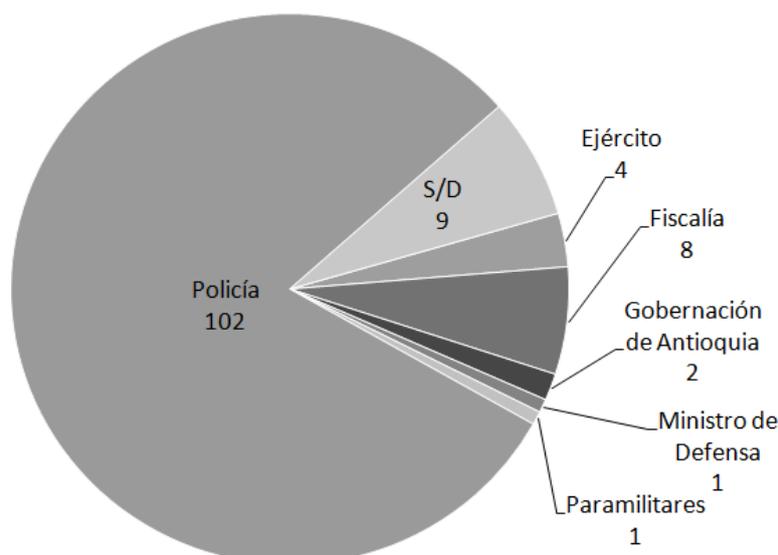
Figura 24: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Nordeste, Antioquia, 2016–2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líder y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Respecto a los presuntos responsables de estas agresiones, la Policía ocupa el primer lugar con 102, debido en parte al tratamiento de guerra que dio la institucionalidad a las movilizaciones mineras donde hubo altos índices de represión. Los manifestantes y líderes sociales han sido, especialmente en el contexto de los paros mineros, señalados de pertenecer a grupos armados ilegales, o de estar infiltrados por ellos. Desde la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa se estigmatizó y puso en riesgo a quienes hicieron parte de las protestas.

Figura 25: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Nordeste, Antioquia, 2016-2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

En 9 casos, los responsables no han sido identificados. Cabe anotar que estos hechos se han presentado en las zonas rurales con las formas de actuar ya señaladas.

En conclusión, la dinámica de los grupos paramilitares en el nordeste antioqueño se caracteriza por las disputas territoriales y de los bienes comunes que allí existen. Los grupos surgidos después de la desmovilización de las AUC, continuaron con el control social y armado en los territorios, incidiendo en las dinámicas económicas y políticas de los mismos, tejiendo redes con la institucionalidad, y exponiendo a la población, especialmente a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, a múltiples formas de agresión. Este proceso se ha llevado a cabo en medio de una fuerte presencia estatal que no frena el avance de los grupos paramilitares y que pone en grave riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz.

Urabá

La subregión del Urabá limita al norte con el mar Caribe, al sur y al occidente con el departamento del Chocó y al oriente con el departamento de Córdoba y las subregiones Norte, Suroeste y Occidente. Por su ubicación geoestratégica y gran diversidad de bienes comunes, se ha convertido en un territorio importante para las agendas comerciales internacionales y los megaproyectos. Urabá cuenta con una zona franca, decretada en 2008, que ha facilitado a empresarios nacionales y extranjeros asentarse en el territorio y llevar a cabo transacciones económicas y financieras.

En Urabá, la matriz de productividad económica está caracterizada por la agroindustria⁴¹ del banano y el plátano (la región de Colombia con más área

⁴¹ La agroindustria se caracteriza por la intensificación de la producción, la concentración de tierras y el monopolio de la comercialización de los productos. La determinación de los precios está fuertemente influenciada por transnacionales y agremiaciones.

cultivada), la ganadería, la siembra de cacao y la explotación de bienes comunes (madera y minería principalmente). Completa esta dinámica económica el creciente turismo, las exportaciones de mercancías, y la actividad del Puerto de Urabá.

Los rubros de mayor relevancia son: la agroindustria bananera con aproximadamente 34.000 ha., el cultivo de plátano con 29.000 ha., el cultivo de cacao con 7.000 ha., y la ganadería con 620.000 cabezas de ganado que pastan en 500.000 ha. Las plantaciones forestales comerciales son una gran alternativa de producción a desarrollar en la subregión, ya que presentan ventajas comparativas y competitivas. (Gobernación de Antioquia, 2016, p. 66)

No es gratuito que de unas 90 mil hectáreas tituladas en la subregión de Urabá, al menos unas 62 mil hectáreas están en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa, además de algunos municipios del Norte de la subregión; son títulos para explotación de carbón. Según el reporte de la Secretaría de Minas, al 2013 había 84 títulos y 208 solicitudes, lo que es ya una alerta en una de las subregiones donde solo en el Área del Eje Bananero se reportan 164 mil hectáreas despojadas según los registros entregados por las víctimas. (IPC, 2015, p.303)

La agroindustria de palma de aceite para biocombustible, se ha convertido en una de las actividades que ha emergido con fuerza. “Contamos con plantaciones en los municipios de Carepa, Chigorodó y Mutatá con un área de 489 hectáreas y una producción por año de 10.410 toneladas y lo más importante es que en la actualidad ya se cuenta con una planta extractora en el municipio de Chigorodó a orillas del río Guapá” (Cámara de Comercio de Urabá, 2017, p.16).

Urabá es la conexión marítima que tiene Antioquia para su comercio exterior. Por su ubicación geoestratégica (cercanía con el canal de Panamá), se han trazado objetivos para el desarrollo de la infraestructura vial⁴² y marítima que satisfagan las demandas internacionales, como demuestran los instrumentos de planeación institucional desde los 90, entre ellos, “Antioquia: La Mejor Esquina de América”. El Puerto de Urabá se está adecuando y se planea la construcción de varios puertos más: Puerto del Darién (2030), Puerto de Antioquia⁴³ y Puerto Pisisí⁴⁴ (2019).

El territorio de Urabá ha sido disputado por varios actores del conflicto, lo cual generó graves violaciones a los derechos humanos. Esto puede explicarse, entre otras razones, por la consolidación del proyecto paramilitar en la región, que se ha establecido gracias a la connivencia con agentes estatales y la financiación de empresarios.

La consolidación de las ACCU en la región de Urabá coincidió con la elección de Álvaro Uribe Vélez como gobernador del departamento de Antioquia para el período 1995-1997, y su promoción activa de las cooperativas de seguridad privada “Convivir” consideradas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo de Colombia como legalización del paramilitarismo, así como con el nombramiento del General Rito Alejo del Río como comandante de la Brigada XVII (...) Los empresarios bananeros no sólo aportaban dineros para financiar el paramilitarismo; además, en contraprestación, hacían requerimientos a los paramilitares para que asesinaran a sindicalistas y otros líderes sociales

⁴² El Tiempo, 22 de mayo, 2017: Trabajos en puntos críticos de dos vías que llevarán al mar por Urabá.

⁴³ El Tiempo, 28 de noviembre, 2016: Ya hay quien construya el Puerto en Urabá.

⁴⁴ La República, 13 de mayo, 2017: Puerto de Pisisí se caracterizará por ser amigable con el medio ambiente.

de la región. Se conoce la existencia de una línea de fax desde la cual los empresarios bananeros enviaban a los paramilitares unas listas con los nombres de las personas a las que ellos debían eliminar. (Comisión Colombiana de Juristas, 2011, p.98)

Las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH demuestran la intensidad del conflicto en Urabá y puede verse reflejada en el alto número de víctimas de desplazamientos forzados, masacres, asesinatos, y despojo de tierras y en la persecución de líderes y defensores de derechos humanos. Urabá ha tenido una importante tradición organizativa popular, campesina y de izquierdas, histórica y actualmente atacada por los paramilitares y agentes del Estado.

En el Urabá antioqueño se encuentra el 10,5% de la población de Antioquia, equivalente a 693.868 habitantes. El 51,4% de la población del Urabá antioqueño, o sea 356.690 personas, se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas de la UARIV (...) De alrededor de 150 mil hectáreas de tierras entre abandonadas y despojadas, a diciembre de 2016 se habían restituido alrededor de 6 mil hectáreas." (IPC, 2017a, párr.1)

Urabá presenta un contexto marcado por el dominio paramilitar (AGC), una alta cifra de homicidios en varios de sus municipios, el desplazamiento forzado y la persecución al movimiento social. Solo entre 2016 y 2017 se han reportado: 4 asesinatos de líderes, 23 amenazas individuales y 12 amenazas colectivas⁴⁵. Esto demuestra el grave riesgo en el que se encuentran los sectores sociales organizados. En este contexto territorial, se instaló una ZVTN para la concentración de excombatientes de las FARC-EP.

Paramilitarismo y fuerza pública

La subregión de Urabá ha tenido presencia de grupos insurgentes (EPL y FARC - EP) y paramilitares (ACCU y AUC). A esta presencia se sumaron los grupos denominados CONVIVIR, que a mediados de los 90 sirvieron como bastión para la expansión del proyecto paramilitar en la zona y posteriormente en todo Antioquia. El posicionamiento de la estrategia paramilitar en este territorio fue posible gracias a las alianzas entre estos, el Estado y empresarios, una combinación que no sólo tuvo como objetivo el copamiento de los municipios por vía militar, sino que influyó y determinó la política local, regional y nacional, así como la vida social.

Las FARC - EP actuaron en Urabá, principalmente con los Frentes 5 y 58. La fuerte presencia insurgente se tradujo en grandes disputas con los paramilitares por el territorio. Por su parte, los grupos paramilitares en los 90, hicieron presencia como ACCU, al mando de los hermanos Castaño (1994) y posteriormente cuando surgen las AUC en 1997, se estructurarán bloques como parte de la estrategia de expansión, entre ellos el Bloque Elmer Cárdenas y el Bloque Bananero, que operarán hasta la desmovilización.

Tras el proceso de desmovilización, Antioquia y en especial Urabá, vieron emerger nuevas estructuras paramilitares, herederas del poder ya instaurado de las AUC, como las AGC, cuyo primer comandante fue Daniel Rendón, "Don Mario", hermano

⁴⁵ La mayoría de estas amenazas han sido contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación Campesina de San José de Apartadó.

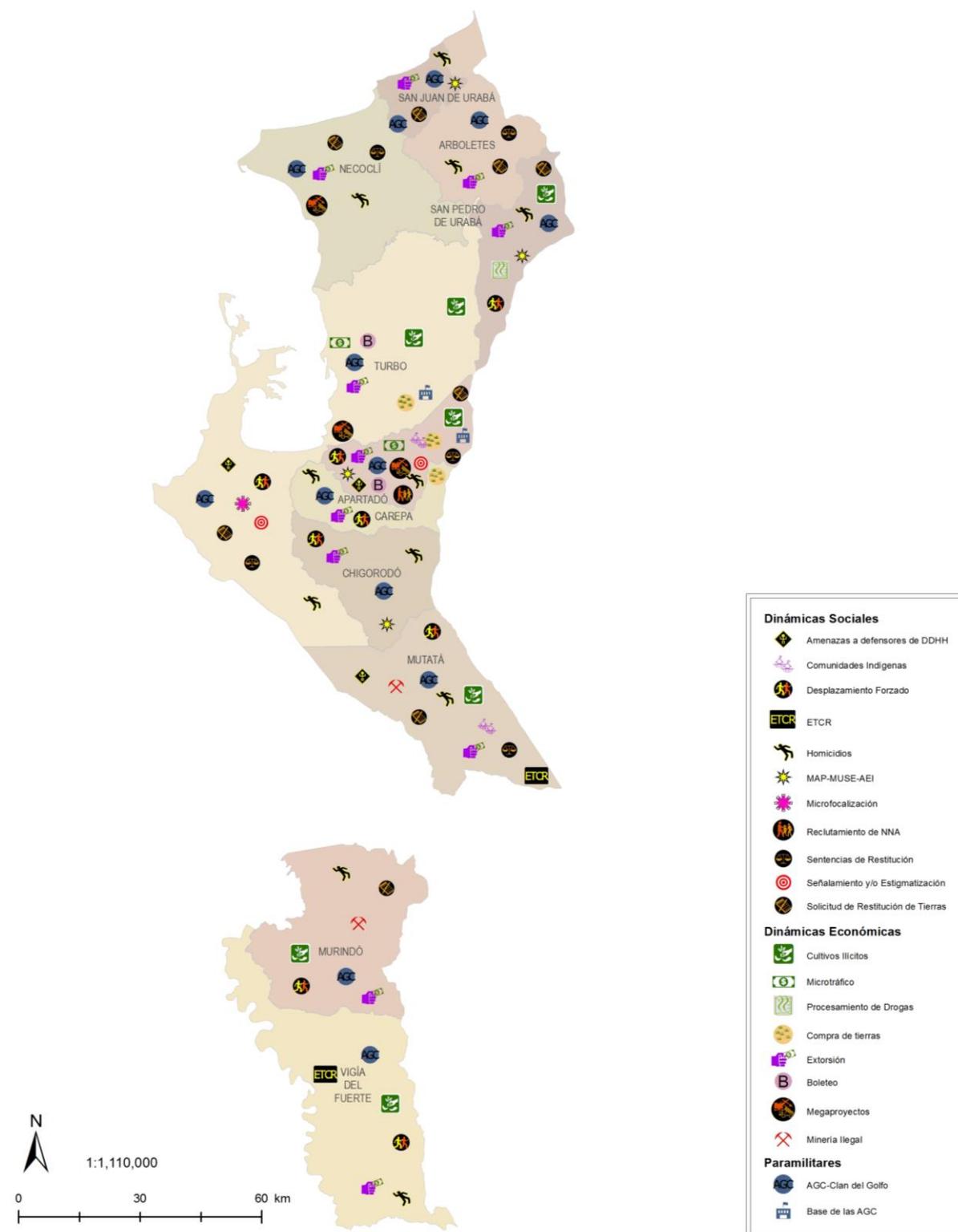
de Fredy, “El Alemán”, comandante paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas⁴⁶. Tras la captura de Daniel Rendón, serían Juan de Dios Úsuga, alias Otoniel, y su hermano Juan de Jesús, alias Giovanni, quienes quedarían al mando. Tras la muerte de alias Giovanni en 2012, permanece alias Otoniel como máximo dirigente.

En 2008, sólo dos años después de finalizada la desmovilización, las AGC iniciaron un proceso de control y dominio sobre otros grupos (Indepaz, 2015). Actualmente en Urabá, es el grupo dominante sin disputa alguna con otras estructuras.

Los orígenes de las AGC son múltiples: dinámicas locales (Los Tangueros), la conformación y evolución de grupos de autodefensa y paramilitares (ACCU y AUC) en Urabá y, el fallido proceso de desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Urabá en los años 90. Después de 2006, surgen producto de la desmovilización de los Bloques Centauros, Elmer Cárdenas y Norte. El proceso de expansión y crecimiento se dio a través de un intenso trabajo de acuerdos y alianzas en los que la organización incorporó antiguos miembros de las AUC y construyó sociedades con diversas estructuras del crimen organizado a nivel local y regional. (Indepaz, 2017b, p.29)

⁴⁶ Revista Semana, 15 de abril, 2009: Esta es la historia criminal de “Don Mario”.

Figura 26: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Urabá, Antioquia



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias.

En todos los municipios de Urabá tienen presencia las AGC. En la zona rural, de acuerdo con las denuncias de la comunidad, patrullan de manera abierta, instalan retenes ilegales y están de manera permanente. En la parte urbana, hacen presencia con hombres armados de civil y aunque los señalan de ser miembros de grupos delincuenciales, en realidad hacen parte de las AGC. Según la Defensoría

del Pueblo - Informes de Riesgo N° 031-16 (2016) y 035-17 (2017), las AGC, han llevado a cabo incursiones armadas en el corregimiento de San José de Apartadó y mantienen un férreo control en cabeceras municipales, como la de Apartadó.

Desde el pasado 5 de septiembre de 2016 (...) un numeroso grupo de hombres armados, que se identifican como parte de las AGC, transitan entre las veredas La Hoz, Arenas Bajas, Arenas Altas y El Porvenir, ingresando a las viviendas de la población civil para intimidar y ejercer dominio territorial y poblacional. La instalación de retenes ilegales, el 7 de septiembre de 2016, en inmediaciones de la vereda El Porvenir dificultó el normal desarrollo de las actividades productivas de la comunidad, exponiéndola al confinamiento y al desabastecimiento alimentario. De igual forma grupos de jóvenes del corregimiento que se reúnen para desarrollar actividades deportivas y de sano esparcimiento, se han visto despojados de sus artículos personales (como celulares) y han sido objeto de retenciones arbitrarias. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 031-16, 2016a, p.2)

Las formas de control de las AGC en zonas rurales comprende, principalmente, la presencia de personas uniformadas con prendas militares, quienes portan armas de corto y largo alcance, mientras que en las cabeceras urbanas, se destaca la presencia de integrantes de dicho grupo armado ilegal vestidos como civiles, realizando actividades de “inteligencia”, control de sectores urbanos, y desarrollando actividades logísticas para el avituallamiento de las estructuras armadas que permanecen o transitan principalmente por áreas rurales en la serranía de Abibe y en veredas del corregimiento San José de Apartadó. Entre el 6 y el 11 de septiembre del 2016, estructuras de integrantes de las AGC ingresaron hasta los caseríos de veredas de San José de Apartadó (Arenas Altas, Arenas Bajas, La Hoz, El Porvenir, La Esperanza, Buenos Aires y La Unión) ocupando bienes protegidos por el DIH como escuelas y viviendas, amenazando a la población civil, imponiendo restricciones a la movilidad y generando zozobra y temor; este hecho fue registrado en el Informe de Riesgo No. 031-16 y en medios nacionales de noticias en los que se reportó que ese grupo armado ilegal estaría manifestando que la población civil sería utilizada como su escudo (...) La existencia de combos o pandillas en el caso urbano del municipio de Apartadó, particularmente en las comunas I, II y III, es otra de las estrategias desde las cuales las AGC, logran establecer mecanismos para consolidar control social y territorial del área urbana del municipio. No obstante estas estructuras de pandillas, aunque se articulan particularmente a procesos de tráfico de drogas liderados por el grupo armado ilegal antes mencionado, continúan guardando relación con actividades delictivas como hurtos, riñas y consumo de drogas, entre otras. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 035-17, 2017b, p.6)

Por su parte, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) en 2016 y 2017 también han denunciado la presencia de las AGC en Apartadó, especialmente en las veredas de Rodoxalí, Playa Larga, La Hoz, La Esperanza, El Porvenir y Mulatos, entre otros.

“AGC Presentes. Venimos pa quedarnos” fue el mensaje que leyeron este fin de semana los habitantes del corregimiento San José de Apartadó, luego de que presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia pintaran los muros de algunas viviendas. La situación se repitió en la comunidad de paz. (El Espectador, 2016b, párr.1)

ACASA informó que durante 2015 en Apartadó se cometieron más de 180 agresiones contra la población, muchas de estas perpetradas por las AGC. Para 2017 denuncian nuevamente “que un grupo de por lo menos 60 reconocidos paramilitares de las AGC, muchos de ellos vestidos con trajes de uso privativo de la fuerza pública, nuevamente hacen presencia en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, más exactamente en el sector del Barro, los días 26, 27 y 28 de

septiembre” (ACASA; 2017, párr.1), lo cual demuestra la presencia de las AGC, y contradice la visión de las autoridades que se han empeñado en desconocer esta situación⁴⁷.

Una de las estrategias de control sobre las comunidades es la “instalación de puntos”, es decir, personas que pueden vivir en los territorios o que traen de otros lugares, para que vigilen y se integren a las dinámicas comunitarias. Mensualmente estos devengan 800.000 [pesos colombianos] (Revista Semana, 2017b).

En la vereda Rodoxalí siempre han estado. Allí ha estado puesta la base militar y la policía de Agamenón 1. Allí hay paramilitares y también puntos. Cuando se está hablando de puntos, son personas encargadas de las funciones de inteligencia, a eso se le llama punto. Son informantes de las autodefensas y ellos mismos también se han visto pasarle información al ejército para informar por donde no se puede meter la fuerza pública, son también los que manejan la información de todos y los que transmiten las amenazas contra los líderes. (Testimonio de participante, 2017, p.2).

Para un control más riguroso de la zona, los paramilitares están estableciendo puntos de informantes a su servicio en todas las veredas y exigen que las comunidades los designen como miembros de las juntas comunales. Ya en una de las veredas, la presencia de dichos informantes ha provocado un desplazamiento forzado. Es claro que los paramilitares están dotando a dichos informantes de armas, lo que implica una nueva extorsión violenta sobre las comunidades, y también hay casos evidentes de reclutamiento de menores. (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2017, párr. 1)

Hay además, dos bases paramilitares en la región, una ubicada en la vereda Rodoxalí de Apartadó y otra en el corregimiento Nuevo Antioquia, Turbo, donde los paramilitares han construido carreteras y se han asentado, convirtiendo este territorio en fortín para sus operaciones, aunque hay presencia de la Policía Nacional, con las Unidades Móviles 11 y 24, la Brigada XVII del Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta, FUDRA, además de efectivos de la Operación Agamenón.

En la Vereda Rodoxalí se tiene información de la existencia de una base paramilitar, la cual se encuentra ubicada a poco tiempo de donde hace presencia el Ejército Nacional. Allí hay una base, y justamente queda a 30 minutos del enclave de la fuerza pública donde hay presencia de hombres de Agamenón, y de la móvil 11 y 24. En Mulatos los paramilitares hacen presencia móvil, es decir patrullaje (...) pasan, caminan, pero es permanentemente las caminatas, no por el mismo punto, pero si en la misma vereda, se mueven, en El Barro, Mulatos (...) ellos andan mucho en sudadera, camisa negra, y a veces tienen camisa verde normal, verde oliva, con el salmo 91. (Testimonio de participante, 2017, p.12)

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció que se está viviendo una arremetida paramilitar sobre el territorio, de manera evidente y sin que las autoridades actúen. Además afirman que hay una base de operaciones en la Vereda Nuevo Antioquia, con cerca de 600 hombres y desde la que se coordina el control territorial en la región. La presencia de este grupo autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia se ha reportado en 3 veredas en específico: en la vereda Mulatos, en la vereda Playa Larga y en la vereda Arenas Bajas ubicadas entre 3 o 4 horas del casco urbano de San José de Apartadó. (...). Desde esa

⁴⁷ Caracol Radio, 10 de junio, 2017: Desmienten presencia masiva de paramilitares en San José de Apartadó, en Urabá, y El Espectador, 9 de noviembre, 2017: ¿Qué no hay presencia paramilitar en Rodoxalí?

base se coordinan las operaciones de escuadrones entre 30 y 40 paramilitares que recorren las veredas sin ningún tipo de control. (Contagio Radio, 2017, párr.2)

Por su parte la Defensoría del Pueblo expresa:

Para las AGC, controlar las veredas del corregimiento San José de Apartadó como La Hoz, El Porvenir, Rodoxalí, La Unión, La Esperanza, Arenas Altas, Arenas Bajas, Buenos Aires Mulatos Medio, Mulatos Cabecera, Playa Larga y la Resbalosa, se constituye en parte de una estrategia que le permite al Frente Central Urabá de dicha agrupación armada ilegal, establecer dominio en la serranía de Abibe por ser ésta un corredor que conecta a esa estructura de las AGC con las demás que operan desde los departamentos de Córdoba, Chocó, el Norte y Sur de Urabá, El Bajo Cauca y el Nordeste del departamento de Antioquia. Para ese fin el Frente Central Urabá, ha establecido centros de control entre los municipios de Apartadó, Carepa y Turbo en corregimientos y veredas como Playa Larga (Apartadó), Nuevo Antioquia (Turbo) y Piedras Blancas (Carepa), lugar este último en el que la Policía de Urabá ha sido atacada con armas largas en dos ocasiones, durante el mes de octubre 2016 y el 16 de enero del 2017. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 035-17, 2017b, p.6)

En marzo de 2016, las AGC, decretaron paro armado en cuatro departamentos: Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar. En el caso de Antioquia, este hecho afectó de manera fuerte al Urabá, en especial a los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Chigorodó, Carepa y Apartadó, donde se cerraron los establecimientos comerciales, se obligó a los transportadores a no prestar el servicio y se reportaron hostigamientos. Este paro, al igual que el del 2012, decretado también por las AGC, son muestra de su control territorial. (El Colombiano 2016d).

En julio de 2017, las AGC realizaron grafitiis en 26 casas del corregimiento de San José de Apartadó como un acto intimidatorio contra los pobladores: “Los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunciaron que sus viviendas y algunos locales comerciales aparecieron con grafitiis alusivos a las autodenominadas AGC, pese a que la estación de Policía se encuentra a 100 metros y hay una base militar a 300 metros” (Contagio Radio, 2017, párr.1).

Este hecho fue minimizado por las autoridades del departamento en cabeza del gobernador Luís Pérez, quien sostuvo: “No están apareciendo bandas sino que están apareciendo pinturas. Nos dio mucha risa que alguien dijo que iban a estudiar la caligrafía de esas pinturas. Imaginamos que eso es cualquier muchacho que contratan en un municipio o corregimiento para que haga unas letras y salga corriendo” (Noticias Caracol, 2017, párr. 11).

Este tipo de expresiones desconocen la situación de riesgo en que se encuentra la población de San José de Apartadó, máxime que en diversas ocasiones se han denunciado las agresiones que realizan las AGC contra pobladores y organizaciones sociales.

Mostramos con temor y gran preocupación, el incremento de presencia paramilitar en la zona. La propia Comunidad, registra las amenazas y agresiones que sufre y observamos, que estas aumentan respecto al periodo anterior a la firma de los Acuerdos de Paz. Desde septiembre de 2016, hasta el 23 de febrero de 2017, un total de 88 agresiones han sido denunciadas por la Comunidad, lo que supone una media de una agresión cada dos días. De este registro comprobamos que el 65% de ellas han sido realizadas por grupos paramilitares, en concreto

por el grupo AGC, lo que nos reafirma en el aumento de dicha presencia” (Asociación de Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 2017, párr.3)

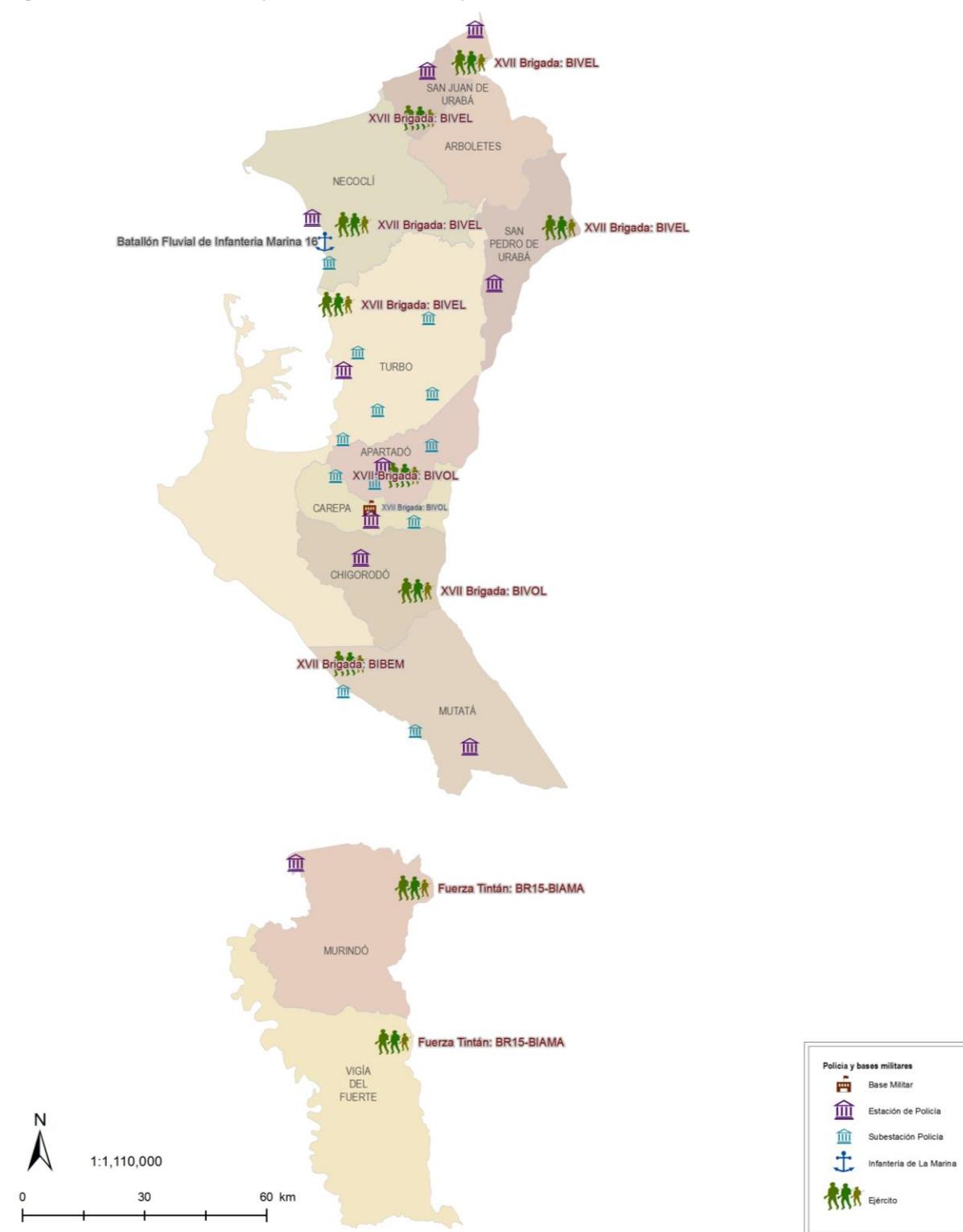
Aunque la fuerza pública hace presencia, especialmente con el Ejército y Policía Nacional además de la Fuerza Agamenón⁴⁸, en conjunto, no responde a la garantía y protección de los derechos de la población. No se desconocen los grandes golpes que la Operación Agamenón ha propinado a las AGC a través de capturas, entre ellas la de alias Tierra, la muerte de alias Gavilán y la incautación de grandes cargamentos de cocaína, pero persiste la preocupación por los nexos que existen entre fuerza pública y AGC, lo cual se refleja en los testimonios de las comunidades y las denuncias de organizaciones sociales.

Un dato que parece curioso, es que los golpes que se han dado a las autodefensas Gaitanistas no ha sido el ejército, ha sido realmente una fuerza que se llama Agamenón, que realmente es un comando élite que no tiene ningún tipo de relación con las autoridades de la zona e incluso todas las operaciones que hacen, las hacen sin contar con las autoridades de la región. Es decir, no se va a encontrar enfrentamientos entre el ejército y los Gaitanistas, pero sí entre la operación Agamenón y las AGC. (Testimonio de participante, 2017, p.4).

En mayo de 2017, el Ejército Nacional, anunció que entraría a reforzar la Operación Agamenón, que continuó su despliegue en los territorios de Urabá, generando gran presión sobre las zonas rurales, donde las AGC se han ido replegando, en especial hacia el corregimiento de San José de Apartadó, empeorando la situación de los campesinos con amenazas y estigmatización.

⁴⁸ En 2017, el Estado lanza la segunda fase de la Operación Agamenón.

Figura 27: Presencia de fuerza pública en Urabá, Antioquia



Fuente: Policía y Ejército Nacional.

En 2016 y 2017, voceros de la organización campesina ACASA, denunciaron la presunta connivencia de las AGC con miembros de la Brigada XVII, que décadas atrás fue comandada por Rito Alejo del Río, condenado por vínculos con el paramilitarismo. Javier Giraldo y líderes de la Comunidad de Paz, también han evidenciado esta relación.

Según [un] miembro de ACASA, “la problemática del corregimiento y sus veredas es muy grave porque hay riesgo de que ocurran desplazamientos y masacres”(…) Hace dos meses le entregamos al Gobierno un mapa con todos los lugares donde estaban los ‘puntos’ (vigilantes de las AGC) en San José de Apartadó, y al día de hoy no ha pasado nada. En términos de seguridad no se ha avanzado. La complicidad de la Brigada XVII es muy grave”. (El Espectador, 2017, párr.10)

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de los últimos hechos en contra de nuestro proceso de vida y de los derechos de la población de nuestro entorno. Ya hoy en día los militares patrullan por las veredas de San José y frecuentemente se reúnen con los grupos paramilitares; cuando no se pueden realizar esas reuniones, entonces se comunican con disparos al aire, significando que están ahí para no equivocarse y hacerse daño entre ellos, pues es clara la alianza que hay entre esas estructuras paramilitares y las brigadas del ejército. (Asociación de Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 2017, párr.9)

Los vínculos entre AGC y miembros del Estado⁴⁹, también han quedado al descubierto, al ser incautados documentos a jefes de las AGC. Por ejemplo, alias Tierra, en 2014, tenía en su agenda los nombres de 250 funcionarios a quienes las AGC pagaban mensualmente en varias zonas del país, en especial en Urabá (El Tiempo, 2014). A 2017, el país aún desconoce los resultados de los procesos de investigación por estos nexos que van más allá de la fuerza pública y relacionan a posibles autoridades civiles. En 2016, fue capturado el Fiscal Especializado de Apartadó, Luís González Arévalo, y su asistente Marino Palacio Ortiz, acusados de favorecer a jefes paramilitares de las AGC. El mismo año, se detuvo a un patrullero de la Policía Nacional que trabajaba en la Interpol y entregaba información a este grupo. De estos hechos tampoco se conocen avances y condenas al respecto.

En 2017 (agosto), en el Urabá Chocoano, fueron capturados 3 miembros de la Armada Nacional por sus presuntos nexos con las AGC, acusados de “recibir dinero de la organización a cambio de informar sobre la ubicación de las lanchas de la Armada Nacional para favorecer el tráfico de drogas en la región” (Blue Radio, 2017). En noviembre (2017), fue capturado el mayor Héctor Fabio Murillo, jefe del Modelo Nacional de Cuadrantes y quien estaba adscrito al Comando de Policía de Antioquia, por presuntos nexos con las AGC, en especial con Luis Orlando Padierna Peña, alias "Inglaterra", quien murió en una acción militar realizada por Operación Agamenón II en Norte de Santander. Estos casos demuestran lo que con insistencia niegan desde diferentes esferas del Estado: la continuidad de las relaciones entre agentes estatales y paramilitares.

Dinámicas económicas y sociales

Otro factor determinante del poder de las AGC es la dinámica económica ilegal y legal. Durante 2016 – 2017, las AGC han continuado extorsionando a comerciantes, tenderos y empresarios. De acuerdo con la cartografía, en once de los doce municipios de Urabá, se presenta este hecho⁵⁰. Las extorsiones y boleteos no solo

⁴⁹ “Entre abril y agosto de este año, alias ‘Tierra’ pagó 12.800 millones de pesos en sobornos, compra de armamento, uniformes y redes de sicarios de alias ‘Otoniel’, a razón de 4.000 millones de pesos por mes”. (El Tiempo, 2014, párr.24)

⁵⁰ A principios de 2017, empresas de gaseosa y cerveza suspendieron su servicio provocando desabastecimiento al ser incinerados varios vehículos de las compañías por negarse a pagar

afectan a las grandes empresas, también a pequeños comerciantes quienes a diario se ven obligados a pagar.

(...) una vez la guerrilla salió del panorama, el Clan ha tratado de hacerse con esas rentas. Decidió cobrarle a los carros distribuidores 2.000 pesos por caja vendida. Así las cosas, si todos los vehículos venden mil cajas al día, una cifra conservadora, significarían 2 millones de pesos diarios para las arcas ilegales. La presión es tan clara, que en varios corregimientos como Currulao y Nueva Colonia, de Turbo; o Río Grande de San José de Apartadó, de Apartadó, se han visto al borde del desabastecimiento porque los carros repartidores de bebidas tienen prohibido llegar hasta allí. Esto ha hecho que los habitantes contraten transporte público para que les hagan llegar lo necesario. Además, en el corregimiento de Belén de Bajirá, jurisdicción de Riosucio, Chocó, hace meses no se ve una gaseosa o una cerveza. (Revista Semana, 2017c, párr.4)

De acuerdo con el informe de la Revista Semana (mayo 2017b), quien tuvo acceso a más de “120 documentos internos de los jefes de ese grupo”⁵¹ se demuestra la rentabilidad del negocio del narcotráfico, las extorsiones y el despojo, lo que permite a las AGC pagar una nómina de al menos 15.000 millones de pesos anuales.

Tan solo por extorsiones entre enero y octubre de 2015 el llamado bloque Córdoba y Bajo Cauca recibió 5.133 millones de pesos (...) El bloque central de Urabá informó al estado mayor que en 2015 tuvo gastos por 9.289 millones de pesos mientras que los ingresos fueron de 8.911, lo que les dejó un déficit. Esto se vio reflejado en que a muchos de los integrantes de la banda no les habían podido pagar sus salarios durante varios meses. Esa situación también se presenta en otras estructuras y desembocó en deserciones. (Revista Semana, 2017b, párr.31)

En cuanto a la cadena de narcotráfico, en seis municipios de la subregión se registran cultivos ilícitos, en uno, procesamiento de drogas y en dos, microtráfico⁵². De acuerdo con Indepaz (2017a), las AGC se “encargan de proveer la droga, imponer las reglas del mercado y cobrar a narcotraficantes y pandillas locales por la venta y distribución” (p.29).

Gran parte de la cocaína que producen y comercializan las AGC, la traen de otras subregiones de Antioquia y de otras zonas del país. Urabá es uno de los lugares donde se realiza el proceso de venta y envío en alianza con carteles mexicanos. Las ganancias de este negocio rondan los “\$15.000 millones de pesos mensuales, es decir cerca de 5 millones de dólares” (Revista Semana, 2017b, párr.22).

En diferentes lugares del país el kilo de cocaína cuesta entre 2,5 y 3,3 millones de pesos, (800 y 1.000 dólares), y se revende dentro del país por entre 4,1 y 4,5 millones de pesos, (1.200 a 1.500 dólares), principalmente a carteles mexicanos que compran los cargamentos en territorio nacional. Sin embargo, las ganancias aumentan considerablemente cuando envían el cargamento al exterior, principalmente a Centroamérica en donde lo recogen sus aliados de México. Allí, el kilo se paga a 9 millones de pesos, cerca de 3.000 dólares, lo que significa una

extorsiones. La Policía Nacional tuvo que escoltar los camiones de empresas como Coca Cola, Postobón y Bavaria (El Colombiano 2017). En octubre de 2017, el Ejército Nacional y el Gaula, militarizó 45 áreas del municipio de Turbo porque en los últimos días se han presentado amenazas y extorsiones de las AGC a las fincas bananeras (200 bananeros). Según el comandante de la Séptima División del Ejército, ya se adelantan investigaciones sobre estos hechos (Blue Radio, 2017b).

⁵¹ Estos documentos se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación.

⁵² La presencia de algunos de los eslabones del narcotráfico en los municipios de Urabá pueden ser mayor, pero estos fueron los datos aportados por quienes participaron en la cartografía.

ganancia del 200 por ciento. Para evitar que las autoridades decomisen grandes cantidades optan por enviar muchos cargamentos pequeños. (Revista Semana, 2017b, párr.18)

Entre 2016 y 2017, la fuerza pública ha dado golpes importantes a las AGC incautando grandes cargamentos, lo que ha generado pérdidas para la organización. “Las 85 toneladas de cocaína que les han sido incautadas en los dos últimos años (hasta abril) por la Operación Agamenón les hubieran dado unas ganancias de más de 3.000 millones de dólares” a este grupo paramilitar (Revista Semana, 2017b). Entre septiembre y noviembre de 2017, la Policía Nacional y la Operación Agamenón II, han decomisado alrededor de 20 toneladas de cocaína (El Espectador, 2017a). Esfuerzos aislados, si se tienen en cuenta los nexos que persisten entre agentes estatales y paramilitares.

Otro rubro de la economía de las AGC es el tráfico ilegal de migrantes que vienen de África, Asia, Cuba o Haití, camino a Estados Unidos. En Turbo, la red dedicada al paso de migrantes está controlada por las AGC, e incluye hoteles, pangas (embarcaciones), y guías. Además, se extiende al Urabá Chocoano, especialmente a Triganá y Sapzurro. El costo promedio que paga un migrante para viajar desde Colombia a Panamá es USD 1.000⁵³. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2016), el año pasado, en Turbo, existían 1.273 inmigrantes en graves condiciones de salud y alimentación, todos esperando recuperarse para partir hacia América del Norte.

A las extorsiones y al tráfico, tanto de drogas como de migrantes, ha de sumarse la minería ilegal, la compra de tierras a través de terceros (Apartadó, Carepa, Necolí y Turbo, principalmente) y la construcción de infraestructura en zonas con grandes bienes comunes, que en conjunto, sustenta y expande el control territorial de las AGC. El corregimiento de San José, según la Defensoría del Pueblo (2017b): “(...) registra la existencia de seis títulos de explotación minera en zonas del corregimiento, así como cinco solicitudes de títulos mineros en esa área del municipio, lo cual contrasta con la presencia y el control territorial que las AGC mantienen con estructuras armadas en Apartadó” (p. 20). La existencia de concesiones o solicitud de títulos se constituye en un fortín para este grupo paramilitar.

Es evidente que gran parte del copamiento de las AGC en San José de Apartadó, tiene que ver con la posibilidad de ejercer control sobre los bienes comunes, desarrollar megaproyectos y transitar por el cordón estratégico hacia el Puerto de Urabá y la Serranía de Abibe que se conecta con el Nudo del Paramillo, por donde pueden traficar drogas y armas, y a la vez sacar los “recursos de la explotación”.

Entre 2016 y 2017, las comunidades de las veredas de San José de Apartadó, han visto, con preocupación, la llegada de personas que ofrecen a las familias comprar sus tierras al precio que estas oferten, aludiendo que el Estado no invierte en los territorios. Esta es una nueva forma de colonizar y despojar de “manera legal” a los habitantes de sus predios. La oferta regularmente va acompañada de ofrecimiento

⁵³ Este dato fue compartido por un periodista español, que estuvo en 2017 en la zona de Urabá y pudo establecer contacto con migrantes que iban buscando pasar hacia Panamá y de allí a los Estados Unidos.

de empleo. Estos particulares expresan a los campesinos que una vez les compren la tierra, pueden quedarse en las fincas trabajando para ellos. Al parecer estos compradores hacen parte de las AGC, las cuales estarían asegurando: 1) que en caso de futuras intervenciones (exploración y explotación minera), el Estado o las empresas les compren a ellos las tierras, lo que es un gran negocio y una posibilidad para legalizar el dinero; 2) poder desarrollar proyectos (monocultivos) e infraestructura que promueva su agenda social y les asegure presencia en el territorio; y 3) ampliar el control en el territorio.

La “oferta de comprar tierras” se ha dado en Playa Larga (donde se ha ofrecido un millón de pesos por hectárea), La Esperanza, La Resbalosa, Los Mandarinos, Arenas Bajas (donde posiblemente haya coltán), El Porvenir, Mulatos Medio, Mulatos Cabeceras y Saiza. En estos territorios viven familias que en muchos casos retornaron luego de ser desplazados, especialmente por los paramilitares entre 1995 y 1998, lo que renueva la presión a la que están sometidos los campesinos.

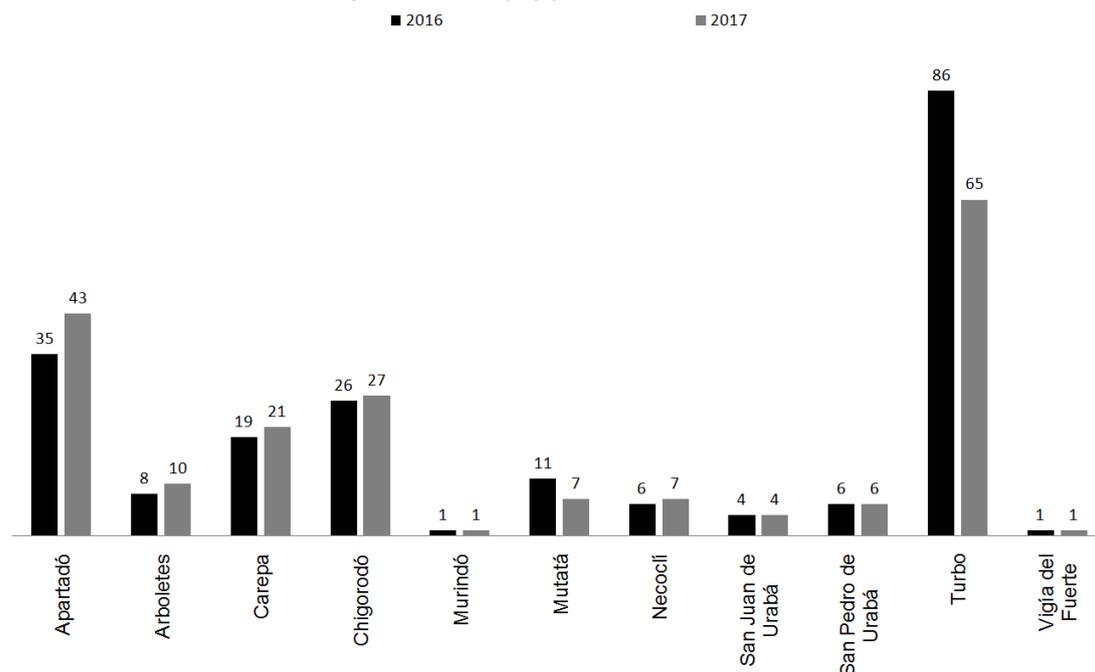
Las AGC está construyendo una carretera desde 2013, entre la vereda La Esperanza y el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo). Esta vía permite a las transportar armas y drogas, así como abastecerse de manera fácil. Además, pasa por la vereda Playa Larga, donde se ubica la Finca “La Marina” que al parecer, es propiedad del máximo comandante de las AGC, alias Otoniel.

Nuevo Antioquia es un corregimiento que les sirve de expendio para comprar y vender lo que se considere necesario. Desde aquí están construyendo una carretera incluso con recurso de Apartadó, sobretodo, están construyendo una carretera que llega hasta la Esperanza, esa carretera pasa por Playa Larga y en Playa Larga hay una finca que se llama La Marina, incluso puede tener 2.000 o 3.000 hectáreas, y cada vez crece más, en la medida que las autodefensas van comprando tierras alrededor van extendiendo esa finca. Esa finca es de alias Otoniel. Allí tienen cualquier cantidad de cabezas de ganado y mulas. (Testimonio de participantes, 2017, p.4)

Otra dinámica económica es la construcción de complejos de viviendas. En la vereda Rodoxalí, Apartadó, se ha reportado la construcción de un complejo de 48 casas nuevas (2014) que habitan personas en su mayoría provenientes de zonas del Magdalena Medio y Córdoba. Este desarrollo inmobiliario realizado por las AGC (Defensoría del Pueblo 2017b, p.11), es parte de los negocios y programas “sociales” que impulsa el grupo paramilitar en los territorios buscando ganar aceptación entre los pobladores y dinamizar la economía local.

En este contexto se presentan constantes amenazas contra la población civil, así como un alto número de homicidios y de desplazamiento forzado.

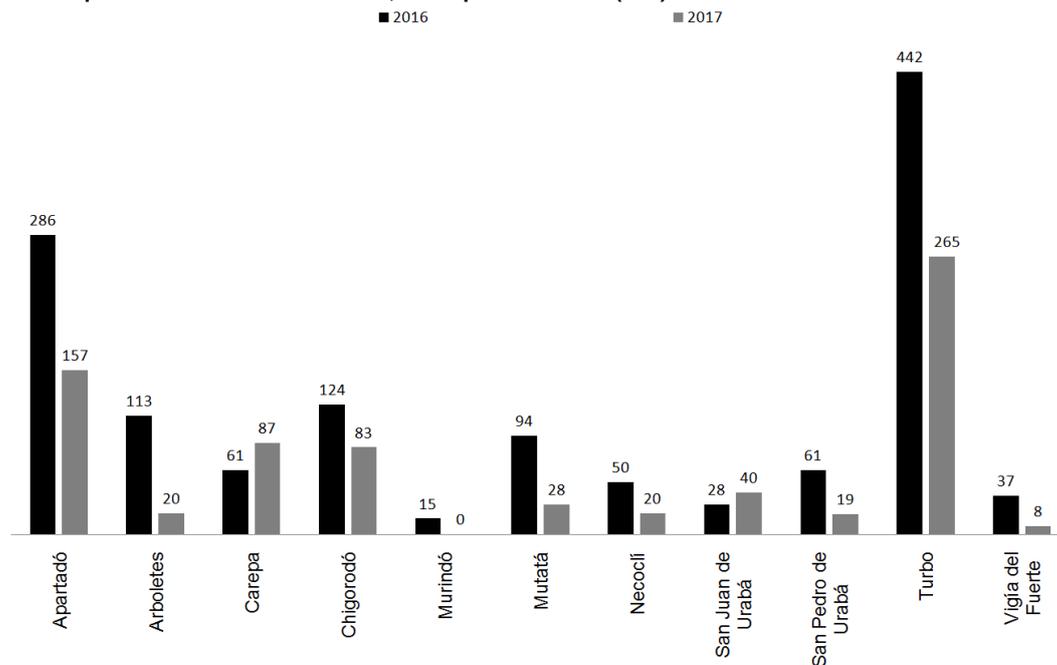
Figura 28: Homicidios en Urabá, Antioquia 2016-2017 (sep.)



Fuente: Policía Nacional

Durante 2016 – 2017, en Urabá se cometieron 395 homicidios. Los municipios con más casos reportados fueron Turbo (151), Apartadó (78), Chigorodó (53) y Carepa (40), los mismos municipios que reportan más desplazamientos forzados en el periodo de estudio (1.505 de un total de 2.038)

Figura 29: Desplazamiento forzado en Urabá, Antioquia 2016-2017 (oct.)



Fuente: UARVI

El alto número de homicidios y desplazamiento en Turbo y Apartadó se puede explicar por la dinámica de violencia que ejercen las AGC y sus estructuras urbanas en los barrios de estos municipios. La Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N° 035 - 17 destaca que “los actos ilegales relacionados con el tráfico de

armas y drogas, e incluso con acciones delictivas como el cobro de las llamadas vacunas y la realización de asesinatos selectivos, guardan relación con la forma en que operan las estructuras de las AGC para ejercer control social y territorial en áreas rurales y urbanas de Apartadó” (p.12).

Como denunció la Diócesis de Apartadó en febrero de este año, la grave situación que vive la región se da gracias al poder irrestricto que tiene este grupo paramilitar y a la baja legitimidad de las autoridades en los territorios.

(...) el control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal... también hay incremento de pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao. (El Tiempo, 2017d, párr.6)

Los jóvenes de los barrios populares de Urabá, así como de las veredas, continúan siendo asediados por las AGC, que buscan reclutarlos ofreciendo entre 600.000 hasta 2.000.000 de pesos mensuales⁵⁴.

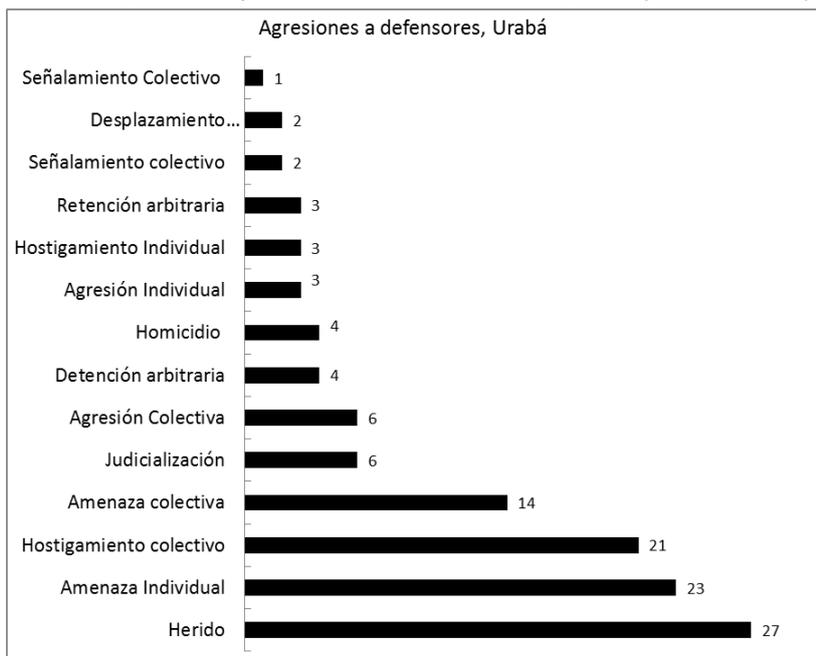
Las AGC vienen copando y posicionándose en zonas dejadas por las FARC-EP, lo que hace que sus dinámicas sigan extendiéndose por Urabá. Si bien, las comunidades esperaban que con el Acuerdo de Paz se lograran cambios territoriales importantes, esto está lejos de ser una realidad pues el “no hacer” del Estado, sumado a la connivencia de agentes estatales con las AGC, impiden que tales expectativas se hagan realidad.

Agresiones contra Líderes Sociales

Durante 2016 - 2017, las AGC continuaron estigmatizando, amenazando y hostigando a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y procesos organizativos de la región. De acuerdo con la base de datos del Observatorio de la Fundación Sumapaz, se han presentado 120 agresiones durante el periodo de estudio. Los principales sectores organizativos victimizados son los campesinos, campesinos reclamantes y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

⁵⁴ Prensaweb, 31 de julio, 2017: AGC, ofrece hasta a \$2 millones mensuales a jóvenes para reclutarlos”: Defensoría del Pueblo.

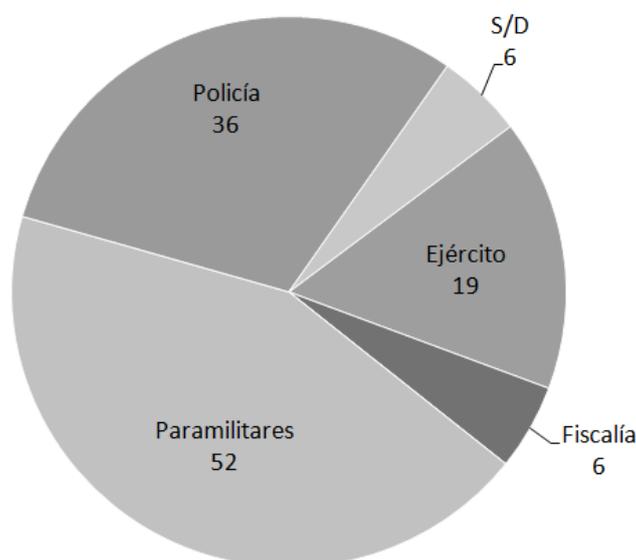
Figura 30: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Urabá, Antioquia 2016–2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

En la mayoría de casos reportados, el principal responsable identificado es el paramilitarismo, seguido por la Policía⁵⁵ y el Ejército Nacional. De los 4 homicidios de líderes sociales (2016-2017), 3 fueron responsabilidad de los paramilitares. Dos de las víctimas eran campesinos reclamantes de tierras y el tercero era campesino del proceso organizativo de Marcha Patriótica. Estos asesinatos demuestran la fragilidad del proceso de restitución de tierras. Los líderes del proceso continúan siendo agredidos bien sea por las AGC o por el Ejército Antirrestitución de Tierras.

Figura 31: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Urabá, Antioquia, 2016–2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

⁵⁵ Gran parte de las agresiones cometidas por la Policía Nacional se presentaron en el marco del Paro Bananero donde participaron comunidades campesinas e indígenas (2016).

Las amenazas individuales (23) y colectivas (14), se han presentado especialmente contra quienes denuncian el control territorial de las AGC. Los líderes y lideresas reclamantes de tierras, de la Comunidad de Paz, así como de integrantes y voceros de ACASA, sufren constantes presiones e intimidaciones por parte de las AGC.

En reiteradas ocasiones, este grupo ha expresado a los líderes y lideresas del territorio que pueden llevar a cabo sus labores, pero que no denuncien su presencia y accionar. Además celebran reuniones donde obligan asistir a miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC). En “El Informe Semestral Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia (2017- I). Para que la Paz No Nos Cueste la Vida” se explica: “También se conoce que las denominadas AGC han iniciado toda una campaña para cooptar y cohesionar a las Juntas de Acción Comunal, las obligan a asistir a reuniones; por lo menos en las veredas de la Serranía del Abibe. A los campesinos les prohíben acceder a los programas de sustitución voluntaria de cultivos del Gobierno Nacional, los obligan a la siembra de cultivos de Coca”. (CJL & Fundación Sumapaz, 2017, p.22).

La marcada estigmatización contra los procesos sociales no impide a las AGC buscar legitimidad entre los pobladores. Uno de los intereses es consolidar una base ciudadana, para esto han llevado a cabo la construcción y arreglo de vías, brigadas de salud con asistencia profesional y financiación de jornadas deportivas, entre otras acciones. Muestra de esto es la brigada realizada en 2016, en varias veredas de Urabá, entre ellas: Congo, Coco, Chigorodosito y Ripea. Esta acción cívico-militar fue publicitada (26 de septiembre 2016) por las AGC en su canal de YouTube.

En este campo de lo comunitario, es importante advertir que este tipo de estrategias cívico-militares, siguiendo el ejemplo de la Doctrina de Acción Integral establecida en el primer mandato de A. Uribe Vélez, no solamente ponen en grave riesgo a la población civil, quien se ve abocada a estar en los eventos sociales que convoca dicha estructura, sino que también consolida socialmente a este estructura armada ilegal. Las Circunscripciones Especiales que fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz para que las víctimas y sectores sociales históricamente excluidos, pudieran tener una presencia en el escenario nacional, podrían estar en riesgo por la influencia que seguramente tendrán las AGC en dichas elecciones.

Urabá presentó entre 2016 y 2017 un contexto territorial marcado por el control de las AGC, como única estructura paramilitar consolidada en los municipios, ejecutando un fuerte control económico y social. Así lo indican los datos, testimonios de víctimas y denuncias de las organizaciones sociales. La responsabilidad estatal por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos presentadas en estos territorios, demuestra una vez más las dificultades para desmontar las estructuras paramilitares que impiden avanzar hacia la democracia y lograr que lo pactado en el acuerdo final sea una realidad, máxime que esta subregión ha sido la más golpeada por el conflicto a nivel departamental.

Norte

La subregión del Norte está ubicada en la Cordillera Central, la conforman 17 municipios y se subdivide en una zona de altiplano en el sur, con mayor población, y las vertientes de los ríos Cauca y Nechí en el norte. Limita al norte con el departamento de Córdoba, compartiendo el Parque Nacional del Nudo de Paramillo, y la subregión del Bajo Cauca. Al occidente limita con las subregiones de Urabá y Occidente, también en área del Parque Nacional. Al sur limita con el Valle de Aburrá y al Oriente con la subregión del Nordeste.

Este territorio posee una gran riqueza hídrica y diversidad de bienes comunes entre ellos, bosques, minerales y tierra para la siembra y la ganadería. Tradicionalmente, la industria láctea, especialmente en los municipios de Entreríos y Don matías, ha sido la principal actividad económica de la región, seguida de la producción de carne vacuna y porcina, el cultivo de caña y café, la confección y, en menor medida, el turismo y la silvicultura (Gobernación de Antioquia, 2016). Por la cantidad de ríos “represables”, la generación de electricidad también se ha convertido en un sector económico importante y en auge para la región, ocasionando nuevos despojos y desplazamientos forzados. Aunque la minería artesanal y a pequeña escala sea una actividad ancestral en la zona, la minería transnacional se expande imparable al amparo de las Licencias Mineras, causando desarraigo a los pobladores.

Por el Norte fluye el río Cauca, segunda arteria fluvial del país y afluente del principal río colombiano, el Magdalena, comunicando la subregión con la costa Atlántica. Sobre el propio río Cauca, en los municipios de Ituango, Toledo y Briceño, se está construyendo la mayor represa de Colombia, que inundará el Cañón del Cauca a lo largo de 70 km generando 2400 MW de electricidad e innumerables impactos socioambientales. El Norte es la subregión con más proyectos hidroeléctricos planeados o en construcción del departamento (UPME, 2010). Además de Hidroituango, se tienen proyectadas tras grandes centrales, entre ellas, la del río Espíritu Santo, en Briceño con una capacidad de 700 MW.

Los megaproyectos en el Norte antioqueño, financiados por entes nacionales e internacionales son, esencialmente, de hidroelectricidad o de minería aurífera. Algunos se consideran Proyectos de Interés Estratégico Nacional (PINES), dirigidos a nivel del Gobierno central y con un proceso acelerado de comercialización. Entre los megaproyectos mineros se encuentra la concesión, en los últimos años, de un tercio del territorio del municipio de Santa Rosa de Osos a la minera canadiense Red Eagle Mining para explotar los depósitos de oro San Román. Durante las negociaciones de estos títulos mineros comienza “la primera crisis de violencia que vive el municipio (Verdad Abierta, 2012, par.1)”, que aunque atribuida a grupos paramilitares con objetivos de control económico y territorial, coinciden con el “trayecto temporal en que se instala [el] proyecto minero (IPC, 2015, p. 283).”

Briceño es otro municipio del Norte copado por los intereses mineros transnacionales, en este caso, de la también canadiense Colombian Gold. Casi la totalidad del territorio de Briceño (36.668 ha de 40.100 ha) tiene titulación de explotación minera, y en sobre el resto, ya se han solicitado títulos de explotación ante el Ministerio de Minas y Energía (IPC, 2015, p. 284).

Los proyectos impuestos a los territorios generan nuevas victimizaciones que son negadas por el Estado colombiano incumpliendo su deber de garantizar a la población los derechos humanos. El desarrollo de megaproyectos ha sido precedido por la concentración de tierras en manos de individuos y empresas nacionales y transnacionales, que unido al despojo de tierras en Ituango y Valdivia ha resultado en índices de desplazamiento muy elevados. Según la UARIV (2017), después de Bajo Cauca, el Norte tiene las tasas de desplazamiento (en proporción a su población) más altas del departamento (2016- 2017).

El Parque Nacional del Nudo del Paramillo es un lugar estratégico por su conexión con las zonas de Córdoba y Urabá. Esto ha llevado a los grupos armados ilegales a disputar su control. Este territorio fue una de las zonas de gran influencia de las FARC – EP, además de ser un área de disputa con la fuerza pública y los paramilitares, en especial las AUC y después de su desmovilización, con los Rastrojos y las AGC. Allí existe una gran extensión de cultivos de coca. Por tanto, las dinámicas del narcotráfico, desde el cultivo hasta la comercialización se presentan en la región. La situación geográfica del Norte también ha facilitado el desarrollo de rutas de narcotráfico de nivel nacional.

En esta subregión se han presentado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Durante la década de los 90 hasta 2006, se reportaron numerosas masacres⁵⁶, asesinatos selectivos, amenazas, hostigamientos, empadronamientos y confinamientos por parte de los paramilitares, la fuerza pública y la insurgencia. Después de 2007, las cifras de agresiones descienden, pero en los 17 municipios se siguen reportando graves violaciones a los derechos humanos y sobre todo aún continúa persistiendo la actuación de los grupos paramilitares.

De acuerdo con el IPC (2017b), en la subregión viven alrededor de “263.742 habitantes. Esta cifra equivale al 3.9% de la población de Antioquia para 2017 (6.613.063), según proyección del DANE. 123.317 habitantes de esta subregión se hallaban inscritos como víctimas del conflicto armado en el RUV hasta 2016, algo así como el 49.4% de la población actual” (IPC, 2017, párr.1). Cifras que muestran la intensidad y efecto del conflicto en la vida de las comunidades.

En la actualidad, este territorio presenta un contexto marcado por la presencia y dominio de las AGC, que han copado los antiguos territorios de las FARC- EP. Además, también han entrado estructuras del Valle de Aburrá, principalmente de Bello y Medellín y Los Rastrojos mantienen presencia aunque con menor capacidad. La presencia paramilitar se ha traducido en amenazas, homicidios, desplazamientos y agresiones contra la población y los procesos sociales, defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales, especialmente de la Plataforma Política y Social Marcha Patriótica, el Movimiento Ríos Vivos - Antioquia, y otras expresiones organizativas de sectores como el minero y el cocalero. También se registran con preocupación en este contexto territorial, los homicidios de 3 excombatientes de las FARC- EP, todos en Ituango, lugar donde se instaló una ZVTN.

⁵⁶ Masacre de La Granja, El Aro, Pio X (Ituango), Juntas en Puerto Valdivia, El Cántaro- San Andrés de Cuerquia, El Cedral- Yarumal, entre otras.

Paramilitarismo y fuerza pública

La subregión del Norte ha tenido presencia de grupos insurgentes, en especial de las FACR - EP que ingresaron al territorio en los 80s y se mantuvieron hasta su proceso de dejación de armas (2016). Los frentes que mayor influencia tuvieron en la zona fueron el 36 y el 18, y La Móvil Mario Vélez. Por su parte el ELN, que ingresa en esa misma época, ha hecho presencia a través del Frente Guerrillero Tomás, Frente Guerrillero Hereos de Anorí (sigue operando) y la Compañía Móvil María Eugenia Vega.

Los paramilitares han hecho presencia en el territorio desde los 80 con varias etiquetas, entre ellas: Muerte a Revolucionarios del Nordeste (Valdivia) y grupos privados. A principios de los 90 partieron hombres de las ACMM y de las ACCU hacia el Norte y Occidente de Antioquia, como parte del proyecto de expansión paramilitar desde el Magdalena Medio, Urabá y Córdoba, que finalizaría hacia 2003 y contó con el beneplácito de agentes del Estado que no actuaron para frenar dicho avance.

Entre 1994 y 1996, aparecen en el Norte Los Doce Apóstoles y el grupo Los Pérez, que actuarían contra la población civil, sectores sociales marginados y presuntos auxiliares de la insurgencia. Como señalara el Consejo de Estado (2012), Los Doce Apóstoles⁵⁷ no solo contaron con apoyo de la fuerza pública, sino que, a menudo, actuaron de manera conjunta para cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Para 1997, los Doce Apóstoles y Los Pérez desaparecen de la escena, mientras que las AUC deciden configurar, con ayuda de personalidades claves de la región y de miembros de la fuerza pública, el Bloque Mineros, que permanecería hasta su desmovilización (2006) al mando de Ramiro Vanoy. También operaron en esta zona el Bloque Noroccidente Antioqueño y el Bloque Metro. Esta expansión y pervivencia paramilitar fue posible gracias al beneplácito de las fuerzas del Estado.

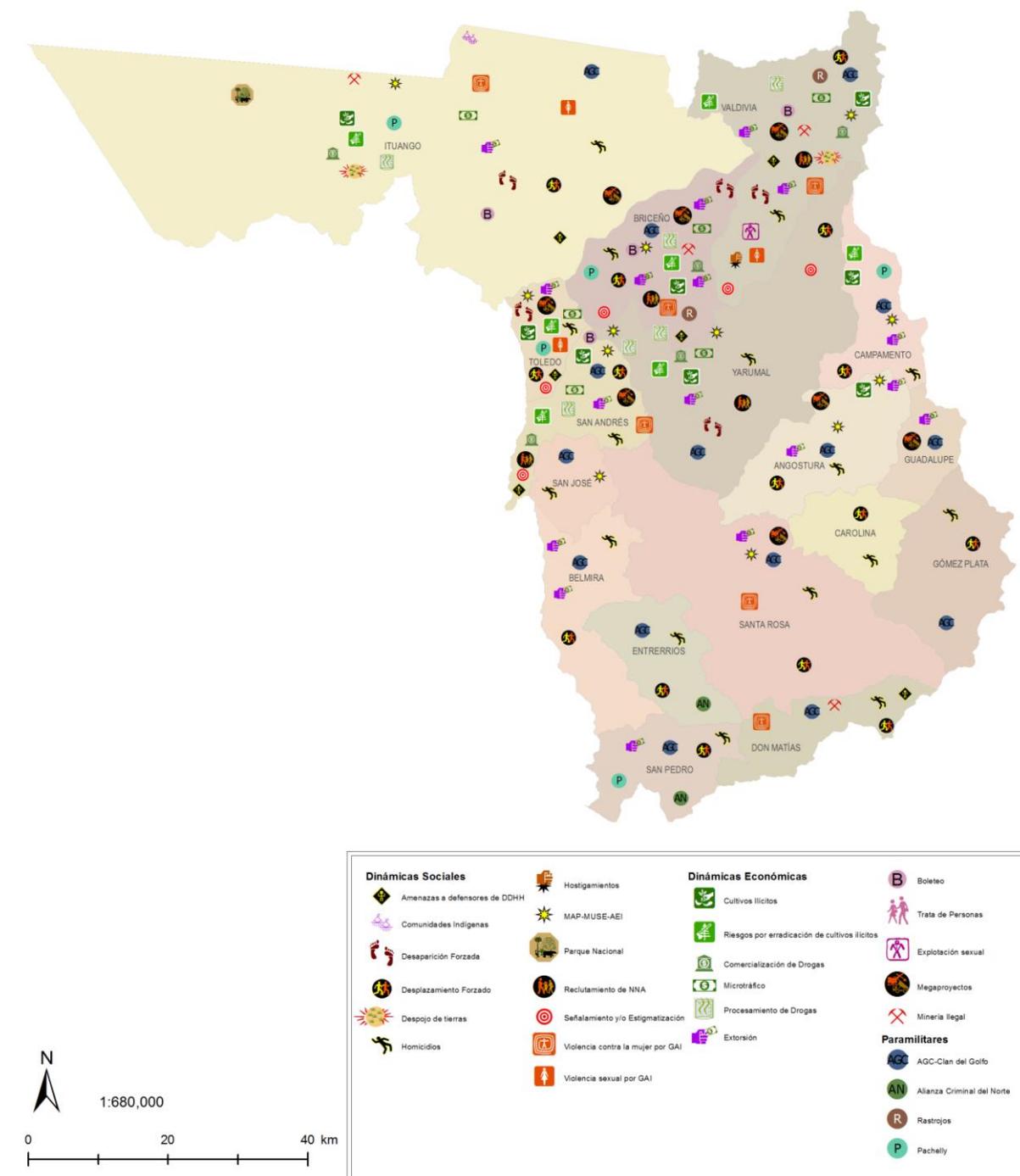
Ramiro Vanoy: Había coordinación en la zona, porque siempre se coordinaba el taponamiento. Cuando el Ejército se metía a la zona, le coordinaba con el comandante militar de la zona de las autodefensas. Le decía que ellos iban a estar por tal parte y coordinábamos para que las Autodefensas taponaran el otro lado. Fiscalía: ¿cuándo el Ejército les hacía ese taponamiento ellos sabían que ustedes iban a hacer incursiones armadas? Ramiro Vanoy: Lógico doctora (...) Fiscalía: ¿ellos sabían que ustedes asesinaban personas, que desplazaban personas, todos los crímenes que ustedes iban a cometer allá? Ramiro Vanoy: ellos saben que el grupo de las Autodefensas... iban a ir a combatir guerrilleros, y habían combates e iban a haber muertos, como no lo iban a saber. (Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, 2015, p.157)

El desarrollo de la estrategia paramilitar combinó las acciones militares, con un copamiento de la esfera pública, el control sobre la mayor parte de los territorios (excepción Ituango, donde no pudieron establecerse de manera permanente) y la imposición de un régimen social que impedía a las comunidades ejercer sus derechos de manera libre. Muestra de ello son las agresiones a la población, entre

⁵⁷ Presuntamente hace parte del grupo el ganadero Santiago Uribe Vélez, contra quien hay un proceso de investigación abierto por su relación con esta estructura y la muerte de un civil.

ellas, 18 masacres cometidas por AUCC y el Bloque Mineros entre 1995 y 2003 (CJL, 2017) que se caracterizaron por la sevicia y la crueldad.

Figura 32: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Norte, Antioquia



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias.

Posterior al proceso de desmovilización del Bloque Mineros (2006) y el Bloque Noroccidente Antioqueño (2005)⁵⁸, en 2007 hacen presencia en la subregión, especialmente en Valdivia y Briceño: las Águilas Negras (Defensoría del Pueblo,

⁵⁸ El Bloque Metro fue en su mayoría exterminado en el Norte por los bloques Cacique Nutibara y Mineros (2001). Los hombres que quedaron vivos terminaron adhiriéndose a algunas de las estructuras de las AUC.

2008, p.18), las AGC, los Rastrojos y los Zorros. De acuerdo con los informes publicados por el Nodo Antioquia de la CCEEU (2013, 2014 y 2015) y La Defensoría del Pueblo (2011 y 2014) las AGC se han ido extendiendo hacia municipios como San Andrés de Cuerquia, Ituango, Toledo y Yarumal.

De acuerdo con la cartografía realizada, en el Norte, las AGC hacen presencia en 16 de los 17 municipios, no se registran en Carolina del Príncipe. Los Pachelly se han asentado en Ituango, Briceño, Campamento, San Pedro de los Milagros, Toledo y la zona de rural de Valdivia (CJL & Fundación Sumapaz, 2017). La ACN (Chatas, El Mesa, Pachelly), en coordinación con las AGC, hace presencia en: Entreríos, San Pedro de los Milagros y Yarumal. Los Rastrojo se encuentran en Briceño y Valdivia, y el grupo Los Triana, en Yarumal.

La Defensoría del Pueblo, en sus Informes de Riegos (2016 y 2017) de Briceño e Ituango, reporta la presencia de las AGC y las agresiones cometidas contra la población civil y procesos comunitarios. En Briceño, han tomado control del corregimiento Las Auras, las veredas Los Rodríguez, El Turco, La Vélez, San Francisco, Santa Ana, Campo Alegre, Chorrillos, La Cristalina, Morrón, Polvillo, La Palestina, El Respaldo y la cabecera urbana donde se mantienen hasta la actualidad (Defensoría, 2016). En Ituango, las AGC hacen presencia en las veredas el Cedral y Santa Ana y los corregimientos Santa Rita, La Granja y El Aro, zonas donde operaban antiguamente las FARC - EP. En octubre de 2017, se registró la presencia de las AGC en El Aro, donde, según la población, desde hace 4 meses están incursionando sin que la fuerza pública presente ningún tipo de acción para detenerlos.

Entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, las AGC llevaron a cabo las primeras afectaciones generalizadas a la población civil, haciendo presencia armada en grupos conformados entre 3 y 20 hombres, llevando a cabo recorridos intimidantes en varios puntos de la zona rural de Ituango, tales como las veredas Guacharaquero y Santa Ana; en el Corregimiento Santa Rita en las veredas Pascuitá y La María; en el Corregimiento La Granja en las veredas Chontaduro, Zancudo y Alto de Cenizas; la vereda La América entre los Corregimientos Santa Rita y El Aro. En El Aro en la vereda Torrente. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.20)

Otro de los municipios afectados por las AGC es Valdivia, donde también operan Los Pachelly y Los Rastrojos. En sectores conocidos como el Km 12, Km 15, Puerto Raudal y Puerto Valdivia se ha detectado la presencia de grupos de patrullaje de entre 15 y 30 hombres. Uno de los aspectos novedosos sobre la actuación de estos grupos es que ya no poseen bases permanentes, sino que se movilizan de manera continua y cambian regularmente a sus mandos, lo que hace que en muchos casos la población no pueda identificarlos plenamente. En noviembre de 2016, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció que habitantes del territorio fueron obligados a Marchar por la Paz en Puerto Valdivia en medio de un escenario en que las AGC buscan reconocimiento político para negociar con el Estado.

La expansión de las AGC y los Pachelly se da en medio de una fuerte presencia de la fuerza pública en los 17 municipios. Su afianzamiento territorial se impone gracias a las prácticas de control (caracterizadas por implantar reglas de convivencia, amedrentar a la población y a los procesos sociales, desarrollar una agenda social

para ganar legitimidad y generar rentas a través de la economía ilegal basada en extorsiones, minería ilegal y narcotráfico) y a las actividades militares (como patrullaje abierto en zonas veredales, paros armados 2012 y 2016 y asesinatos).

Aunque es claro que el dominio del territorio es principalmente de las AGC, estructuras urbanas como los Pachelly y la ACN se han venido asentando en los territorios. Esta expansión es fruto de la coordinación entre estos grupos y las AGC. La ACN (Análisis Urbano) tiene como fin ampliar su radio de acción, que se halla principalmente en el Valle de Aburrá, hacia las zonas rurales donde pueda ampliar su control sobre la cadena del narcotráfico y la extorsión y sumar nuevos ingresos a través de la minería ilegal. No obstante, no es solo un asunto económico. Su presencia en el Valle de Aburrá se ha caracterizado por generar presión sobre las comunidades y graves violaciones a los derechos humanos, comportamientos que no son distintos en la ruralidad que vienen copando.

Esta expansión de grupos urbanos hacia zonas rurales, podría leerse ¿cómo estrategia para que las bandas y combos que están en el Valle de Aburrá, ganen terreno y esto se traduzca en posibilidades para entrar a negociar con el Estado? ¿La ACN es una forma de asegurar intercambios y coordinación entre ambas estructuras, de tal manera que se hereden poderes y se aseguren territorios en un posible escenario de sometimiento de las AGC? Y de ser esto real, ¿No se estaría nuevamente ante otro proceso fallido de desmovilización paramilitar? Estas son preguntas que emergen cuando se analiza el mapa de presencia paramilitar en el Norte.

Las estructuras paramilitares que operan en esta subregión se han expandido y consolidado en medio de una fuerte presencia de la fuerza pública. El Ejército Nacional, en el territorio opera a través de las unidades BAJES, BIGIR, BIOSP⁵⁹ y el Batallón N° 4 adscritos a la IV Brigada. Además hay unidades militares al servicio del proyecto Hidroituango, que según la Fiscalía General de la Nación⁶⁰ (2013), sumarían unos 2.000 efectivos que llegaron en 2011 y 2012 a reforzar la seguridad en la zona. También se cuenta con Estaciones de la Policía Nacional en cada municipio.

La presencia de la fuerza pública no garantiza la seguridad de la población que expresa temores por la presencia y actuación de los grupos paramilitares. Se han realizado denuncias, por ejemplo por pobladores del Corregimiento de El Aro, Ituango (octubre de 2017), que indicaron como hombres de las AGC hicieron presencia en las veredas Filadelfia y San Luís. En El Aro hay una base del Ejército Nacional, por ser territorio afectado por la hidroeléctrica Hidroituango.

El pasado jueves 5 de octubre realizaron una intimidante reunión en la vereda Filadelfia siete hombres armados con fusiles y armas cortas, con camiseta camuflada y sudadera hicieron presencia, mientras otro grupo los esperaba en la cordillera, todo el mundo sabe en donde

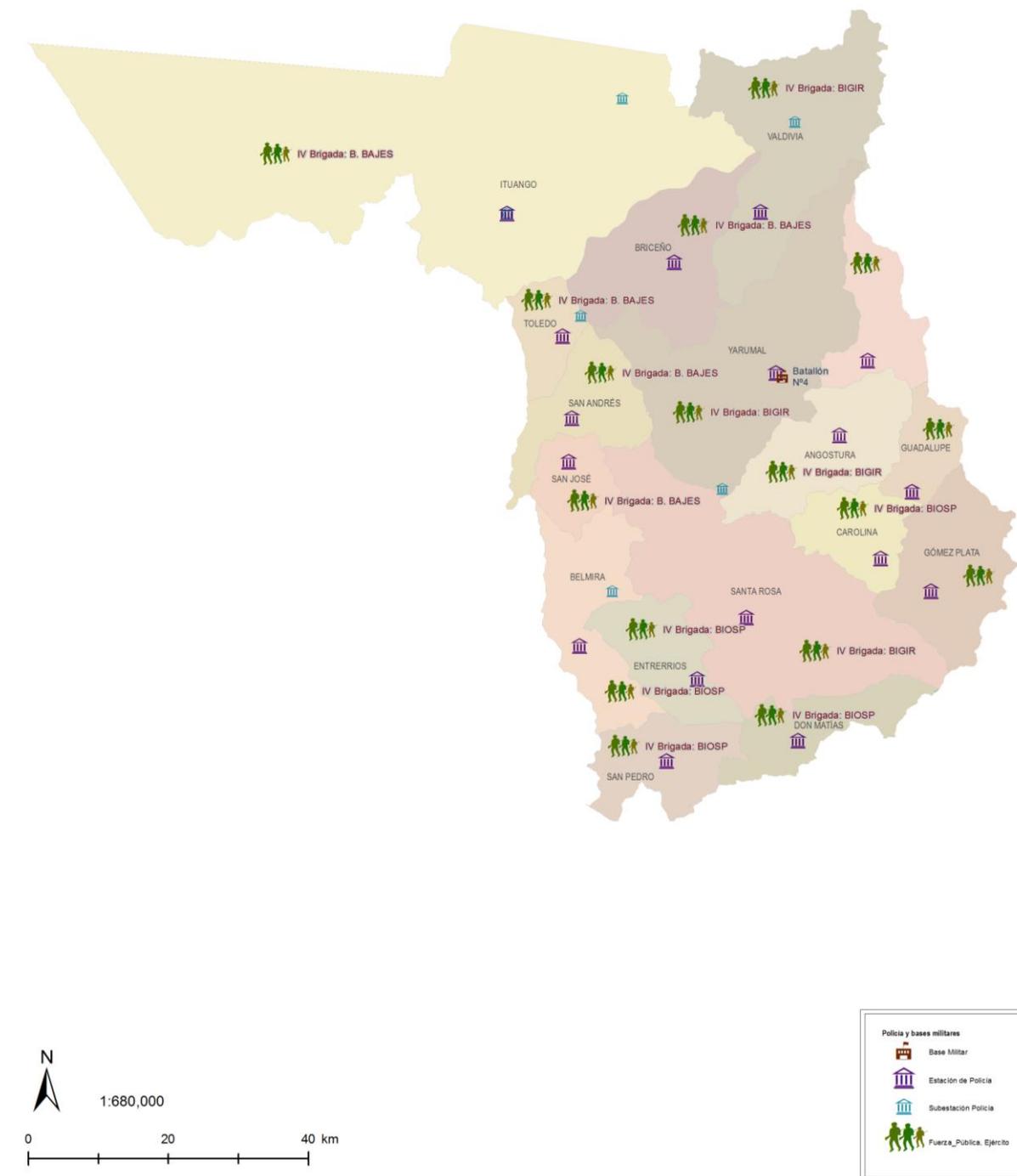
⁵⁹ Batallón de Artillería N 4 Coronel Jorge E. Sánchez- BAJES, Batallón de Infantería No.10 Coronel "Atanasio Girardot"- BIGIR, Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, Batallón de Instrucción Táctico de Entrenamiento y Reentrenamiento número 4.

⁶⁰ Este dato fue presentado en una de las Audiencias contra el Bloque Mineros en el marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz.

están menos el Ejército. Ayer estuvieron en la vereda San Luis, en donde se la pasan de manera más frecuente. Es decir una de las veredas de la parte alta y otra de la parte baja en menos de dos días lo que indica el control del territorio está avanzando (...) En el corregimiento El Aro existe una base militar del Ejército Nacional que garantizaría la seguridad de la zona, no obstante van cuatro meses con presencia permanente y cercana de este grupo al margen de la ley sin que el Ejército haga nada al respecto para proteger la vida de los campesinos de una región fuertemente golpeada por la violencia y sobre la que se avecina una fuerte revictimización. (Proceso Social De Garantías Para La Labor De Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales, Defensores, Defensoras De Derechos Humanos De Antioquia, 2017, párr.3)

Esta situación no es exclusiva en Ituango, en el caso de Briceño, pese a ser un territorio donde se han desarrollado dos planes pilotos, uno de desminado y otro de sustitución de cultivos de coca, y donde hay una fuerte presencia militar, se ha reportado patrullaje en zonas rurales y a la vista de los pobladores.

Figura 33: Presencia de fuerza pública en Norte, Antioquia



Fuente: Policía y Ejército Nacional.

Aunque durante 2016 y 2017 se han reportado capturas de jefes e integrantes de los grupos paramilitares AGC, Los Triana y Los Pachelly, principalmente⁶¹, estas acciones resultan insuficientes para detener su avance. Pese a que no se conocen

⁶¹ AGC: Fernely Guevara Pérez, alias Manuel, quien estaba a cargo de la zona de Valdívila; Robinson de Jesús Quirós Chávez, alias Pitufo, quien, según la Policía Nacional, habría ejecutado el Plan Pistola en el Norte contra uniformados de la fuerza pública; Walter Salazar Aguirre, alias Cheo del grupo Los Triana quien estaba controlando parte de las extorsiones y microtráfico en Yarumal. En febrero de 2017, la Policía reportó la captura de 21 integrantes de la banda Los Gatos en el municipio de Don Matías. Esta estructura según la Policía trabaja coordinadamente con Los Pachelly.

investigaciones o detenciones de Policías o miembros del Ejército Nacional en el Norte por nexos con grupos paramilitares durante el periodo de estudio, esto no indica que no se presenten relaciones entre estos actores. No es posible que estas estructuras hayan avanzado en los municipios sin una actitud favorecedora de agentes estatales, quienes a pesar de conocer la situación no toman medidas suficientes ni efectivas para desmontar el paramilitarismo.

Dinámicas económicas y sociales

En el Norte de Antioquia los grupos paramilitares presentan dinámicas económicas principalmente ilegales. Las actividades reportadas en la cartografía son: extorsiones, minería ilegal, toda la cadena del narcotráfico (siembra, procesamiento y comercialización, incluido el microtráfico) y la trata de personas (explotación sexual).

De acuerdo con las denuncias de las comunidades y los resultados presentados por la Policía Nacional⁶², las extorsiones se han dirigido contra comerciantes, empresarios de la región, transportadores y pobladores: “en algunos casos se presenta extorsiones en las JAC, lo que pone en riesgo a los defensores debido a que son ellos quienes, generalmente, denuncian este tipo de acciones criminales. Se informa que se han presentado casos en Valdivia, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal” (Testimonio de un participante, 2017, p.4).

En la cartografía se identificó minería legal en San José de la Montaña, Ituango, Toledo, Briceño y Valdivia, y minería ilegal en Ituango, Valdivia, Don Matías, Santa Rosa y Belmira, territorios con presencia de las AGC, los Pachelly, la ACN y los Rastrojos. “Así, en Briceño la criminalidad se apoderó de lo que antes controlaban las FARC. los Gaitanistas y la banda Pachelly —respaldada por la Alianza Criminal del Norte, al mando de alias Tom Chata, de la banda Los Chatas, también de Bello— ven un negocio redondo (...) minería informal y coca, con lo que asegurarían sus finanzas para seguir delinquiendo” (Análisis Urbano, 2017c, párr.9).

De acuerdo con el Censo de las Naciones Unidad Contra las Drogas y el Delito en Colombia (2017): “La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 ha en 2015 a 146.000 ha en 2016; un 52% de incremento” (p.15). De acuerdo con este estudio, Briceño presenta reincidencia en la siembra de coca (p.31) pese a que en este territorio se llevó a cabo el Plan Piloto de Sustitución de Cultivos (vereda Orejón) en el marco del Acuerdo de la Habana. Esta reincidencia podría obedecer a la presión (amenazas) de los grupos paramilitares, AGC, Rastrojos y Pachelly, para que sigan cultivando y así poder mantener el negocio del narcotráfico, a esto se suma las precarias condiciones económicas de los campesinos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2017a) señala que Ituango puede volver a elevar el número de hectáreas de siembra de coca, debido a la presencia paramilitar, en especial de las AGC, que implementan una doble estrategia: por un lado, amenazas y por otro, ofertas importantes de dinero por hoja de coca.

⁶² El Tiempo, 1 de julio, 2017: Capturan presuntos integrantes del Clan del golfo, en Antioquia.

Ante el control territorial iniciado por las AGC en Ituango en lo que va corrido del año, este grupo ilegal está ejerciendo presión sobre la población civil y ofreciendo dádivas económicas para que mantengan y fortalezcan este tipo de cultivos, tal y como lo están haciendo en varios de los municipios de las subregiones del norte y occidente de Antioquia (...) Así mismo han señalado que asumirán el control del circuito productivo y de comercialización de la coca, esperando que ello sumado con la intimidación por la vía armada, sirva para incrementar los sembradíos de coca y fortalecer los ingresos que les permiten, entre otros aspectos, generar las condiciones para su sostenimiento militar. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.20)

En los municipios de Briceño, Valdivia e Ituango se han presentado casos de agresión contra personas que han venido participando en el programa de sustitución acorde con lo establecido en el Acuerdo de Paz. En un hecho reciente (8 de octubre, 2017), se conoció que las AGC en El Aro, llegaron como “nuevo comprador de coca y obligan al campesino a venderle, esté o no, en el proceso de sustitución. Lo que demuestra que el problema de la sustitución no es de los campesinos sino un problema de seguridad a cargo del Estado” (Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresa Sociales, Comunales, Defensores, Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, 2017, párr.1).

Los homicidios de Miguel Pérez en Tarazá y Ramón Alcides García Zapata en Briceño, cometidos en octubre y ambos líderes de procesos campesinos para la sustitución de cultivos, adscritos a Marcha Patriótica y a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) muestran el grave riesgo en el que se encuentran los líderes sociales que apuestan por la sustitución.

Al riesgo que implica el aumento de los cultivos de coca, se suma el asociado a la instalación de laboratorios para el procesamiento de la droga cercano a los cultivos. En la actualidad, se han identificado laboratorios en Ituango, Valdivia, Briceño, Yarumal, Campamento y San Andrés de Cuerquia. Las AGC y Los Pachelly, transportan droga desde estos municipios hacia otras zonas de Antioquia y la comercializan, también en plazas de vicio del Norte, que han aumentado su distribución. “Se ha advertido que el microtráfico hace parte de toda esta empresa del crimen con eslabones de economía ilegal que influyen directamente en la tasa de homicidios, amenazas, extorciones, desplazamientos, reclutamiento forzado, etc” (CJL & Fundación Sumapaz, 2017, p.25).

También ha aumentado la presencia de otras estructuras paramilitares en este negocio, principalmente aquellas que provienen de Bello y Medellín y que gracias a alianzas con la AGC se establecen en municipios del Norte. La presencia en particular de Los Triana en Yarumal, es un ejemplo de la expansión que están realizando ciertas estructuras hacia la ruralidad.

La más reciente captura de Walter Salazar Aguirre, alias Cheo, presunto cabecilla de la banda paramilitarizada de Los Triana, pone en evidencia la presencia de una estructura criminal que no solo está al servicio del narcotráfico, que trascendió lo urbano y ahora hace presencia en zonas rurales, o sea, actores principales del crimen urbano-rural, con lo cual ha ampliado sus fronteras y negocios, como pagadario, vacuna (extorsión), apuestas ilegales, prostitución, entre otros, como lo han hecho los Pachelly, El Mesa, Los Chatas —estos últimos líderes de la ACN auspiciada por las AGC. Las bandas que tendrían el control del narcotráfico y el expendio de alucinógenos en Yarumal serían: Pachelly y Los Chatas, de Bello, con la marihuana, el

perico, metanfetaminas; las AGC con servicios de protección, compra de base de coca y cocaína procedente de los corregimientos El Cedro y El Pueblito, así como los municipios de Briceño y Campamento; y Los Triana con plazas de vicio y servicios de sicariato, tarea que estaría desempeñando alias Cheo. (Análisis urbano, 2017a, párr.2)

Esta situación de expansión fue corroborada por la Directora de Unidad de Fiscalías Contra el Crimen, Claudia Carrasquilla a través de los medios de comunicación regional (noviembre, 2017). Sostuvo que estos grupos llevan a cabo explotación de la minería ilegal, cobro de extorsiones y tienen plazas de vicio en varios municipios del Norte.

La presencia de las AGC, Los Rastrojos, la ACN (Los Pachelly, El Mesa, Los Chatas) y Los Triana se relaciona con dinámicas sociales marcadas por prácticas de intolerancia social, amenazas, señalamientos, hostigamientos, homicidios y desplazamientos forzados. A esto se suman confinamientos de la población, especialmente en Briceño, por temor a las amenazas efectuadas por las AGC. Estas dinámicas afectan especialmente a las comunidades más vulnerables, entre ellas a los indígenas quienes han padecido la guerra y la presión de los actores armados.

De acuerdo con los Informes de Riesgo de la Defensoría del Pueblo de 2016 (1) y 2017 (2) para Briceño e Ituango, las AGC han actuado contra la población civil, generando miedo e impidiendo a la población movilizarse de manera libre.

Briceño: La estigmatización por parte de las AGC contra la población civil del Corregimiento Pueblo Nuevo (veredas El Orejón, La Calera, La Mina, Alto de Chirí, Berlín y Buena Vista) y las veredas La América, la Vélez y Travesías, así como las amenazas contra la vida, la libertad e integridad personal, el temor de ser judicializados por las autoridades a causa de estos señalamientos y las restricciones en la movilidad para evitar ser víctima de accidentes con minas antipersonal, conlleva a que actualmente esta población no acuda a las zonas de presencia de ese grupo armado ilegal post desmovilización, incluida algunos sectores de la cabecera municipal de Briceño, lo que ha sido denunciado por algunas organizaciones sociales como una situación de confinamiento que, finalmente podría derivar en el desplazamiento forzado de la población de esta zona rural hacia municipios como Toledo, ante el probable desabastecimiento de alimentos y la falta de garantías para preservar su vida. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 006-1, 2016d, p.4)

En Ituango, la Defensoría advierte en los Informes de Riesgo 003-17 y 037-17 (2017) que las AGC están imponiendo mecanismos de disciplinamiento social y amenazan a pobladores a quienes acusan de cometer delitos (hurtos, violencia sexual, etc.). Esta práctica de control y exterminio, que décadas atrás resultó en múltiples homicidios contra ciertos sectores de la sociedad catalogados como “problemáticos”, se podría repetir en este territorio de no tomarse las medidas necesarias de protección a la población por parte del Estado:

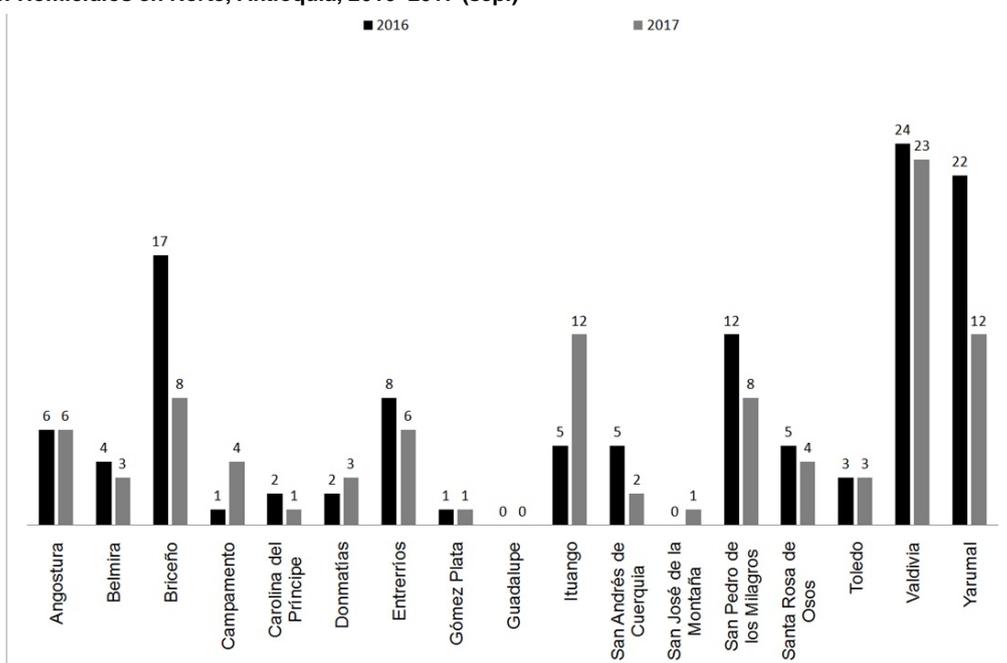
Briceño: En el último año, a partir del fortalecimiento de su presencia armada con hombres que provienen de zonas como las subregiones del Urabá y Bajo Cauca de Antioquia, han exacerbado el señalamiento y la estigmatización sobre la población civil que habita en las zonas que históricamente han sido de control de las FARC EP, acusándolos de ser parte de esta estructura y profiriendo amenazas contra su vida e integridad personal. Asimismo, su accionar ha estado orientado a ejercicios violentos de control social, mediante la intervención en riñas callejeras, la regulación de la vida cotidiana de los pobladores, la imposición de reuniones a la población, la ocurrencia de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y

desapariciones forzadas y el recrudecimiento en el cobro de exacciones a comerciantes y lecheros. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 003-17, 2017e, p.4).

Ituango: (...) En varias ocasiones han declarado objetivo militar a las personas a las que asocian con la comisión de presuntos delitos sexuales y hurtos y han causado temor generalizado en la población al amenazar con la imposición de castigos ejemplarizantes y/o multas económicas a quienes no acaten sus pautas de comportamiento en relación con la ingesta de alcohol, la prohibición del consumo de drogas y la realización de trabajos forzados en vías y caminos veredales. Así las cosas la incursión de las AGC al municipio de Ituango y su evidente expansión, ha generado en la población civil que allí habita un fuerte temor de perder su vida o ver afectada su integridad, libertad personal y seguridad, pues aún se guarda en la memoria colectiva el recuerdo de la cruel violencia paramilitar que solo fue contenida en ese entonces, por la presencia de las FARC-EP en el territorio. Por ello ahora, ante la dejación de armas por parte de este grupo insurgente, surge nuevamente el temor de que la población pueda ser víctima de retaliaciones y agresiones similares a las sufridas en el pasado. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.4).

Según la Policía Nacional (2017), entre 2016 y 2017 en el Norte hubo 214 homicidios, principalmente en Valdivia (47 casos), Yarumal (34), Briceño (25), San Pedro de los Milagros (20) e Ituango (17). Hay presencia de más de un grupo paramilitar en: Valdivia, AGC y Rastrojos; y Yarumal: AGC, ACN y Triana.

Figura 34: Homicidios en Norte, Antioquia, 2016–2017 (sep.)



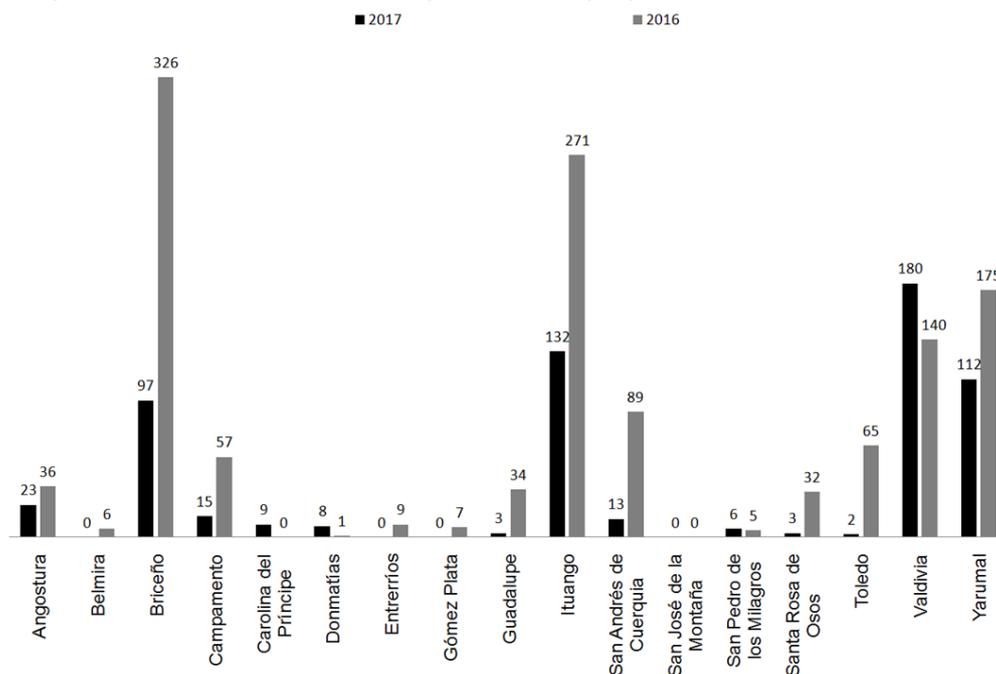
Fuente: Policía Nacional

En Ituango, donde se instaló una ZVTN tras la firma del Acuerdo de Paz (noviembre, 2016), se asesinaron a 3 excombatientes de las FARC – EP, como se detalla en la sección de contexto departamental de este documento. Al cierre del informe, no se conocen datos sobre los responsables de estos hechos, presentados a los 6 meses de la firma del Acuerdo y en zonas donde hay efectivos de la Policía y del Ejército Nacional. Las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, han solicitado al Estado, mayor protección para la vida de los excombatientes.

La secretaria de Gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez, a raíz de la muerte de unos de los excombatientes, Daladier de Jesús Vásquez (noviembre, 2017) expresó: “no hay cómo proteger la vida de los excombatientes porque la Gobernación no cuenta con listados claros de quiénes son los indultados.” (El Tiempo, 2017, párr.2). Estas declaraciones muestran la falta de voluntad política regional y de ineficacia estatal en la protección de los derechos de los ex miembros de la insurgencia de las FARC-EP.

También el desplazamiento forzado vulnera los derechos de la población y se encuentra ligado a la presencia de los grupos paramilitares. De acuerdo con la UARIV (2017), en el Norte se reportaron 1.856 personas desplazadas (en 2016, 1.253 y en 2017 hasta octubre, 603). Los municipios que más casos presentaron fueron Briceño (423 personas), Ituango (403 personas), Valdivia (320 personas), Yarumal (287) y San Andrés de Cuerquia (102 personas).

Figura 35: Desplazamiento forzado en Norte, Antioquia, 2016-2017 (oct.)



Fuente: UARVI

El alto número de desplazamientos registrados en Briceño, Ituango y Valdivia está relacionado principalmente con la dinámica paramilitar, como muestran los desplazamientos de familias en: Briceño: veredas La América, Las Auras, El Roblal, Raudal, Ladera, La Rodríguez y Travesías. Todos se realizaron de manera silenciosa por los temores de la población (Defensoría del Pueblo, 2016-2017). Estos desplazamientos individuales, colectivos y masivos obedecen a las amenazas que las AGC han hecho a pobladores del territorio a quienes acusan de auxiliares de las FARC - EP y a las dinámicas de agresión continua de este grupo hacia la comunidad. En Ituango, los desplazamientos se registraron en las veredas Pio X y El Cedral y los corregimientos La Granja y Santa Rita (21 docentes), así como en los barrios La Plazuela, La Esperanza y El Carmelo de la cabecera municipal (Defensoría del Pueblo, 2017a). Las personas debieron abandonar sus viviendas tras recibir amenazas y presiones de las AGC. En la cartografía realizada se dio cuenta del despojo de tierras en 2 municipios: Ituango y Valdivia. A estas dinámicas

generadoras de desplazamiento, se deben sumar otros factores, tales como el desarrollo de la hidroeléctrica Hidroituango, que también ha contribuido al desplazamiento forzado de habitantes de las veredas y de quienes subsistían del Río Cauca (barequeros, pescadores, entre otros).

En Briceño, Ituango, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Campamento, Yarumal, Angostura, Santa Rosa y San José de la Montaña hay MAP-MUSE-AEI. Durante el proceso de negociación entre las FARC - EP y el Gobierno Nacional, se realizó un proceso de desminado en la vereda Orejón, Briceño, considerado exitoso. Sin embargo, los habitantes exigen que el desminado se amplíe a zonas aledañas. Así mismo, es necesario que se extiendan estas acciones a otros municipios porque la vida de los pobladores presenta graves riesgos:

Ya desde junio de 2016 el alcalde municipal señalaba a través de medios de comunicación, que en el municipio de Ituango la intervención contra las minas no avanzaba al ritmo esperado debido a la persistencia del conflicto armado: “En esa población del norte de Antioquia la situación es compleja toda vez que el conflicto no cesa y hay fuerte presencia de la guerrilla y las bandas criminales. Lo anterior explicaría por qué la intervención contra las minas no toma el ritmo necesario, pues según la Daicma, ‘se (encontraba) priorizado con condición suspensiva en espera de los avances en los acuerdos de La Habana’” (Defensoría del Pueblo-SAT, Informe de Riesgo N° 037-17a, 2017a, p.24).

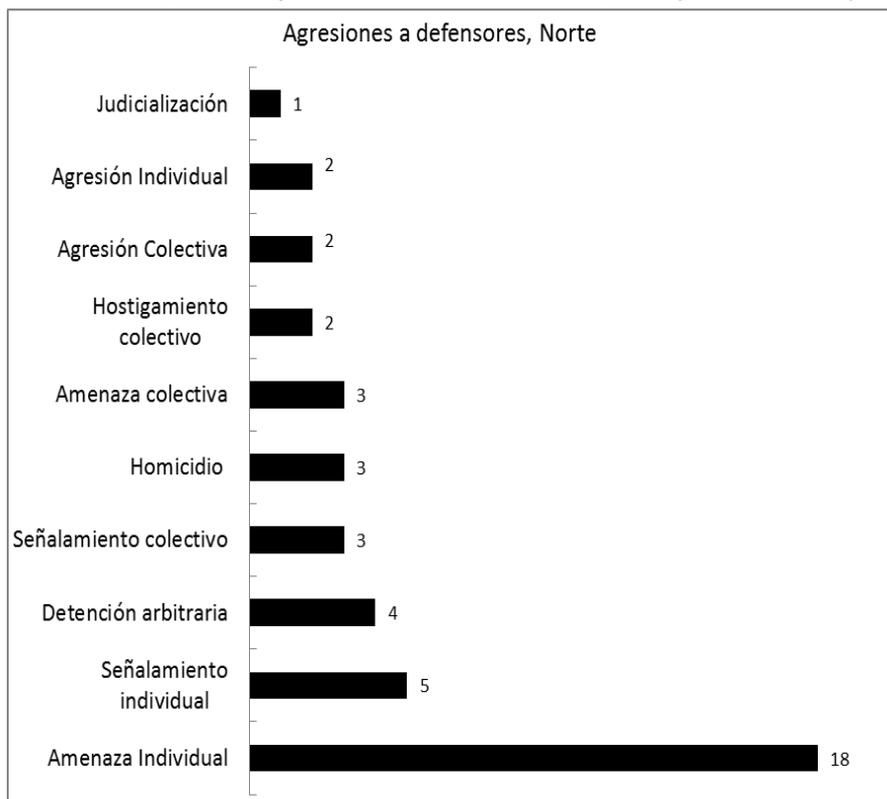
Otro riesgo generado por la presencia de los paramilitares en el territorio procede del reclutamiento voluntario y/o forzado. Una de las estrategias es realizar ofertas económicas a excombatientes de las FARC- EP para que trabajen con estas estructuras. En 2017, el Fiscal N. H. Martínez expresó ante la opinión pública que en el Norte de Antioquia se estaban presentando ofertas que ascendían a 1.800.000 pesos para cada exguerrillero que se pasara a trabajar con las AGC (Defensoría 2017a). En Valdivia, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia e Ituango, se tienen registros de reclutamiento forzado de jóvenes de ambos sexos (cartografía social). Por su parte, en los informes de la Defensoría del Pueblo se advierte del riesgo en el que se halla la población adolescente y juvenil por las presiones de las estructuras paramilitares que operan allí.

En este contexto de agresiones contra la vida, integridad y seguridad de la población, se han registrado ataques contra las mujeres por parte de los grupos armados ilegales y se ha evidenciado el aumento de la drogadicción, la prostitución y la trata de personas (explotación sexual), en especial en lugares donde, en la actualidad, se está desarrollando minería y narcotráfico.

Agresiones contra Líderes Sociales

Durante 2016 - 2017, las estructuras paramilitares que operan en el Norte continuaron agrediendo a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y procesos organizativos. Según la base de datos del Observatorio de la Fundación Sumapaz, hubo 47 agresiones durante este periodo. Los principales sectores organizativos victimizados son los campesinos y mineros que se encuentran trabajando en la defensa del territorio y del medio ambiente y aquellos que promueven la sustitución de cultivos y la implementación de los Acuerdos de Paz. Los principales responsables identificados son la Policía y los paramilitares, respectivamente.

Figura 36: Agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Norte, Antioquia 2016 – 2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

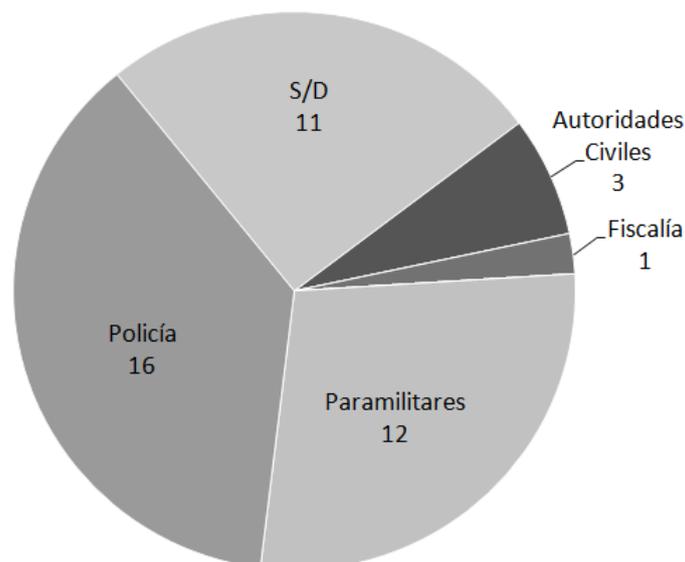
Las amenazas individuales (18 casos) y colectivas (3 casos), se han realizado contra miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (15 casos), de la Asociación Campesina de Briceño (2 casos), de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (1 caso), del Comité Barequero y Minero del Alto de Chiri (1 caso), de la Junta de Acción Comunal del Alto de Chiri (1 caso) y contra la Rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina del municipio de Ituango (1 caso). Del total de amenazas, 11 son de responsabilidad de los grupos paramilitares, de estas, 8, fueron realizadas por las AGC.

Briceño: En lo transcurrido del 2017, el escenario de riesgo se profundiza a partir de la avanzada y copamiento territorial por parte de las AGC, hacia los municipios del Norte de Antioquia como San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia y Briceño, Tarazá en el Bajo Cauca y Sabanalarga y Peque en el occidente (...) Este grupo armado ilegal tiene como principal objetivo los líderes de organizaciones sociales que representan derechos colectivos, de víctimas, entre otros, así como de defensores de derechos humanos y jóvenes considerados socialmente indeseables. Con particular interés viene amenazando las organizaciones y movimientos que se muestran a favor de los acuerdos de paz y que denuncian sus acciones públicamente. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 003-17a, 2017e, p.5).

De los 4 homicidios de líderes sociales ocurridos entre 2016 y octubre de 2017, dos fueron cometidos por paramilitares y los otros dos por desconocidos. Dos de las víctimas pertenecían a organizaciones afiliadas a Marcha Patriótica: Ovidio A Bustamante (Valdivia), miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca y Ramón A García (Briceño), miembro del Comité de Barequeros del Norte de

Antioquia (ASOCBARE). Las otras dos víctimas, Luz H Olarte (Yarumal) y Gildardo A Valdez (Anorí), pertenecían a las Juntas de Acción Comunal.

Figura 37: Presuntos responsables de agresiones a líderes, lideresas y defensores de DDHH en Norte, Antioquia 2016 – 2017 (oct.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Los homicidios registrados se enmarcan en la agresión permanente a la labor de las y los defensores de derechos humanos (Informe de Riesgo N° 010-17). En esta subregión, ha habido en los últimos años un resurgimiento de los procesos organizativos que luchan por la defensa y permanencia en los territorios, contra la expoliación de los bienes comunes y la imposición de megaproyectos y que exigen que lo acordado en La Habana se haga realidad. Ejemplo de esto son las Asociaciones Campesinas de Briceño, Ituango, Toledo y Bajo Cauca, suscritas a Marcha Patriótica, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, los Comités de Barequeros y Cocaleros, entre otras expresiones, que han sido atacadas no solo por parte de los paramilitares sino también por la fuerza pública.

En la subregión del norte de Antioquia el riesgo particular que recae sobre los defensores de derechos humanos, líderes de las Juntas de Acción Comunal, miembros del movimiento Ríos Vivos y militantes de Marcha Patriótica, como consecuencia de las amenazas directas señalamiento y la estigmatización de la que son objeto en razón de su actividad, por parte de las AGC. Lo anterior resulta preocupante si se tiene en cuenta que en esta subregión, a lo largo de varios años la población campesina ha venido participando en procesos organizativos comunitarios tales como: Juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, movimientos ambientales como Ríos Vivos y movimientos políticos como Marcha Patriótica. Estas estrategias les han permitido resistir la violencia, adelantar procesos de visibilidad de afectaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y liderar procesos de exigibilidad con resonancia nacional e internacional. Con las amenazas y los homicidios se pretende como fin último desincentivar la participación política y popular de los movimientos sociales de base, instalar el temor generalizado con el ánimo de afectar su labor de denuncia, minimizar sus acciones de visibilización y diezmar su proceso de reivindicación de derechos. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 010-17, 2017d, p.18)

Los grupos paramilitares también buscan ejercer presión en las agendas comunitarias para ganar legitimidad entre los pobladores. En la zona rural del Norte, estas estructuras, en especial las AGC, han convocado a líderes de las JAC y de

procesos organizativos, para “conversar” sobre las necesidades de las veredas. Los paramilitares expresan “que ellos han llegado con el propósito de ayudar y que van a utilizar el diálogo como mecanismo para resolver los problemas que se presenten entre vecinos, como hacía la insurgencia”. En este contexto, también se han hecho frecuentes las ofertas económicas a grupos u organizaciones para promover actividades sociales, que constituye un riesgo para los líderes y lideresas y configura un escenario de coacción a las comunidades para desarrollar sus procesos de participación y organización.

Se identifican a Santa Rosa, Don Matías, Yarumal, Valdivia, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño como los sitios donde más riesgos existen para la labor de los líderes y las lideresas. En Ituango han aparecido panfletos amenazantes que han ocasionado desplazamientos desde la vereda El Cedral. El accionar es similar a otras subregiones. Obligan a los líderes de las Junta de Acción Comunal a reunirse con ellos, solicitan los libros de actas, contables y listados de asistencia, razones suficientes para entender el riesgo de la labor de los liderazgos. (CJL & Fundación Sumapaz, 2017, p.24)

La incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de Ituango, comenzó a sentirse con mayor rigor a lo largo del mes de enero de 2017, cuando iniciaron sus recorridos por la zona rural en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas, intimidando con ello a los habitantes de las veredas Pascuita, Villegas, El Recreo y Camelia Baja en el corregimiento Santa Rita, vereda La América en el corregimiento El Aro, veredas Chontaduro y El Zancudo en el corregimiento La Granja y las veredas El Cedral, Guacharaquero y Santa Ana. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.5)

Para generar recursos monetarios adicionales y controlar las maneras de resolver los conflictos surgidos en las comunidades, los grupos paramilitares imponen multas por “alterar el orden público” y contaminar las aguas. Los habitantes son amenazados para cuidar las quebradas, respetar los retiros y evitar las riñas.

Estos grupos, últimamente, han apelado a un discurso en defensa del medio ambiente, como una táctica que se utiliza para ganar simpatías y adeptos dentro de la población. Queda claro que no se trata exclusivamente del manejo de una agenda militar sino también de carácter social, con lo que pretenden asegurar su presencia en el territorio e influir en el imaginario social. (Testimonio de una participante, 2017, p. 5)

Briceño: Cuando se presentan casos de alteración del orden público las AGC cobran “multas” cercanas a los 250 mil pesos o imponen castigos ejemplarizantes; despojan a pobladores de bienes como motocicletas e imponen reuniones a comunidades y comerciantes, ya sea para el cobro de exacciones o para justificar sus acciones, señalando a las víctimas como responsables directas de las acciones sufridas. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 003-17, 2017e, p.18)

Este tipo de estrategias buscan instalar una agenda social para ganar legitimidad combinando acciones cívico-militares que afectan gravemente el derecho a la participación ciudadana. En el Norte, es frecuente encontrar movilizaciones sociales contra la imposición de megaproyectos minero - energéticos, contra la erradicación forzosa de los cultivos de coca y por el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Todas estas acciones organizativas se hallan en peligro por la presencia paramilitar, que se ha expandido al salir las FARC - EP de territorios como Ituango, Toledo y Briceño.

Entre 2016 y 2017 los grupos paramilitares han copado territorios. Se ve con gran preocupación, que el Estado no haya hecho presencia integral (además de la militar) para proteger a las poblaciones e impedir la llegada de estas estructuras. Las comunidades y organizaciones de derechos humanos, que reclamaban un papel decidido del Estado en asegurar las antiguas zonas de las FARC, ya advirtieron de la situación actual en la que se encuentra el territorio. La presencia de La ACN, Los Pachelly y Los Triana, muestran cómo avanzan estos grupos del Valle de Aburrá en coordinación con las AGC o la OVA para ganar presencia en zonas verdales, donde nunca antes habían estado, lo que se traduce en control económico y social. La presencia paramilitar es un riesgo para las comunidades pues afecta los derechos humanos y la seguridad ciudadana.

El Norte cuenta con presencia de batallones del Ejército y Estaciones de Policía, también cuenta con alrededor numerosos efectivos que cuidan la obra de Hidroituango. La presencia de fuerza pública, no ha impedido que se presenten homicidios (214), desplazamientos forzados (1.856) y ataques contra la labor de las y los defensores de derechos humanos. En este contexto se hace importante reiterar los riesgos que tiene el Proceso de Paz, sobre todo porque el Estado no ha combatido estas estructuras, lo que puede repercutir en el éxito de la reincorporación a la vida civil de excombatientes. De los 32 excombatientes de las FARC- EP asesinados en Colombia (noviembre de 2017), en Ituango fueron tres. Los posibles responsables de estos hechos serían los paramilitares, quienes han estado ejerciendo presión para que excombatientes de la guerrilla pasen a hacer parte de sus filas. Estos homicidios son un ataque al proceso de paz y a la posibilidad de avanzar en la construcción de una democracia efectiva.

Valle de Aburrá

El Valle de Aburrá se ubica en la Cordillera Central de Los Andes en un valle estrecho y alargado surcado desde el sur hasta el norte por el río Medellín. La subregión está conformada por diez municipios. Medellín, Bello e Itagüí, constituyen la mayor concentración de población urbana de Antioquia y Medellín, la segunda del país. En las montañas a ambos márgenes del valle se encuentran los corregimientos rurales de cada municipio.

Medellín se convirtió durante el S.XX en el centro político y por ende, económico, de Antioquia. El desarrollo urbanístico del Área Metropolitana se ha acelerado desde los 80, en parte debido al desplazamiento forzado de millones de colombianos, además de la inmigración económica desde zonas rurales y otras zonas del país. “Según las proyecciones del Plan Director BIO 2030 (Alcaldía Medellín, Amva & Urbam, 2011), se espera que para el 2030 los municipios del Valle de Aburrá aumenten su población en un 16%, lo que significaría al menos 612.700 nuevos habitantes que demandarán bienes y servicios; la mayoría de ellos se espera ocupen las zonas urbanas” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016, p.35).

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Medellín, citados por el IPC (2017c) la matriz económica de esta subregión está caracterizada de la siguiente manera: “La industria representa el 43.6% del producto interno bruto del Valle de Aburra; los servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con

mayor participación en el valor agregado generado son las textileras, con 20%; sustancias y productos químicos, con el 14.5%; alimentos, con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como el metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros” (párr.4). Por su parte, Medellín, según datos de Medellín Cómo Vamos (2017):

(...) El 20% del producto interno bruto municipal correspondía a industria manufacturera, el 14% a actividades de servicios a las empresas y el 13% a comercio y servicios de reparación, siendo estos tres los sectores económicos con mayor participación en el PIB local. En esa medida, tanto desde el punto de vista de la población ocupada como desde la perspectiva de la participación en el PIB local, estos tres sectores son los de mayor actividad económica en la ciudad. (Medellín Cómo Vamos, 2017, párr.5)

Desde la década del 90, Medellín se ha venido transformando drásticamente. La búsqueda de internacionalizar la ciudad y hacerla más atractiva para la inversión extranjera ha conllevado a desarrollar una economía basada en bienes y servicios, el turismo y la transformación urbanística. Estas intervenciones han afectado a las poblaciones más vulnerables. Ejemplo de esto es el barrio Moravia (comuna 4) en el cual se han presentado desalojos forzados por parte del Estado, justificados como intervenciones que buscan proteger a la población, cuando el objetivo real sería asegurar el espacio para nuevas expansiones urbanísticas que no representan beneficio alguno para las familias que allí residen. El título otorgado en 2013 a Medellín, como la ciudad más innovadora del mundo, resulta ser paradójico para un territorio que presenta no solo altos niveles de desigualdad, sino que su transformación espacial se ha edificado sobre graves violaciones a los derechos humanos.

El desarrollo de proyectos urbanísticos, el crecimiento de empresas asentadas en la subregión y el aumento del turismo, se dan en medio de un contexto territorial marcado por el control de grupos armados, coordinados en su mayoría por las estructuras paramilitares de Las AGC y la OVA. Esta situación no parece ser excluyente para afianzar el modelo económico y social imperante.

Paramilitarismo y fuerza pública

En el Valle de Aburrá hay presencia de grupos paramilitares, estructuras al servicio del narcotráfico, bandas y combos, dedicadas al hurto, la extorsión, el secuestro, y otras actividades ilegales. En los 80 hubo grupos paramilitares denominados de “limpieza social”, que estaban conformados por agentes de la fuerza pública y ciudadanos, así como la estructura Muerte a Secuestradores, que se dedicó a agredir a militantes de izquierda y delincuentes comunes. Este grupo fue coordinado por el cartel de Medellín (Pablo Escobar) y contó con el beneplácito de fuerzas del Estado para operar. En 1993, el país ve emerger a los Perseguidores de Pablo Escobar (PEPES)⁶³, que asesinaban a personas que pudieran estar relacionadas

⁶³ Los PEPES fueron una estructura de carácter nacional, pero gran parte de sus acciones se concentraron en Medellín, donde según Fidel Castaño (1994): La ciudad de Medellín se encontraba en manos de un grupo de delincuentes que ya no eran comunes sino dementes, asesinando y

con el jefe del cartel de Medellín, así como a opositores políticos, líderes sociales y militantes de izquierda. El grupo fue conformado y direccionado por un sector del Estado, miembros de grupos paramilitares (Fidel Castaño) y de otros carteles del narcotráfico (cartel de Cali), y obtuvo apoyo de la DEA⁶⁴.

Tras la muerte de Pablo Escobar desaparecen los PEPES, mientras las ACCU y las ACMM iniciaban su proceso de expansión en Antioquia. En 1997, con la conformación de las AUC y la urbanización del conflicto armado, se crea el Bloque Metro (BM)⁶⁵, que actúa en toda la subregión, pero en especial en Medellín y entra en disputa abierta con la Oficina de Envigado al mando de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna⁶⁶. Para la primera década de siglo, tras imponerse La Oficina de Envigado, aparece el Bloque Cacique Nutibara (BCN). Desde su conformación hasta su proceso de desmovilización en 2003, el BCN, estuvo al frente del control territorial, político y social del Valle de Aburrá.

Al comenzar el nuevo siglo, el BM de las autodefensas, que estaba bajo el mando de "Doblezero", se había instalado en buena parte de los barrios populares de Medellín, disputándole el control del territorio a las milicias guerrilleras... Parte del acuerdo que había conducido al ingreso de "Don Berna" a las AUC era su control hegemónico de Medellín, a través de un Bloque que él acababa de crear y que se llamaba Cacique Nutibara (...) El BCN estaba constituido por ese conjunto de relaciones resultantes de los complejos procesos de aniquilación, negociación, absorción, dominación y contratos derivados de las cuatro grandes rutas de la guerra en Medellín. Esto es, la ruta de las autodefensas, la ruta del narcotráfico, la ruta de las bandas y la ruta específicamente paramilitar. Rutas que en las tramas y en los dramas de cada guerra y negociación, dieron forma a distintos nodos específicos de la red. (Verdad Abierta, 2008, párr.1)

También hubo presencia de grupos insurgentes, entre ellos, el M19 (década de los 80), FARC, ELN, EPL y grupos de milicias populares, algunas independientes, otras direccionadas por las estructuras guerrilleras. A mediados de los 90 algunas entrarían en procesos de negociación con el Estado, sobre todo aquellas Milicias que eran más independientes, por ejemplo: Milicias del Pueblo por el Pueblo y para el Pueblo, Milicias Metropolitanas, Milicias Populares del Valle de Aburrá, el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (CNMH, 2017). Entre 1995 y 2005, continuaron procesos milicianos como los Comando Armados del Pueblo que operaron en comuna 13, con un alto nivel de coordinación con el ELN y el Frente de Resistencia Antiparamilitar, en comuna 1 bajo la dirección el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por su parte las FARC - EP, operaron con

secuestrando a gentes inocentes como nunca antes se había visto. Había, pues, que responder enérgicamente y con las mismas armas, o de lo contrario estábamos perdidos. Yo creo que después de desaparecer ese monstruo de mil cabezas y su famoso cartel se respira mejor en Medellín y en todo el país. (Revista Semana, 1994, p.2).

⁶⁴ Equipo Nizkor, 4 de junio 2016, ¿Cuál fue la relación de la DEA y la CIA con Los Pepes?

⁶⁵ El Bloque metro no se desmovilizó. Entró en confrontación con las AUC y con La Oficina de Envigado. Los que sobrevivieron a esta guerra interna ingresaron al Bloque Cacique Nutibara, Bloque Mineros, o a otras estructuras paramilitares.

⁶⁶ La Oficina de Envigado entra en disputa con combos y bandas de la ciudad de Medellín, incluyendo la banda, La Terraza, que había servido a Pablo Escobar. En esta época muchas de estas estructuras (bandas y combos), terminaron confluyendo en el Bloque Metro, y posteriormente en el Bloque Cacique Nutibara.

unidades militares y con el Movimiento Bolivariano. El repliegue de la insurgencia en esta época obedece a la avanzada paramilitar que se establece en gran parte de Medellín con la ayuda de altos mandos de la fuerza pública y de autoridades civiles.

Desde el proceso de desmovilización del BCN (2003) hasta 2008, Medellín vivió un tiempo de “pacificación” como consecuencia de la hegemonía de alias Don Berna, quien concentró el poder y aglutinó a la mayoría de los combos y bandas bajo su mando. Tras su extradición a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, se inició una disputa interna en la Oficina de Envigado. A mediados de 2012, las AGC entran en la ciudad de Medellín y en confrontación armada con la OVA. Las AGC han venido ganando terreno hasta hoy, en la actualidad estas estructuras no reportan enfrentamientos.

Tras la salida de Don Berna, dos facciones se disputan el control sobre la Oficina entre el 2009 y el 2011, Valenciano que hace una alianza estratégica con los Urabeños y Sebastián que fortalece a los combatientes de Los Paisas. La Oficina busca nuevos espacios y exporta su modelo de “empresa criminal” hacia la costa Atlántica hacia donde también comienzan a moverse los Urabeños y donde también existen organizaciones regionales y locales que controlan la economía local ilegal. Sin embargo tras las capturas de Valenciano, quien se entregó en Medellín (ya que tenía garantías para mantener la economía narcotraficante en el norte del país), y de Sebastián (quien había constituido a Los Paisas como una estructura armada militar altamente equipada), los poderes vuelven a reorganizarse y los intereses de los Urabeños por la ciudad se hicieron más evidentes. (Agencia de Prensa Rural, 2012, párr.22)

Desde 2012, se ha presentado una recomposición de poderes a nivel local. Según Corpades en esta subregión pueden existir alrededor de 500 estructuras, en su mayoría articuladas y/o coordinadas con las AGC u OVA. Por su parte, la Policía Nacional (2017), sostiene que “Hay 10 bandas asociadas con el narcotráfico en la ciudad y el área metropolitana, unas 90 bandas que están directamente ligadas con estas Odines⁶⁷ y otros 220 combos identificados y también a sus cabecillas” (Caracol Radio, 2017e, párr.2).

De acuerdo con la cartografía realizada (2016 - 2017), en los municipios del Valle de Aburrá operan diversas estructuras que se “han dividido el Valle de Aburrá cuadra por cuadra, y cuando hay intereses opuestos en un mismo lugar, se encienden las disputas armadas” (El Colombiano, 2016e).

Figura 38: Estructuras paramilitares en Valle de Aburrá, Antioquia

Estructura	Municipios
ACN	Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín.
AGC	Barbosa, Itagüí, Medellín, La Estrella, Caldas.
Chatas	Bello
Pachaelly	Bello
Los Triana	Bello, Medellín.
OVA	Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas.

⁶⁷ Organizaciones Delincuenciales Dedicadas al Narcotráfico- ODINES. Estas estructuras tienen control territorial, social, económico y poblacional. En algunos casos desarrollan actividades de presión sobre organizaciones sociales y líderes comunitarios. Para la CCEEU- Nodo Antioquia, estas estructuras no son simples organizaciones dedicadas al narcotráfico, ya que estas ejercen control poblacional instaurando un régimen social que como se ha expresado en este texto sirve no solo a sus intereses sino también al status quo.

CONVIVIR	Medellín: 35 en la comuna 10 y otras comunas.
Otras estructuras	Bello: El Mesa, La Camila, Niquia Camacol, San Pablo, Soto. Medellín ⁶⁸ : Caicedo, Los Conejo, Los Chamizo, Chiquitines, La Agonía, La Colinita, La Miel, La Sexta, La Sierra, La Tablaza, La Unión, Los Chivos, Los Mondongueros, Los Pájaros, Los Chamizos, Los Pesebreros, María Auxiliadora, Praga, Peñitas, Picacho, San Pablo- La Terraza, Trianón.

Fuente: construido con datos de la cartografía social y fuentes secundarias.

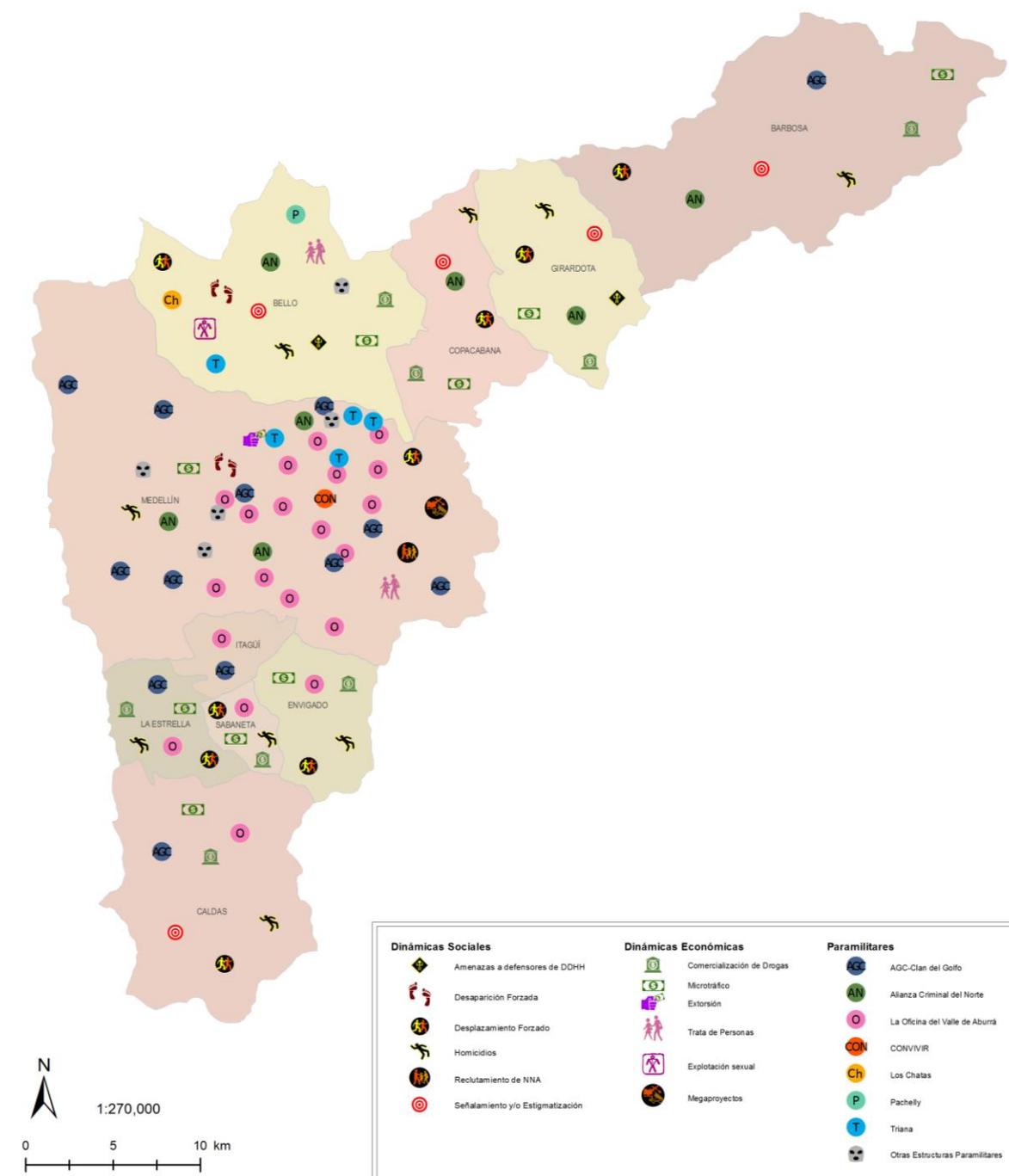
Estas estructuras armadas, tienen presencia en los barrios, comunas y corregimientos del Valle de Aburrá, estableciendo un control social y económico, y afectando procesos participativos. También han implantado prácticas coercitivas como: limpieza social, castigo a personas acusadas de hurto y violación, multas a personas que pelean en la calle, castigos a hombres que golpean a sus compañeras, entre otras acciones propias de un actuar basado en el terror. Por ello, reducir estas estructuras a simples grupos delincuenciales sería un error, aunque existe en ellas una mezcla de “paramilitarismo, mafia y narcotráfico” que les ha permitido mantenerse en el tiempo (Cartografía social, 2017).

La OVA es la que tiene mayor presencia en la subregión, mientras que las AGC están en Medellín y municipios del sur. En Bello, se coordinan con la ACN que permite un acoplamiento de intereses y supondría una menor disputa territorial, aunque se han reportado enfrentamientos en Barbosa, Girardota, Medellín y Bello, lo que demuestra la fragilidad de los pactos (Cartografía social, 2017, p.4).

Los Chata y Los Pachelly, aunque son parte de la ACN también poseen control territorial propio, especialmente en Bello. Los Triana, una de las estructuras considerada como “independiente” y con gran poder territorial, hacen presencia también en Bello, Medellín, Norte y Bajo Cauca.

⁶⁸ En este listado se identifican algunas de las estructuras barriales y de comuna que operan en Medellín, el listado es mucho más extenso de lo que se presenta. Para efectos del documento en el apartado de Medellín se hace referencia a estas y a las estructuras que la Policía denomina ODINES.

Figura 39: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en el Valle de Aburrá, Antioquia

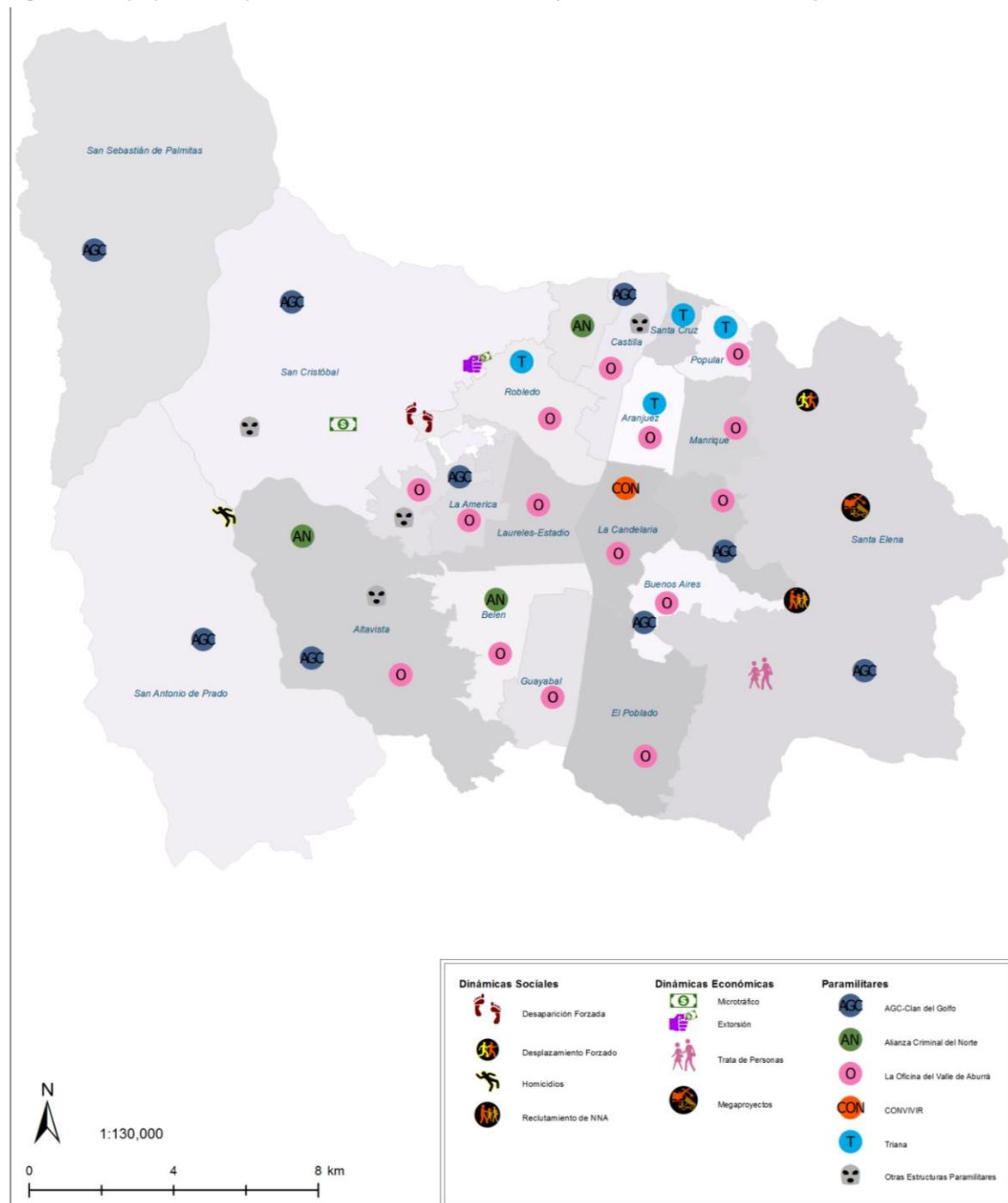


Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias.

Medellín

Según la cartografía realizada y otras fuentes secundarias, las estructuras que operan en las comunas y corregimientos de Medellín se encuentran distribuidas entre la OVA, las AGC, la ACN y otras estructuras. En la ciudad de Medellín operan alrededor de 350 estructuras el 85% (Cartografía social, 2017) se encuentran articuladas a la OVA y las restantes, a las AGC, o poseen mayor autonomía, como Los Triana (Bello y Medellín), La Agonía (comuna 13) y La Colinita (Guayabal e Itagüí), lo cual les permite actuar de manera autónoma en algunos territorios.

Figura 40: Mapa presencia paramilitar, dinámicas económicas y sociales en Medellín, Antioquia



Fuente: Cartografía, entrevistas con actores territoriales y fuentes secundarias.

La OVA ha ampliado su poder en el Valle de Aburrá y en otras subregiones de Antioquia. En la actualidad se encuentra bajo una confederación con un consejo directivo, que coordina económica, política y militarmente todos los grupos que se aglutinan bajo la OVA. En un segundo nivel se encuentran los jefes y subjeses, y luego los coordinadores y la base, quienes están al frente de las operaciones en los

territorios. De acuerdo con El Colombiano (2017f), la OVA, hace presencia en Medellín a través de las siguientes ODINES⁶⁹:

Figura 41: Estructuras paramilitares en Medellín

Estructura	Comunas y corregimientos de Medellín
Triación	Comuna 14,
Robledo	Comunas: 5, 7, 11, 12, 13, 16, Altavista, San Cristóbal.
San Pablo⁷⁰	Comunas: 1, 3, 4,10 Bello
La Unión	Comunas 15 y 16
Caicedo	Comunas 8, 9, 10, 14
Picacho	Comunas 5, 6, 10, San Cristóbal, Bello

Fuente: El Colombiano, 2017

La OVA se ha mantenido activa desde la década de los 90 hasta la actualidad gracias a sus alianzas con empresarios, ganaderos, comerciantes, funcionarios públicos, la fuerza pública, funcionarios judiciales y políticos, entre otros (El Colombiano 2017f). El caso más reciente fue el del exSecretario de Gobierno Gustavo Villegas (2017) a quien se le sindicó de favorecer a esta organización.

En los barrios no se habla de un patrullaje abierto con uniformes, pero los grupos tienen personas encargadas de asegurar que no haya injerencia de otras estructuras, de estar alerta ante la presencia de la fuerza pública y de hacer recorridos y vigilancia.

A mí me pasó una vez que fui a comprar a un D1 en Aranjuez, y se me acercaron los muchachos y me tomaron una foto a mí y a otro amigo con el que yo iba, ellos tienen un grupo de whatsapp y por ahí preguntaron si nosotros éramos de algún combo o si íbamos a cobrar vacuna (...) nosotros le dijimos que no éramos de nada, que vivíamos en Manrique, al rato nos dejaron ir, diciéndonos que nos abriéramos. Yo me di cuenta que ellos tienen un grupo de whatsapp, porque yo fui donde el coordinador de la zona y me presenté con mi amigo y el duro, nos dijo que no había problema, que sí le habían dicho lo que pasó. (Testimonio de participante, 2017, p.15)

Durante 2016- 2017, se han reportado enfrentamientos entre la estructura de Robledo con otros grupos de Castilla y el Doce de Octubre en una recomposición de poderes locales, lo que muestra que el control de la OVA continúa atomizado.

La ACN hace presencia en algunos sectores del corregimiento de Altavista (parte alta y Buenavista), Belén (comuna 16) y Castilla (comuna 5). Durante 2017, la frontera entre el corregimiento de Altavista y Belén, particularmente Belén Zafra, presentó un alto nivel de confrontación armada entre las bandas Los Chivos⁷¹ y Los Pájaros Rebeldes con Los Pesebreros. Estas estructuras se enfrentaron con armas de largo alcance. Los combates no solo fueron entre ellos sino con la Policía quien recibió refuerzos del Ejército Nacional⁷², visibilizándose el poder militar de los grupos en confrontación.

⁶⁹ Cada una de estas ODINES, tiene a su interior varios grupos barriales.

⁷⁰ Esta estructura es conocida también como la Terraza.

⁷¹ Esta estructura se encuentra bajo el mando de las AGC

⁷² El Ejército hizo presencia a través del Batallón de Fuerzas Urbanas Especiales N7.

Los grupos armados ilegales que tienen presencia actualmente en el territorio de Altavista, tienen a su disposición un tipo de armamento que representa una amenaza muy significativa para la población civil: La mayoría de enfrentamientos que se han presentado durante el 2017 entre los grupos armados ilegales han sido con fusil, disparos que se producen a una gran distancia y que ponen en riesgo a todos los residentes que quedan interpuestos en el combate. Estos disparos han afectado principalmente los barrios de la Palma, la vereda la Esperanza y Nuevo Amanecer en Altavista, aunque el fuego cruzado eventualmente también puede afectar a los barrios vecinos de la Comuna 16 y en particular en donde hay presencia de los grupos armados de La Capilla y Los Pájaros. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N°033-17, 2017c, p.4)

Tras meses de confrontaciones y por injerencia de la ACN, que entraron a “mediar” en la guerra, estas estructuras (Cartografía social 2017), se apaciguaron en octubre y se instaló en el territorio en disputa el poder de la ACN, la cual se extendió a gran parte de los barrios de la comuna 16.

Las AGC, se encuentran operando en los cinco corregimientos de la ciudad: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. Estos territorios son corredores estratégicos y salidas hacia otros municipios de Antioquia. San Sebastián y San Cristóbal conectan con la subregión de Occidente: Puerto de Urabá.

En el corregimiento de Altavista (...) aproximadamente hace unos 20 años, ha estado bajo el mando de las AUC anteriormente y en la actualidad se encuentran bajo el mando AGC. Cerca se encuentra la banda Los Chivos quienes también se encuentran sometidos a las AGC (...) se afirma que las bandas delincuenciales ubicadas en esta zona, todas son Gaitanistas, e incluso el mando del Valle de Aburra se encuentra ubicado en este corregimiento. Por otro lado, en gran parte del corregimiento de San Cristóbal hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y la comunidad los denomina como los Paracos. En un porcentaje menor en las zonas de Peñitas, San Gabriel y San Pedro hacen presencia los Pesebreros, banda perteneciente a la Oficina. Es denominado, entonces como el Bloque San Cristóbal, controlando el túnel de occidente y por ende algunos municipios del occidente antioqueño. (Cartografía social 2017, p.2)

En Altavista se ha reportado patrullaje abierto de las AGC, sobre todo en las zonas altas, corredores estratégicos para el narcotráfico y donde existe un gaseoducto, renta importante para esta estructura.

En el caso de las comunas: 6, 8, 9 y 13, las AGC hacen presencia regularmente a través estructuras que ya estaban en el territorio. En la comuna 8 se encuentra el Frente Sierra de las AGC, el cual tiene influencia en barrios como La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam y en los sectores de Piedras Blancas y Media Luna en Santa Elena, con más o menos 200 miembros. (Cartografía social 2017).

Los grupos privados denominados CONVIVIR actúan como una fuerza que presta “servicios de seguridad privada” en zonas donde hay establecimientos comerciales. Se ha identificado su presencia en la centro de la ciudad.

Figura 42: Algunas CONVIVIR de Medellín

Algunas de las Convivir que operan en el centro de la ciudad y comunas		
Convivir La Bastilla	Convivir Barbacoas	Convivir Barrio Triste
Convivir Bolívar	Convivir Veracruz	Convivir Manrique- La 45
Convivir Cundinamarca	Convivir el Chagualo	Convivir Los Colores

Convivir Centro	Convivir El Palo	Convivir Téjelo
Convivir Alpujarra	Convivir La Playa- Soma	Convivir San pedro
Convivir San Benito	Convivir La Bayadera	Convivir Parque Berrio
Convivir El Periodista	Convivir Carabobo	Convivir Hospital Infantil
Convivir La 33	Convivir Naranjal	Convivir Opera
Convivir Palacé	Convivir Nutibara	Convivir Carabobo - San Juan
Convivir Los Puentes	Convivir Placita de Flórez	Convivir Villanueva
Convivir San Juan	Convivir Raudal Bolívar	

Fuente: Análisis Urbano, 2017d.

Estas estructuras podrían contar con alrededor de 350 hombres (Análisis Urbano, 2017d) quienes se encargan de asegurar que en las zonas no hayan hurtos a establecimientos, de mantener el control sobre las plazas de vicio, del negocio de la prostitución y explotación de sexual-comercial de niños, niñas y adolescentes, y de ejercer control sobre el espacio público (venteros informales) y habitantes de calle.

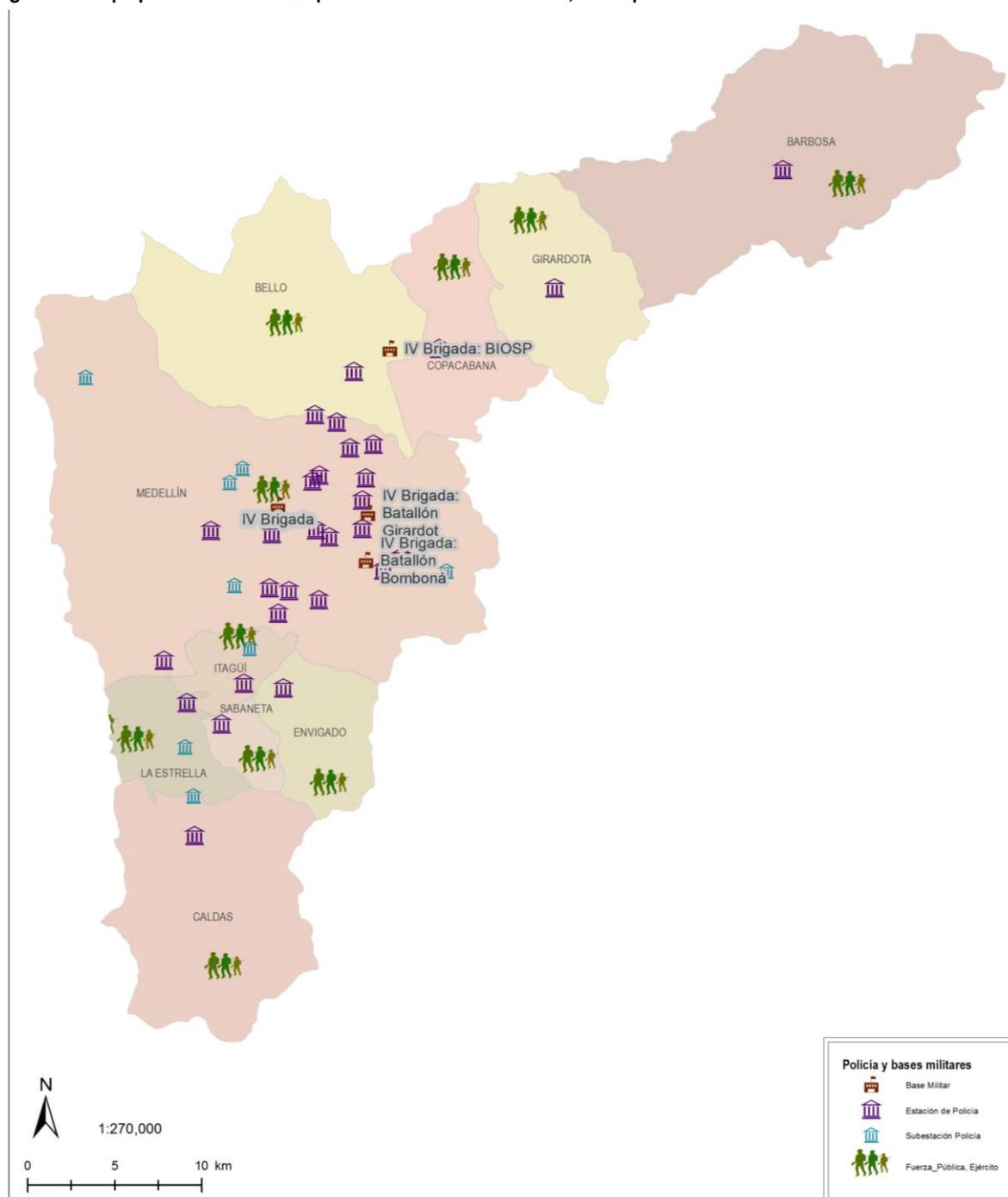
Los Triana es una de las estructuras históricas de Medellín, y siempre ha ejercido poder en Santa Cruz (comuna 2). También hacen presencia en un sector de la comuna 1 (límites con Bello) y actualmente se han extendido a Robledo. En la comuna 2, este grupo ha generado no solo un copamiento del territorio a través de la fuerza, sino que ha desarrollado estrategias sociales para ganar legitimidad entre los pobladores. Cuentan con una estructura jerárquica, con jefes-mandos, encargados financieros, coordinadores de zona y la base, es decir los hombres y mujeres que cuidan los barrios. En esta comuna los homicidios acontecen siempre y cuando se dé permiso de cometerlos, la orden generalmente proviene de los coordinadores de zona o de los altos mandos⁷³.

Los Triana, tienen una dirección jerárquica, por ejemplo hay coordinadores de zona y personas encargadas de lo financiero, estos son los que recogen la plata de las plazas y las llevan hasta un sector de la comuna, donde hay una señora encarga de guardarla y luego la sacan del territorio. Todos los días se liquidan las plazas y el dinero sale de la comuna. Los pelaos que están en las esquinas cuidan las plazas y están alertas si viene la policía. Este grupo es como un feudo, ellos dan empleo a la gente: lavando carros, haciendo arepas, trabajando con lácteo, vendiendo tiquetes del metro afuera en la estación de Acevedo. Ellos en el corredor del metrocable, han puesto "orden" a los venteros, pues allí no se hace cualquiera, ellos cobran. Ellos en sí mantienen el orden de los barrios, y se sabe que aunque no hay asesinatos, ellos si desaparecen personas o las desplazan. Ellos están pendientes de quién llega al barrio, si vienen del campo, ellos preguntan por si de pronto es un guerrillero o algo así. Por eso cuando se arriendan las casas, muchas veces ellos preguntan quién llega a vivir. (Testimonio de participante, 2017, p.7)

La presencia y control que realizan la OVA, las AGC, las Convivir, la ACN y Los Triana, en Medellín y el resto de municipios del Valle de Aburrá, se traduce en altos niveles de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas y extorsión. Los pobladores se hallan en medio de un asedio, que no es contrarrestado de manera eficaz por el Estado, ni por la fuerza pública. La Policía Nacional (Dirección del Valle de Aburrá) está presente a través de las Estaciones, las Subestaciones, los CAI y los cuadrantes. Por su parte el Ejército Nacional tiene la sede de la IV Brigada en Medellín y efectivos en el sur y norte de la subregión.

⁷³ En este territorio se cometió el asesinato contra la lideresa Ana Fabricia Córdoba en el año 2011, crimen que aún continúa en la impunidad.

Figura 43: Mapa presencia de fuerza pública en el Valle de Aburrá, Antioquia



Fuente: Policía y Ejército Nacional.

Durante el periodo, se han registrado capturas de miembros de la fuerza pública acusados de nexos con varios de estos grupos. En agosto de 2016, fueron detenidos seis integrantes de la Policía Nacional, entre ellos, un “subintendente de la Seccional de Inteligencia de la Policía” a quien se acusó de entregar información a Los Chatas. (El Colombiano, 2016a). En 2017 (noviembre), capturan a otro subintendente de la misma institución, acusado de tener nexos con San Pablo- La Terraza (El Colombiano, 2017a). Estos hechos evidencian la continuidad de las relaciones de connivencia.

Varias de las estructuras paramilitares de Medellín, tienen como jefes a ex miembros de la fuerza pública. Se resalta el caso del capitán (r) Edward García Arboleda, alias “Orión”, que al aparecer está ligado a “la Oficina” y trabajó para el extraditado general (r) Mauricio Santoyo durante su etapa en el Comando Élite Antiterrorista (CEAT)⁷⁴. Luego estuvo en la Dijin. Su cuñado, Mayor (r) apodado “Careguayo”, también aparece ligado a “la Oficina” en informes de la Fiscalía y la Policía, aunque carece de orden de captura.

En febrero de 2016 se conoció a través de las noticias que la Policía Nacional habría detenido a cinco supuesto miembros de la “Convivir Carabobo”, los cuales eran sindicados de “extorsionar”. El presunto jefe de esta Convivir sería Andrés Hincapié Vargas (“Hincapié”), un expatrullero expulsado de la Policía Metropolitana en 2013, cuando lo descubrieron manejando una moto robada (...) “Don Ómar” y otros ocho expolicías más que trabajan para bandas, ascendieron en esas jerarquías hasta ser cabecillas (...) La “Odín Robledo”, a sangre y fuego ascendió un expatrullero apodado “Duque”, hasta liderar los asuntos del grupo en el barrio El Diamante (...) El expatrullero pensionado alias “Tombolín”, presunto cabecilla de la “Odín la Terraza”; y “Mauricio el Grande”, un exsubintendente que en 2005 se desmovilizó del bloque Héroes de Granada de las AUC y ahora ejecuta trabajos para “la Oficina” y la “Odín Belén”. A este último le incautaron 19 veces, armas con salvoconducto entre 2001 y 2007, pero siempre salió avante. (El Colombiano, 2016e, párr.18)

De acuerdo con los testimonios recogidos para complementar el mapeo territorial, las y los entrevistados coinciden en que la relación entre fuerza pública y estructuras paramilitares es de abierta connivencia. De lo contrario, no se podría explicar el control que ejerce, ni su régimen social, económico y territorial.

Entre 2016 y 2017 se aumentó el pie de fuerza en algunas zonas de la ciudad de Medellín, las cuales presentaban una difícil situación de orden público. En Castilla, en enero de 2016 llegaron 200 nuevos policías a la zona, en marzo entró en funcionamiento el Batallón de Operaciones Urbanas adscrito a la IV Brigada, conformado por alrededor de 160 efectivos, y que tiene entre sus objetivos enfrentar las estructuras armadas existentes en el Valle de Aburrá. En 2017 se registró en Altavista el ingreso de 200 hombres de la Policía y patrullas del Ejército para enfrentar la grave situación que se presentaba en el corregimiento⁷⁵. Respecto a la actuación de la fuerza pública en Altavista se denunciaron excesos de fuerza, amenazas y señalamientos.

Es preocupante que en Medellín, pese a la existencia de más de 200 cuadrantes policiales⁷⁶ (2016), el control de las estructuras paramilitares sea inminente. Los cuadrantes son una distribución barrial que realiza la Policía para cubrir el territorio, no obstante, resultan ser ineficientes, máxime, si continúan aún los nexos de

⁷⁴ M. Santoyo, interceptó de manera ilegal teléfonos de varias organizaciones de derechos humanos de Antioquia en el año 2000 y podría estar relacionado con la desaparición forzada de dos miembros de ASFADDES - Medellín: Ángel Quintero y Claudia Monsalve. Santoyo fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez (primer mandato) y fue extraditado en 2012 a los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

⁷⁵ El Concejal Ricardo Yepes del Partido Cambio Radical en junio de 2017, solicitó desarrollar una Operación Orión en Altavista. Esta operación fue realizada en 2002 en comuna 13, dejando como resultado graves violaciones a los derechos humanos y más de 300 desaparecidos.

⁷⁶ El Colombiano, 31 de julio, 2016: 495 de los cuadrantes del Valle de Aburrá no funciona.

agentes estatales con los grupos que operan en las zonas. Las capturas contra miembros de Los Triana⁷⁷, las AGC⁷⁸, Los Pachelly⁷⁹, Los Chatas⁸⁰, la OVA⁸¹, Las Convivir⁸² y otras, no solucionan el problema debido a la capacidad de integración de nuevos miembros a sus estructuras.

Dinámicas económicas y sociales

En el Valle de Aburrá, los grupos paramilitares presentan dinámicas económicas ligadas a actividades ilegales y legales, lo que les permite mantener un “ejército” de hombres a su servicio, con “salarios” de acuerdo al rango dentro de la estructura. Se reportan extorsiones, comercialización de drogas, microtráfico, trata de personas, explotación sexual, hurto, contrabando (licor, ropa, mercancías en general), pagadario, cobro por prestar “servicios de vigilancia” a viviendas (Bello) y venta de lotes en las periferias de los municipios, en especial, en Medellín.

Las extorsiones son en principio contra el sector de transportadores (buses, busetas, transporte informal, mototaxistas), comerciantes (distribuidores de alimentos y bebidas, tenderos, dueños de bares, discotecas y depósitos de materiales, entre muchos más) y constructores de vivienda. Otras personas afectadas son los venteros informales y pequeños microempresarios.

Un 70 por ciento de las rutas de distribución de huevos, así como un 90 por ciento del servicio público del transporte en buses y busetas están azotadas por extorsionistas, un mal que tiene capítulos especiales por su complejidad en el Centro y los barrios periféricos donde toda actividad productiva es obligada a pagar una supuesta seguridad para evitar desgracias (...) Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Antioquia, al año, los comerciantes del Valle de Aburrá pagan entre \$60.000 millones y 100.000 millones por extorsiones. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de la entidad, aseveró que un alto porcentaje de estas vacunas se pagan por la llamada “vigilancia” que dicen hacer grupos armados ilegales. (El Colombiano, 2017e, párr.1)

Por su parte, La Cámara Colombiana de la Construcción capítulo Antioquia, denunció en mayo de 2017, que desde hace cinco años se han incrementado las extorsiones contra dueños de obras, quienes han recibido amenazas⁸³ frenando varias obras. “No tenemos un balance de obras paralizadas, muchas veces se dan las amenazas pero no se concretan. Hemos tenido obras que no han podido

⁷⁷ El Colombiano, 8 de noviembre, 2017: Capturan a 13 integrantes de Los Triana.

⁷⁸ El Espectador, 1 de noviembre, 2016: A la cárcel, presuntos culpables de quemar un bus en Medellín.

⁷⁹ Minuto30, 30 de marzo, 2017: Cayeron cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Pachelly’. Dos de ellos se entregaron.

⁸⁰ Caracol Noticias, 11 de mayo, 2016: Hasta llanto se vio en la captura de 13 integrantes de ‘Los Chatas’ en Bello. Hsbnoticias.com, 10 de noviembre, 2017: 13 integrantes de la ‘ODÍN Los Chatas’ fueron detenidos en Medellín y Bello.

⁸¹ El Espectador, 19 de septiembre 2017: Capturan a 28 miembros de “La Oficina” en Antioquia.

⁸² El Colombiano, 19 de diciembre, 2016: Caen 18 integrantes de convivir en el centro de Medellín.

⁸³ El 3 de octubre de 2017, cuatro miembros de la estructura La Empresa que se dedicaba a extorsionar a empresas constructoras que ejecutan proyectos urbanísticos en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, fueron detenidos... (Revista Semana, 2017a).

arrancar en el momento que se esperaba sino dos, tres y cuatro meses después. Sí hay registro de denuncias de empresarios sobre extorsiones” (La FM, 2017, párr.5).

La comercialización de drogas y microtráfico en los municipios del Valle de Aburrá, está controlado por las estructuras que operan en los territorios. El microtráfico ha aumentando y la población consumidora en el Valle de Aburra es aproximadamente de 227.193 personas de un estimado total nacional de 838.991 (El Colombiano 2016e), lo que indica que es un “mercado rentable” y permanente.

Medellín

Las dinámicas económicas en Medellín no difieren de las del resto del Valle de Aburrá. En la mayoría de los barrios de las 16 comunas y 5 corregimientos, los grupos extorsionan a transportadores, comerciantes y en algunos casos a constructores. En 2016, el Grupo de Microeconomía Aplicada de La UDEA, informó que de 308 barrios que hay en la ciudad, 247 presentaban algún tipo de extorsión (Revista Semana, 2016b). Entre las modalidades más comunes se encuentran el cobro por vigilancia, por instalar puestos de comidas o desarrollar otras actividades en el espacio público, como prostitución, ventas informales o cuidado de carros.

La ciudad, con una tasa de informalidad del 42% (Dane, 2016), arroja a muchos ciudadanos y ciudadanas a salir al “rebusque” y a las ventas ambulantes, hecho del que se benefician económicamente los grupos paramilitares. También extorsionan a contratistas que ejecutan proyectos institucionales o particulares, obligándoles a pagar un porcentaje o a contratar a jóvenes “impuestos por estas estructuras”.

Comuna 16: en algunos sectores, por ejemplo en La Capilla cobran al sacar la basura. Cada familia tiene que pagar como \$2.000 al combo de allá para que ellos se la lleven a un lugar determinado (basurero). Como las familias viven en un lugar de difícil acceso para la EMVARIAS, entonces se aprovechan de esa oportunidad y cobran. Aparte, también cobran el parqueo de las motos y los carros particulares. El comercio como tal en las tiendas también paga. También se ha conocido que las empresas que construyen viviendas a veces pagan, porque Belén es suelo de expansión. De vez en cuando llega un contratista de la Alcaldía y lógicamente va a hacer una obra, le piden una vacuna y listo o le tienen que dar trabajo a los muchachos o pagan de cierta manera, pero les condicionan (Testimonio de participante, 2017, p.4).

Altavista: los chiveros, que son un transporte informal que sirve a la gente de las veredas más altas, deben pagar \$40.000 semanal y son tres vacunas, porque son 3 combos. Las dos rutas de Cotrabel, la 172 y 178 son 42 buses, cada bus paga un promedio de 80.000 a los tres (...) O sea son 240.000 mensuales por bus. Aparte que el administrador de la terminal también paga vacuna (...) Por eso hubo hace poco paro de buses, porque surge una tercera vacuna, eran dos: la de Los Chivos y Pájaros y con los Gaitanistas llegó la tercera. Otra de las formas de hacer vacunas es cobrar en especie. Ellos dicen, necesitamos 5000 adobes y qué más pueden hacer los dueños de las ladrilleras, entregarlos. Ahí no hay efectivo. Pero los pelaos los venden, tienen sus planchones u obligan a quienes los tienen, a que se los lleven a determinada parte y esa es la plata para su accionar delincencial. (Testimonio de participante, 2017, p.3).

Por su parte, las CONVIVIR establecen cuotas de vigilancia a los establecimientos comerciales “asegurando” que a los negocios no les pase nada, y de suceder algún hurto, “indemnizando” a sus dueños como una aseguradora. En febrero de 2017, se conoció que la CONVIVIR Carabobo extorsionaba a vendedores callejeros y

almacenes para que pagaran vigilancia a cambio de dejarlos trabajar. “Las víctimas laboraban en el sector comprendido entre las calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan) y entre las carreras 51 (Bolívar) y 44 (Niquitao). Los vendedores ambulantes pagaban de \$3.000 a \$5.000 semanales, y cada local \$22.000” (El Colombiano 2017e).

En el Centro, la Policía señaló a las denominadas Convivir de extorsionar a por lo menos 7.000 víctimas. Por estos casos los afectados, entre los que se incluye a las trabajadoras sexuales y payasos de calle, pagaban entre 10.000 y 400.000 pesos semanales a un grupo que dirigían alias “Taras” y alias “Papas”, presuntos cabecillas de los combos La Terraza y Caicedo. (El Colombiano, 2017e, párr.8)

En las comunas 2 y 3, también se han reportado casos de cobros a familias que hacen arreglos a sus viviendas o que construyen pisos nuevos. “En 2017, una familia habitante de la comuna 3, Manrique, recibió la visita del coordinador de la zona⁸⁴ quien les dijo que por estar construyendo nuevas viviendas debían pagar una cuota mensual de \$300.000 pesos aproximadamente para poder continuar la construcción” (Testimonio de participante, 2017, p.16).

El control sobre los productos básicos de la canasta familiar y la distribución de las pipetas de gas, también son objeto de extorsión, de prácticas de control en su distribución y de monopolio de mercados. Casos como el de las comunas 1, 2, 3, 4, 16 y el corregimiento de Altavista, demuestran este tipo de hechos: “En la comuna 1 se le cobra vacuna a los que venden los huevos, a los del gas. Cobran extorsión a todos los que llegan al Parque de Guadalupe a utilizar las canchas, a todos los venteros”. (Testimonio de participante, 2017, p.16).

Según los habitantes de las comunas y diversos medios de comunicación, a principios de 2017 se presentó un desabastecimiento de gas en varias zonas de la ciudad, que provocó un alza en el precio y fue resultado de la determinación de los grupos de elevar las extorsiones a las empresas, que se negaron a prestar el servicio: “el problema lo padecen en silencio en el sector de Altavista, y barrios del nororiente de Medellín e incluso algunos que hacen parte de Bello (...) No he vuelto a cocinar con gas porque de un día para otro subió 10.000 pesos la pipeta. El del camión dijo que les habían subido la ‘vacuna’ a ellos” (El Colombiano, 2017g).

Otras modalidades de extorsión son los pagadarios o el gota a gota, que son préstamos de dinero a intereses del 20%. Cuando las personas no pueden pagar el dinero en el plazo acordado son amenazadas, desplazadas, despojadas de sus bienes (casas, vehículos, negocios) y en el peor de los casos, asesinadas. En Medellín, las principales comunas donde se recurre a este tipo de préstamos⁸⁵ son: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12 y 13. El número de clientes en toda la ciudad puede llegar a un millón y las rentas ilegales alrededor de 126 millones de dólares anuales (El Tiempo, 2016c).

⁸⁴ Es uno de los niveles de jerarquía que existe al interior de una de las estructuras que opera en el territorio, en este caso el grupo San Pablo.

⁸⁵ De acuerdo con el testimonio de un participante, en algunas comunas se conoce de casos en que líderes han recurrido a estos préstamos, para ejecutar actividades de proyectos que se ganan con la Alcaldía, pues las organizaciones no tienen recursos para esto. Cuando no pagan a tiempo, son amenazados u obligados a pagar dos o más veces la deuda.

Aunque hay zonas específicas de microtráfico en la ciudad⁸⁶: Barrio Antioquia, Niquitao o San Pedro – Lovaina; en la mayor parte de las comunas existe una plaza de venta de droga por barrio. Se podría exceptuar la comuna 14⁸⁷, y los Corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista y Santa Elena, donde podría existir una por cuenca, o nodo (varias veredas). En Medellín, el microtráfico está fuertemente vigilado y asegurado por parte de las estructuras paramilitares. Por ejemplo, Los Triana en la comuna 2 y San Pablo- La Terraza en la comuna 3, tienen grupos de jóvenes que están alertas ante la llegada de la Policía. “En Manrique cada tanto tiempo del día se liquidan las plazas para asegurar la plata y que si cae la Policía no se la vaya a llevar. Los Triana, hacen lo mismo, cogen el dinero y lo van sacando” (Testimonio de participante, 2017, p.19).

El turismo sexual y la explotación sexual-comercial sobre todo de niños, niñas y adolescentes y el reclutamiento forzado también aportan recursos económicos a estos grupos. De acuerdo con el Secretario de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos de la ciudad, Luís. Bernardo Vélez “son dos los grandes reclutadores de niños en las comunas de Medellín: el primero, las bandas criminales que los utiliza para el transporte de drogas, homicidios, hurtos, extorsiones, mendicidad y ventas callejeras. El otro grupo lo integran las redes sociales que ofrecen el llamado turismo sexual o venden pornografía, en muchos de los casos online, en vivo” (El Colombiano 2016, párr.4). Las comunas donde más se registran casos de explotación sexual con menores, son las comunas 4 y 10. Sin embargo, en las comunas 1 y 3, en el sector de La Salle, Parque Arví⁸⁸ y el Metrocable podrían estar llevándose a cabo explotación sexual-comercial de niñas, niños y adolescentes. Pese a que las autoridades municipales y la fuerza pública son concedoras del riesgo de esta población, las medidas continúan siendo insuficientes y por el contrario ha aumentado el riesgo con la internacionalización de la ciudad.

Las estructuras paramilitares han invertido en un importante número de bares y discotecas (comuna 1 y 2), almacenes de ropa y licores (comuna 10) y tienen pequeñas microempresas que resultan ser lucrativas por el monopolio que ejercen en la economía local. Por ejemplo, con la distribución de lácteos, donde grupos estarían pagando a personas para que vendan productos de su propia “marca”. Independientemente de que se venda o no, le pagan a la persona 50.000 pesos (Testimonio de un participante, 2017, p.3). Es una estrategia más para lavar el dinero de extorsiones y microtráfico, y ganar legitimidad entre pobladores que presentan altos niveles de pobreza y pocas oportunidades laborales.

⁸⁶ De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación el “negocio del narcomenudeo en Colombia movió en el año 2015, a través de las organizaciones criminales del microtráfico, 6 billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país.

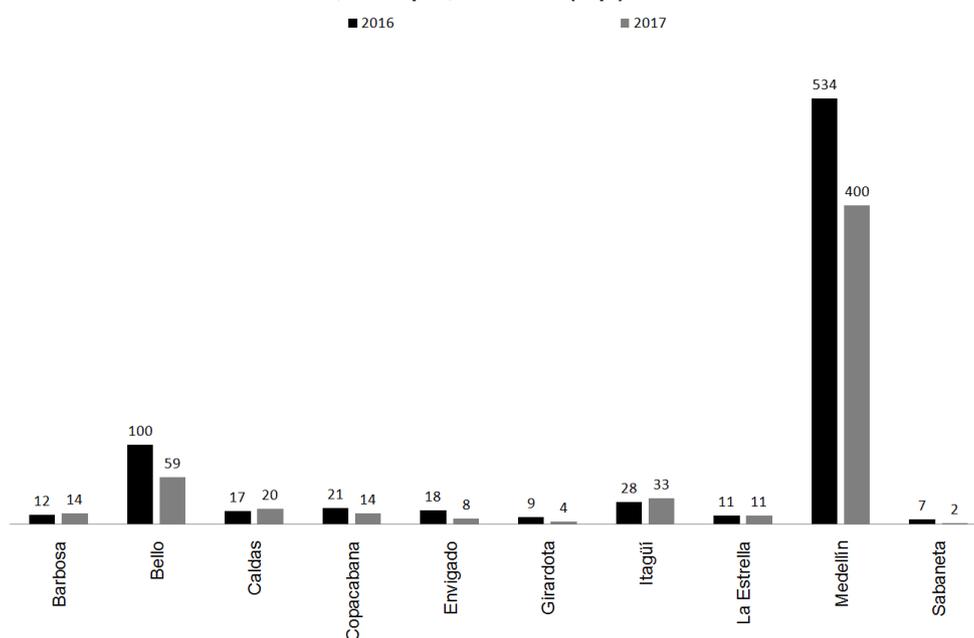
⁸⁷ Esta es la comuna de mayor estrato socioeconómico de la ciudad, allí se distribuye la droga en parques, discotecas y se lleva a domicilio hasta las viviendas. Además cuenta con una gran presencia de turistas extranjeros. En los últimos años esa zona de Medellín se han realizado denuncias acerca de la explotación sexual- comercial de niños, niñas y adolescentes y del turismo sexual.

⁸⁸ Radio, 3 de febrero 2016: Concejal de Medellín denunció que combos usarían a menores para turismo sexual

En la construcción de este informe se conoció de ventas de lotes entre las comunas 1 y 3 (Carpinelo) y la comuna 6 (Nuevo Jerusalén), y consiste en apropiarse de terrenos en las partes altas de las comunas y venderlos a familias desplazadas de otros barrios o de otros municipios, no sin antes asegurarse de que no sean guerrilleros o miembros de otras estructuras posiblemente enemigas.

Las dinámicas armadas y sociales que se vivieron en el Valle de Aburrá durante el periodo 2016 -2017, incluyen agresiones y graves violaciones a los derechos humanos contra la población especialmente en territorios como Altavista y las comunas: 5, 6, 7, 8, 13 y 16.

Figura 44: Homicidios en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (sep.)



Fuente: Policía Nacional.

El Valle de Aburrá, la subregión de Antioquia con más casos, reportó 1.322 homicidios durante el periodo. Medellín y Bello son los municipios donde más homicidios se reportan, territorios que tienen alto nivel de presencia paramilitar y confrontación armada. En Medellín desde el 1 de enero de 2016 hasta septiembre⁸⁹ de 2017 se han cometido 934 homicidios.

Figura 45: Homicidios en Medellín, Antioquia, 2016 – 2017 (sep.), por comuna

Ubicación	2016	2017 (sep.)	total
COMUNA 1	14	9	23
COMUNA 2	10	9	19
COMUNA 3	13	8	21
COMUNA 4	28	19	47
COMUNA 5	56	21	77
COMUNA 6	22	24	46
COMUNA 7	57	49	106

⁸⁹ En octubre de 2017, el número de homicidios anuales era de 468. (Sistema de Información de Seguridad Ciudadana- Alcaldía de Medellín).

COMUNA 8	28	17	45
COMUNA 9	16	11	27
COMUNA 10	96	66	162
COMUNA 11	21	17	38
COMUNA 12	13	8	21
COMUNA 13	42	32	74
COMUNA 14	8	4	12
COMUNA 15	24	19	43
COMUNA 16	32	41	73
San Sebastián de Palmitas	3	0	3
San Cristóbal	28	24	52
Altavista	7	12	19
San Antonio de Prado	15	8	23
Santa Elena	1	2	3
TOTAL	534	400	934

Fuente: Policía Nacional.

Las comunas con más homicidios en 2016 y 2017 son: 5, 7, 10⁹⁰, 13, 16, San Cristóbal y Altavista, todos territorios que presentan disputa armada por parte de estructuras que operan allí. El 7 de agosto de 2017, el general Gómez Heredia, comandante de la Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, respondió “Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales (El Colombiano)” ante una denuncia que realizara Julio Rengifo, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá acerca de la delicada situación en Belén y Altavista donde se han reportado desplazamientos forzados y homicidios.

Este tipo de señalamientos no solo estigmatizan, sino que desconocen el deber de garantizar los derechos humanos y proteger a la población, además de justificar la muerte de personas que podrían tener problemas judiciales. En 2016 y 2017, ciudadanos y ciudadanas fueron asesinados por grupos armados, al oponerse a pagar extorsiones o a pertenecer a estas estructuras⁹¹.

De acuerdo con el IPC (2016), “los contextos en los cuales ocurrieron los homicidios muestran que un 52% de estos fueron por enfrentamientos, disputas o actuaciones armadas, siendo posible que dicho dato sea mayor, toda vez que un 14 por ciento de los homicidios no cuenta con información preliminar para determinar el contexto donde se presentaron” (p.31).

En 2017, el contexto en el que se presentan la mayoría de homicidios se caracteriza nuevamente por las disputas entre estructuras. “En cuanto a las causas, las autoridades indicaron que 185 asesinatos ocurridos en lo que va de 2017 están relacionados con la delincuencia organizada, 52 con problemas de convivencia, 22 con hurtos, 12 con violencia de género, 6 con violencia intrafamiliar, 3 con

90 Solo en la comuna 10 se cometieron 162 homicidios. 96 en 2016, en comparación, esto equivale a todos los homicidios cometidos en Dinamarca y Austria en 2015.

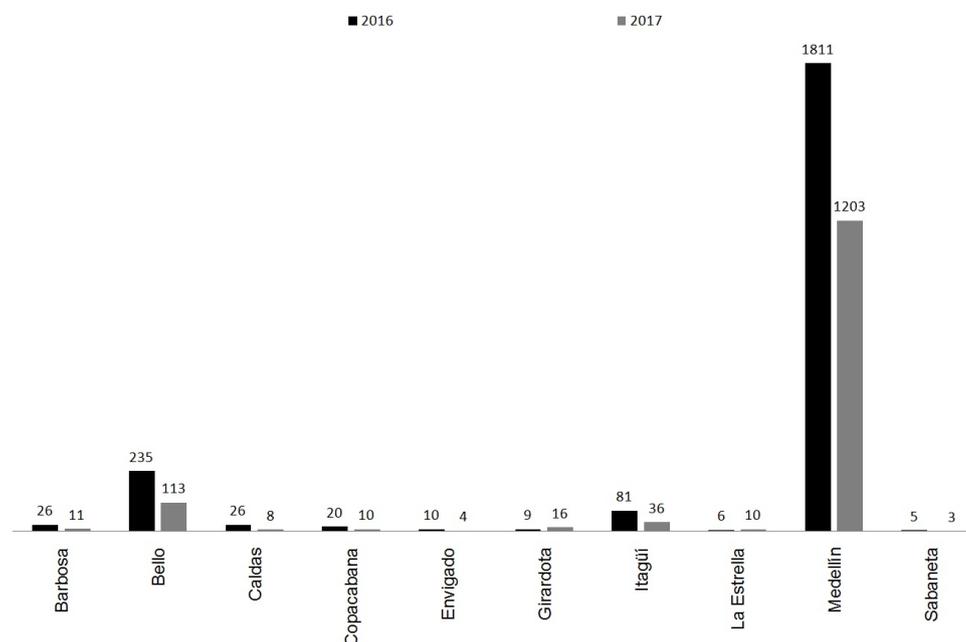
91 El Tiempo, 18 de septiembre 2017: Por no querer unirse a bandas criminales asesinan a joven en Altavista.

procedimientos de la fuerza pública y 2 serían homicidios culposos. Faltan por clasificar 78 asesinatos” (El Colombiano, 2017c, párr.8).

Para contrarrestar esta situación, la Alcaldía de Medellín decidió ampliar el pie de fuerza en los territorios más álgidos (comuna 5, 7, 8, 16 y Altavista), medidas que poco han servido para resolver esta situación. Por su parte, las estructuras en confrontación, han realizado “pactos del fusil⁹²” y se han redistribuido los territorios, una especie de pacificación frágil que en cualquier momento puede romperse. Aunque las autoridades casi siempre niegan la existencia de estos pactos, lo cierto es que al darse este tipo de tratos, se reportan descensos en las cifras de los homicidios, lo cual termina siendo aprovechado por la institucionalidad para demostrar efectividad en su política de seguridad.

Según la UARIV (2017), se reportaron 3.643 desplazamientos forzados intraurbanos desde 2016. Nuevamente, es en Medellín y Bello donde ocurren más casos (3.014). La Personería de Medellín indicó que han sido desplazadas 2.841 personas en 2016 y 2.340 entre enero y noviembre de este año. Las comunas con más desplazamientos forzados intraurbanos son la 13, 3, 7 y Altavista (2016). En 2017, las comunas 7, 13, 16, Altavista y San Cristóbal son las que más casos reportan.

Figura 46: Desplazamiento forzado en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (oct.)



Fuente: UARIV⁹³

Como se evidencia en los datos de homicidios y desplazamiento, los territorios donde se presenta mayor nivel de confrontación armada, son los mismos lugares donde se reporta desplazamiento forzado y homicidios.

⁹² En agosto de 2016, las estructuras de Robledo y la disidencia de esta, al mando de Alejo Cachama, tras 120 días de confrontación se reparten las comunas 7 y 5, una vieja práctica que impera en Medellín desde hace décadas. En Medellín se conoció un nuevo Pacto del Fusil en agosto de 2017, tras una reunión entre miembros de La OVA, Los Chatas, Los Pájaros, Los Pesebreros, Los Chivos y Las AGC.

⁹³ En noviembre de 2017, la UARIV reporta 1.819 desplazamientos en 2016 y 1.550 en 2017.

Figura 47: Desplazamiento forzado en Medellín, Antioquia, 2016-2017 (sep.)

Ubicación.	2016	2017 (sep.)	Total
COMUNA 1	56	57	113
COMUNA 2	30	23	53
COMUNA 3	49	51	100
COMUNA 4	27	20	47
COMUNA 5	49	42	91
COMUNA 6	24	16	40
COMUNA 7	77	128	205
COMUNA 8	56	61	117
COMUNA 9	24	30	54
COMUNA 10	10	15	25
COMUNA 11	1	0	1
COMUNA 12	7	4	11
COMUNA 13	97	125	222
COMUNA 14	0	0	0
COMUNA 15	2	2	4
COMUNA 16	32	47	79
San Sebastián de Palmitas	0	0	0
San Cristóbal	33	50	83
Altavista	15	125	140
San Antonio de Prado	18	21	39
Santa Elena	1	1	2

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2017

Esta práctica de despojo y expulsión ha sido constante en el país y en la ciudad de Medellín. Muchas de las familias que salen de los barrios lo hacen bajo amenazas por parte de los grupos, por miedo a las confrontaciones armadas y por resguardar a sus hijos ante un posible reclutamiento forzado⁹⁴. Altavista es un claro ejemplo de esta situación. Durante 2017 debido al contexto de violaciones de derechos humanos y enfrentamientos armados, salieron aproximadamente 142 personas (Alcaldía de Medellín 2017). La Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo N° 033-17, (2017c), donde dio cuenta de la delicada situación de derechos humanos y en especial de los desplazamientos forzados a causa de los enfrentamientos armados entre Los Chivos, Los Pájaros Rebeldes y Los Pesebreros.

La dinámica de confrontación armada⁹⁵ ha generado en los territorios restricciones a la movilidad y personas heridas. En Altavista y en comunas como la 8, 16 y la 13 y la 7 se reportaron adultos y menores heridos a causa de las balas. Al menos 183 estudiantes de Altavista no pudieron asistir a clase (Personería de Medellín, 2017) debido a la situación que se presentaba de

⁹⁴ En 2015, 5.374 personas se desplazaron en Medellín debido a las presiones de los grupos armados para reclutar a niños, niñas y adolescentes. (Ciudad del Sur, 2016)

⁹⁵ En estas confrontaciones armadas se han registrado policías heridos.

enfrentamientos continuos. Esta misma situación se ha presentado en la comuna 8.

En este contexto de graves violaciones al derecho a la vida, Medicina Legal- ML reportó un total de 264 desapariciones en la ciudad, 213 son adultos y 46 menores de edad. De acuerdo con datos del IPC (2016) las comunas que más reportaron desapariciones fueron: la 10, 7, 13, 5 y la 13. Para 2017, ML, indicó que en Medellín habían sido desaparecidas: 201 personas, 39 menores de edad y 162 adultos (enero- septiembre). Este crimen de lesa humanidad en los últimos cuatro años, ha llegado a registrar en la ciudad alrededor de 1.000 víctimas⁹⁶.

En 2015, tras denuncias de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Corpades, la institucionalidad reconoció la existencia de casas de pique. Lugares a donde eran transportadas las víctimas, y luego de ser torturadas, eran asesinadas, desmembradas y posteriormente arrojadas al río, dejadas en costales en vías públicas o incineradas.⁹⁷ Entre 2016 y 2017 se registraron varios casos de desmembramiento de cuerpos que fueron hallados en bolsas en varios sitios de Medellín, lo que evidencia la intencionalidad de hacer el mayor daño posible a las víctimas y enviar mensajes de terror.

En el Parque de Guadalupe ubicado en la comuna 1, se han presentado castigos físicos contra pobladores quienes son acusados de hurtar. Esta práctica no se presenta solo en este territorio, por el contrario, son frecuentes las golpizas en sectores donde hay una fuerte presencia paramilitar. Otras prácticas asociadas con los grupos paramilitares, son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejemplo de esto son los dos casos presentados en el mes de octubre de 2017, donde estructuras que operan en los municipios de Itagüí⁹⁸ y Bello⁹⁹, han obligado a personas, que se presume hurtaron algún bien, a correr desnudas por vías principales a modo de escarmiento. Estos hechos fueron realizados a plena luz del día y a la fecha no se conocen avances en las investigaciones.

Agresiones contra Líderes Sociales

Entre 2016- 2017 (octubre) se han registrado 105 ataques contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el Valle de Aburrá. (Observatorio de la Fundación Sumapaz, 2017). Los principales sectores victimizados son el comunitario, estudiantil, de derechos humanos, juvenil y de víctimas. De la totalidad de casos reportados, los principales responsables identificados son la Policía y en segundo lugar los paramilitares. Las principales agresiones han sido amenazas individuales (43 casos), Heridos (22 casos) todos estos ocurridos en el marco de

⁹⁶ El Colombiano, 24 de febrero 2016: Medellín sumó cerca de mil desaparecidos en los últimos 4 años.

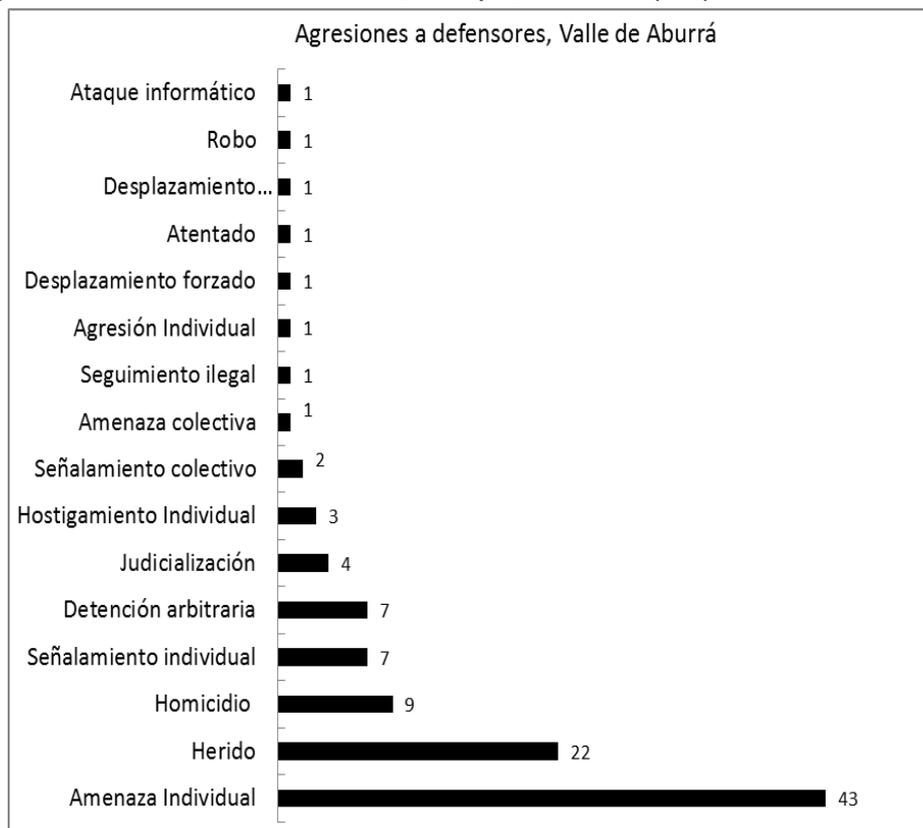
⁹⁷ RCN, 7 de octubre 2015: Medellín reconoce la existencia de casas de pique.

⁹⁸ El País, 23 de octubre, 2017: Desnudan a dos jóvenes que presuntamente intentaron robar en Itagüí, Antioquia.

⁹⁹ La FM, 27 de octubre, 2017: Presunto ladrón fue obligado a correr desnudo en Bello, Antioquia.

protestas sociales, y 9 homicidios, de los cuales 6 se presentaron en la ciudad de Medellín, 2 en Bello y 1 en Barbosa.

Figura 48: Agresiones a líderes en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016 – 2017 (nov.)

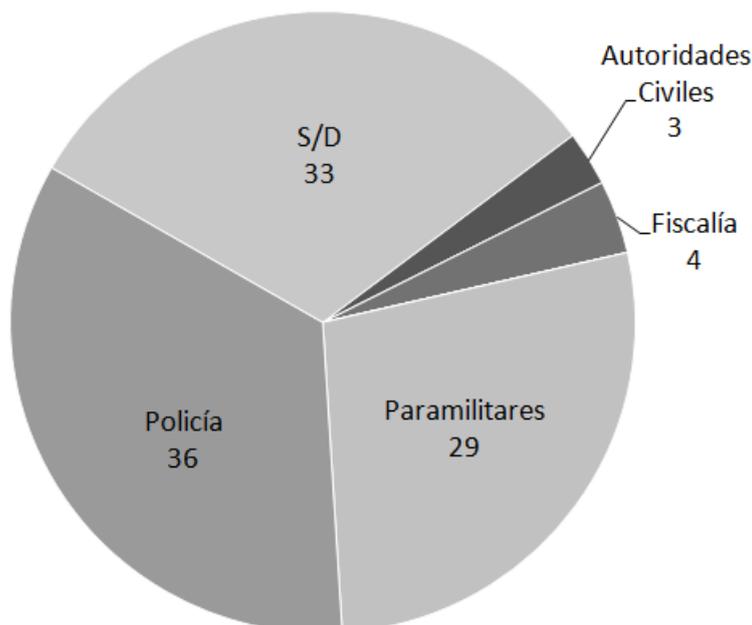


Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Respecto a las 43 amenazas individuales, 41 se realizaron en Medellín y 2 en Bello. Los paramilitares fueron responsables de al menos 19. De las estructuras identificadas las AGC son responsables de 4 casos y Los Pájaros de 1 caso. Las víctimas eran líderes y lideresas del sector comunitario (8 casos), de víctimas (3) y defensores de derechos humanos (8).

De los 9 homicidios, 6 fueron perpetrados por estructuras paramilitares, en los 3 casos restantes se desconoce el victimario. Entre las víctimas de los grupos paramilitares se encuentran: 2 periodistas, 2 líderes y 1 lideresa comunitaria, 1 campesino y 1 rector de colegio.

Figura 49: Presuntos responsables de agresiones a líderes en el Valle de Aburrá, Antioquia, 2016-2017 (nov.)



Fuente: Observatorio sobre el nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz)

Aunque no se conocen de denuncias penales o investigaciones por la posible injerencia de estos grupos armados en el presupuesto público, este tema no ha sido ajeno a los debates políticos. En Medellín, el Concejo Municipal¹⁰⁰ ha dado debates acerca del control que hace la Alcaldía para evitar que esto suceda. La respuesta generalmente de la institucionalidad, es que desconoce estos casos porque no hay denuncias por parte de las organizaciones, cuando en realidad muchos de los funcionarios en terreno saben que esto acontece. Además el silenciamiento se da por el temor de las comunidades de ser amenazados, desplazados o asesinados.

El presupuesto Participativo al ser un programa donde la comunidad decide sobre cómo invertir el 5% del presupuesto de libre destinación, el cual en 2016 ascendió a \$ 151 mil millones de pesos, en 2017 a 161 mil millones y en 2018 será de 209 mil millones de pesos, es un escenario clave para que los grupos paramilitares lleven a cabo ejercicios de control, no solo sobre el recurso sino en la agenda social de las comunidades. En diálogos con habitantes de algunas comunas y con organizaciones sociales, es frecuente escuchar que existen, al interior de algunos procesos organizativos, personas afines a los intereses de Los Triana, AGC, OVA, San Pablo- La Terraza, entre otros, o que hay cooptación del presupuesto y que existen casos en que se extorsiona a quienes ejecutan proyectos¹⁰¹.

¹⁰⁰ En febrero de 2016 y 2017 el Concejo de Medellín realizó debates sobre el tema de Presupuesto Participativo y la injerencia de las estructuras armadas en el mismo. Advirtió en esta ocasión sobre la necesidad de adoptar medidas de control para que el recurso no termine en manos de estas estructuras.

¹⁰¹ En los proyectos de infraestructura es importante que la Contraloría General haga especial investigación en el rubro denominado imprevisto.

“En algunas comunas puede existir cooptación de organizaciones sociales y también relaciones funcionales con algunos de los miembros de estructuras paramilitares (padrinos políticos), pero esto no se denuncia por miedo a recibir amenazas. Es claro el mensaje: o se silencian o se mueren. En las dinámicas participativas, líderes que han buscado acceder a la presidencia de la JAC son llamados y obligados a dejar sus postulaciones. Hay organizaciones que se resisten a ser cooptadas y por ello han recibido amenazas o se les obstaculiza su trabajo a través de terceros” (Testimonio de participante, 2017, p.3)

Uno de los efectos que ha traído la presencia y control de estos grupos es la autocensura de muchos procesos sociales, quienes a pesar de no ser funcionales a sus intereses han decidido no denunciar lo que estas estructuras hacen, saben que para poder trabajar en los territorios se debe tomar una actitud de poca confrontación y no develar las dinámicas paramilitares que estas encarnan.

Como se evidencia en el contexto de presencia paramilitar y algunas de sus dinámicas en el Valle de Aburrá, especialmente en la ciudad de Medellín (2016-2017), hay 350 estructuras funcionando. Estas se articulan o coordinan principalmente con la OVA y las AGC. Las amenazas, los homicidios (1.322) y desplazamientos forzados intraurbanos (3.643), evidencian las graves violaciones a los derechos humanos y las agresiones a las que se ven sometidos cotidianamente los pobladores, en especial de las comunas más pobres. En 2016- 2017 se ha podido conocer de capturas de agentes de la fuerza pública acusados de tener nexos con algunas de las estructuras de Medellín y Bello, y cómo algunos de los actuales de jefes de los grupos han sido ex integrantes de la Policía Nacional.

Como en tantas otras veces la ciudadanía insiste en que persisten las relaciones entre fuerzas del Estado y estos grupos, aunque no se atreven a denunciarlas por miedo y desconfianza en la institucionalidad. Lo que es claro es que este nivel de presencia de grupos en los barrios y veredas de Medellín no es posible sin la colaboración de agentes del Estado, quienes por acción u omisión son responsables de este contexto social, económico y territorial. Son preocupantes las agresiones contra los procesos organizativos, líderes, lideresas, defensores, y defensoras de derechos humanos (15 ataques), a quienes han violentado por su labor de defensa y denuncia. El Valle de Aburrá es la subregión de Antioquia que regularmente presenta más número de agresiones contra la labor comunitaria.

Aunque se ha puesto en debate si todas las estructuras barriales son grupos paramilitares (contrainsurgentes), lo cierto es, que estas imponen un control sobre las poblaciones, tienen prácticas de intolerancia y en casos donde las comunidades los han denunciado, han sido amenazados y desplazados. Buscan ganar legitimidad en los territorios, influir en los presupuestos comunitarios y controlar los procesos organizativos sobre los cuales mantienen una importante

vigilancia. Todo esto son acciones que rebasan un simple actuar delincucional, y los instala en actuaciones propias del paramilitarismo.

Consideraciones finales

De acuerdo a la cartografía realizada y al análisis de las fuentes consultadas, es evidente que el paramilitarismo en Antioquia durante 2016 y 2017 tuvo una rápida expansión y consolidación en varias subregiones, sobre todo en aquellas de donde las FARC- EP se retiró. Esto ocurrió en medio de del departamento en medio de una amplia omisión de la fuerza pública para frenar el avance de estos grupos y por la continua relación de agentes estatales con estas estructuras que aún continúa siendo una realidad.

Pese a los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo para varios municipios de Antioquia, en especial, aquellos abandonados por las FARC - EP entre 2016 y 2017 (9 Informes de Riesgo), así como a las denuncias de organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos advirtiendo sobre el peligro que representa para la población el copamiento por parte de las estructuras paramilitares y su repercusión en la implementación del Acuerdo de Paz, los gobiernos nacional y regional aún no toman las medidas suficientes para detener esta grave situación.

La presencia de las AGC en 97 municipios de Antioquia indica que esta estructura es la que mayor control territorial, social y económico tiene en el departamento. La OVA, el Clan Isaza, y las estructuras urbanas del Valle de Aburrá que en la actualidad están haciendo presencia en zonas rurales donde antiguamente no tenían influencia, son grupos con presencia creciente. Esta presencia es paralela al desarrollo de grandes megaproyectos mineros e hidroeléctricos, así como de infraestructura urbana y de bienes y servicios.

Es preocupante el caso del Valle de Aburrá, en especial, la ciudad de Medellín, que sigue reportando un alto número de homicidios y desplazamientos forzados, como resultado del accionar de los 350 grupos que trabajan y/o se coordinan con las AGC o la OVA. El Nordeste, Norte y Urabá también son territorios que presentan cifras alarmantes de graves violaciones a los derechos humanos. El poder paramilitar que se afianza en los municipios tras la salida de las FARC - EP demuestra que el Estado no ha cumplido su deber de garantizar la seguridad a los pobladores.

Los avances de estructuras urbanas hacia la ruralidad (ACN y Los Triana) es motivo de preocupación no solo porque son actores adicionales que se suman al control territorial y poblacional, sino también, porque en el caso de llevarse a cabo el sometimiento de las AGC, la realidad de las comunidades poco cambiaría al haber continuidad de este tipo de grupos en los territorios. El apoyo de las AGC a esta expansión podría estar relacionado con el posible interés de las estructuras del Valle de Aburrá de ganar espacio en un posible proceso de negociación con el Estado, pero también puede ser una forma de asegurar negocios y municipios, una vez se realice el proceso de negociación de las AGC; escenario que de llegarse a presentar, representaría para el país una nueva fallida desmovilización paramilitar.

Como se evidencia en este estudio, los grupos paramilitares no sólo poseen intereses económicos, sino que ejercen control a través de prácticas de control

social, coerción y disciplinamiento. En casos referenciados, se ha convocado a las comunidades para informarles de su presencia y las “reglas” que deben asumir para conservar sus vidas y estar en los territorios. La estrategia de consolidar una agenda social tiene entre sus objetivos llevar a cabo labores comunitarias, construir infraestructura, cuidar el medio ambiente, dar empleo a los habitantes y mediar en los conflictos interpersonales, todo con el propósito de ganar legitimidad.

Esta dinámica constata que no se trata de un asunto meramente lucrativo sino ante todo un régimen social favorecedor a sus intereses que a la vez sirve para preservar el orden social vigente.

Las agresiones contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, demuestran el alto riesgo que hay en el departamento para ejercer su labor. Sobre esta situación el Gobierno nacional intenta desconocer la sistematicidad de las agresiones, y se empeña en negar que gran parte de los ataques registrados provengan de las prácticas contrainsurgentes que conservan estos grupos.

Aunque en la actualidad existe un debate acerca del carácter contrainsurgente de estas estructuras y de la denominación de paramilitarismo, de acuerdo con la información generada en este informe, no se puede desconocer que existe en el actuar de varias de estas estructuras un marcado interés por afectar a grupos sociales y procesos organizativos que disienten del régimen social vigente. Las prácticas contrainsurgentes no se presentan de manera homogénea en los territorios, pero es preciso comprender que uno de los efectos que ha traído la estrategia paramilitar a lo largo de los años en las comunidades, es la autocensura de organizaciones y comunidades, quienes luego de ser sometidas al terror, han optado por silenciarse o cambiar sus formas de trabajo (no denunciar) para no ser objetivos militares. De allí que existan barrios, comunas, veredas y corregimientos que con un alto número de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de paramilitares, no tengan denuncias.

Como plataforma de derechos humanos, La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia, hace un llamado al Estado colombiano, para que de manera inmediata desmonte las estructuras paramilitares, sin lo cual es imposible avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos pactados en la Habana y construir paz territorial. Es preciso que los espacios institucionales creados para tal fin cuenten no solo con recursos, sino con la voluntad irrestricta de la institucionalidad para lograr avances en la materia. Así mismo es necesario que el Estado avance en investigaciones y sanciones contra agentes del Estado que continúan actuando con los grupos paramilitares en contra de la población.

Es necesario que el Estado adopte todas las medidas para proteger a las y los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo. Como lo advierte la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo sobre organizaciones y procesos sociales en Colombia, es urgente adoptar medidas afirmativas que garanticen la vida de los líderes y lideresas sociales y su derecho a participar en la construcción democrática de país. Es fundamental que el Gobierno disponga de medidas especiales para proteger la vida de los excombatientes de las FARC- EP.

Referencias

Referencias

- Alcaldía de Medellín. (2017). Desplazamiento forzado intraurbano en Medellín. Enero- septiembre 2017. Medellín: Colombia.
- Análisis Urbano. (8 de noviembre de 2017a). Bandas de Medellín y Bello controlan narcotráfico en Yarumal. Recuperado de: <https:// analisisurbano.org/bandas-de-medellin-y-bello-controlan-narcotrafico-en-yarumal/>
- Análisis Urbano. (17 de octubre de 2017b). La comuna 16 está en manos de la Alianza Criminal del Norte. Recuperado de: <https:// analisisurbano.org/la-comuna-16-esta-en-manos-de-la-alianza-criminal-del-norte/>
- Análisis Urbano. (2 de octubre de 2017c). Gaitanistas y Pachelly controlan la coca y el oro en Briceño. Recuperado de: <https:// analisisurbano.org/gaitanistas-y-pachelly-controlan-la-coca-y-el-oro-en-briceno/>
- Análisis Urbano. (30 de marzo de 2017d). Estructura de las Convivir: cúpula, coordinadores, integrantes, cobradores, pagadarios y territorios. Recuperado de: <https:// analisisurbano.org/estructura-de-las-convivir-cupula-coordinadores-integrantes-cobradores-pagadarios-y-territorios/>
- Análisis Urbano. (30 de marzo de 2017e). En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente. Recuperado de: <http:// analisisurbano.org/en-el-bajo-cauca-el-crimen-deambula-libremente/>
- Análisis Urbano. (23 de agosto de 2016a). Caparrapos existen: Rocío Arias se destapa (segunda parte). Recuperado de: <https:// analisisurbano.org/caparrapos-existe-rocio-arias-se-destapa-segunda-parte/>
- Agencia de Prensa Rural. (30 de mayo de 2016b). Paraeconomía en Medellín: de los combos paramilitares al crimen “legalmente” organizado. Recuperado de: <http:// prensarural.org/spip/spip.php?article19596>
- Análisis Urbano. (22 de febrero de 2016c). La Oficina es el cartel de Medellín transformado y renovado. Recuperado de: <https:// analisisurbano.com.co/presidente-santos-ordene-desmantelar-a-la-oficina/>
- Agencia de Prensa Rural. (29 de noviembre de 2012). ¿Quiénes son los Urabeños y qué quieren en Medellín?. Recuperado de: <http:// prensarural.org/spip/spip.php?article9736>
- Asociación de red de defensores y defensoras de derechos humanos. (2017). Los Paramilitares siguen actuando anuencia del Estado. Recuperado de: <http:// www.dhcolombia.com/2017/07/13/1151/>
- Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (2017). Trabajo social de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Recuperado de: <https:// www.youtube.com/watch?v=7rzG00OfuGs>
- Blue Radio. (19 de agosto de 2017). Capturan a 3 miembros de la Armada acusados de colaborar con Clan del Golfo. Recuperado de: <https:// www.bluradio.com/nacion/incautan-bienes-al-parecer-del-clan-del-golfo-avaluados-en-53-mil-millones-de-pesos-150911>
- Cámara de Comercio de Medellín. (2014). Perfil socioeconómico de la subregión del Urabá. Medellín, Colombia.
- Cámara de Comercio de Urabá. (2017). Informe socioeconómico 2016. Recuperado de: <http:// ccuraba.org.co/site/wp-content/uploads/2017/02/INFORME-SOCIOECONOMICO-2016.pdf>
- Caracol Noticias. (12 de julio de 2017). “Tenemos miedo, tenemos miedo”: en San José de Apartadó denuncian irrupción de grupo armado. Recuperado de: <https:// noticias.caracoltv.com/medellin/tenemos-miedo-tenemos-miedo-habitantes-de-san-jose-de-apartado-tras-irrupcion-de-grupo-armado>
- Caracol Radio. (29 de septiembre de 2017a). Capturan a cinco policías en Remedios por nexos con el Clan del Golfo. Recuperado de: http:// caracol.com.co/emisora/2017/09/29/medellin/1506694506_795659.html
- Caracol Radio. (21 de junio de 2017b). Autoridades de Antioquia crean plan contra extorsiones a constructores. Recuperado de: http:// caracol.com.co/emisora/2017/06/21/medellin/1498045482_464469.html

- Caracol Radio. (10 de junio de 2017c). Desmienten presencia masiva de paramilitares en San José de Apartadó, en Urabá. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/07/10/medellin/1499713339_999220.html
- Caracol Radio. (6 de junio de 2017d). Turbo es el segundo municipio con mayor tasa de homicidios en Colombia. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/06/06/medellin/1496769818_701136.html
- Caracol Radio. (22 de febrero de 2017e). Policía de Medellín reconoce que la ciudad tiene 10 bandas criminales y 220 combos. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/02/22/medellin/1487787673_620658.html
- Castaño, S. (24 de agosto de 2017). Prohibición del paramilitarismo, una reforma que levanta ampolla. El Espectador. Recuperado de: <https://colombia2020.elespectador.com/politica/prohibicion-del-paramilitarismo-una-reforma-que-levanta-ampolla>
- Centro de Investigación y Educación Popular para la Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Indepaz & IEPRI. (2017). Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. Bogotá, Colombia: Impresol ediciones.
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2016). El fin del conflicto pasa por el desmonte del paramilitarismo. Ponencia presentadaa en el Foro sobre terminación el conflicto. Bogotá.
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia. (2017). Informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia 2016. Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra. Observatorio sobre el Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Líderes y Lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Medellín, Colombia.
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia. (2016). Informe semestral sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia 2017-1. Observatorio sobre el Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores, Líderes y Lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Medellín, Colombia.
- Comisión Colombiana de Juristas. (2011). Despojo vulneración tierras campesinas y territorios ancestrales. Bogotá, Colombia: Opciones Gráficas Editores Ltda.
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (2016). Paramilitares obligan a pobladores a marchar por la Paz. Recuperado de: <https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-obligan-a-pobladores-a-marchar-por-la-paz/>
- Comunidad de Paz de san José de Apartadó. (29 de agosto de 2017). Reciclamientos de una violencia contumaz. Recuérado de: <http://www.cdpsanjose.org/node/113>
- Contagio Radio. (2017). Así es el control paramilitar en San José de Apartadó. Recuperdo de: <http://www.contagioradio.com/paramilitares-controlan-veredas-de-san-jose-de-apartado-articulo-39316/>
- Contagio Radio. (2016). Paro amrado de las Autodefensas Gaitanistas se extenderá hasta el domingo. Recuperado de: <http://www.contagioradio.com/comunidades-aterorizadas-por-paro-de-autodefensas-gaitanistas-articulo-22077/>
- Corporación Jurídica Libertad. (2017). Colombia Nunca Más. Extractivismo- graves violaciones a los derchos humanos. 1990- 2016. Caso Hidroitungo. Medellín.
- Coporación Jurídica Libertad & Fundación Sumapaz. (2017). Informe Semestral Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia 2017-1. ¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz! Recuperado de: <http://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2017/08/Informe-CCEEU-Antioquia-%C2%A1Para-que-la-Paz-no-nos-cueste-la-Vida-hagamos-posible-la-Paz.pdf>
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (14 de agosto de 2017a). Informe de Riego N°037-17 para el Municipio de Ituango, Antioquia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (19 de julio de 2017b). Informe de Riego N°035-17 para el Municipio de Apartadó (cabecera urbana), Antioquia.

- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (7 de julio de 2017c). Informe de Riesgo N°033-17 para el Corregimiento de Altavista del Municipio de Medellín, Antioquia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas - Sistema de Alertas tempranas. (30 de marzo de 2017d) Informe de Riesgo N°010- 17 para Colombia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (13 de febrero de 2017e) Informe de Riesgo N° 003-17 para el Municipio de Briceño, Antioquia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (9 de septiembre de 2016a) Informe de Riesgo Informe de Riesgo N° 031-16 para para las veredas Arenas Altas, Arenas Bajas, La Hoz, El Porvenir, La Esperanza, Buenos Aires y La Unión del corregimiento San José de Apartadó, en el Municipio Apartadó.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (22 de agosto 2016b). Informe de Riesgo N°007-16 para el Corregimiento de Puerto Clavel del Municipio del Bagre, Antioquia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (8 de marzo 2016c). Informe de Riesgo N°029-16 para Remedios y Segovia, Municipios del Bagre, Antioquia.
- Defensoría del Pueblo- Sistema de Alertas tempranas. (5 de febrero de 2016d) Informe de Riesgo Informe de Riesgo N° 006-1 para el Municipio de Briceño, Antioquia.
- Dígame. (20 de septiembre de 2017). Subió 81% tasa de homicidios en el Magdalena Medio. Recuperado de: <http://www.digame.com.co/concejo-de-seguridad-en-puerto-wilches-para-contrarrestar-la-delincuencia/>
- El Colombiano. (8 de noviembre de 2017a). Capturan a un policia por supuestos nexos con “la terraza”. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/capturan-a-un-policia-por-supuestos-nexos-con-la-terraza-MF7654349>
- El Colombiano. (23 de octubre de 2017b). Las raíces del “Clan del Golfo” en Medellín. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/clan-del-golfo-en-medellin-asi-opera-GB7542484>
- El Colombiano. (2 de septiembre de 2017c). En Medellín, homicidios han crecido 3,4 % en 2017 . Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/aumento-de-homicidios-en-medellin-en-2017-HY7221090>
- El Colombiano. (26 de abril de 2017d). [HYPERLINK "http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/capturan-a-directora-de-ong-por-supuestos-nexos-con-la-terraza/8791"](http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/capturan-a-directora-de-ong-por-supuestos-nexos-con-la-terraza/8791) Capturan a directora de ONG por supuestos nexos con “la Terraza” . Recuperado: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/capturan-a-directora-de-ong-por-supuestos-nexos-con-la-terraza-HJ6391485>
- El Colombiano. (21 de febrero de 2017 e). Nadie se escapa de las extorsiones en Medellín. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/extorsion-en-medellin-MX5990842>
- El Colombiano. (16 de enero de 2017 f). Así funciona “la Oficina”. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/multimedia/infografias/asi-funciona-la-oficina-MC5756871>
- El Colombiano. (27 de enero de 2017 g). Combos monopolizan la venta de gas. Recuperado de: <http://m.elcolombiano.com/extorsion-afecta-venta-de-gas-en-pipeta-GJ5821976>
- El Colombiano. (23 de agosto de 2016a). Seis policías capturados por nexos con la banda “los Chatas”. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/seis-policias-capturados-por-nexos-con-la-banda-los-chatas-JA4839038>
- El Colombiano. (26 de abril de 2016b). A la cárcel policía de la Interpol que vendía información a “los Urabeños”. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/a-la-carcel-patrullero-de-la-interpol-que-vendia-informacion-a-los-urabenos-IF4160648>
- El Colombiano. (15 de abril de 2016c). En Medellín 227 mil personas consumen sustancias ilícitas. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/medellin-tiene-227-mil-adictos-a-drogas-AE3969736>

- El Colombiano. (1 de abril de 2016d). Paro armado de “los Urabeños” afecta cuatro departamentos del país. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/colombia/paro-armado-de-los-urabenos-afecta-cuatro-departamentos-del-pais-XK3840312>
- El Colombiano. (20 de marzo de 2016e). Las fuerzas del crimen organizado en el Valle de Aburrá. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/las-fuerzas-del-crimen-organizado-en-el-valle-de-aburra-XH3779473>
- El Espectador. (8 de noviembre de 2017a). Incautan más de 12 toneladas de cocaína del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/incautan-mas-de-12-toneladas-del-clan-del-golfo-en-el-uraba-antioqueno-articulo-722198>
- El Espectador. (5 de septiembre de 2017b). “Estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales”: máximo líder del clan del Golfo. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/estamos-dispuestos-suspender-todas-las-actividades-ilegales-maximo-lider-del-clan-del-golfo-articulo-711680>
- El Espectador. (26 de agosto de 2017c). Prohibición del paramilitarismo, una reforma que levanta ampolla. Recuperado de: <https://colombia2020.elespectador.com/politica/prohibicion-del-paramilitarismo-una-reforma-que-levanta-ampolla>
- El Espectador. (17 de agosto de 2017d). ¿Qué maten líderes sociales?. Que importa. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/que-matan-lideres-sociales-que-importa-columna-708623>
- El Espectador. (17 de mayo de 2017e). Paramilitares tienen bajo amenaza a campesinos de San José de Apartadó. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/paramilitares-tienen-bajo-amenaza-campesinos-de-san-jose-de-apartado-articulo-694283>
- El Espectador. (9 de noviembre de 2016a). ¿Que no hay paramilitares en Rodoxalí? En San José de Apartadó dicen lo contrario: Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-hay-paramilitares-rodoxali-san-jose-de-apartado-dice-articulo-664745>
- El Espectador. (19 de abril de 2016b). Temor en San José de Apartadó tras incursión de grupos posdesmovilización. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/temor-san-jose-de-apartado-tras-incursion-de-grupos-pos-articulo-628064>
- El País. (23 de octubre de 2017). Desnudan a dos jóvenes que presuntamente intentaron robar en Itagüí, Antioquia. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/colombia/desnudan-a-dos-jovenes-que-presuntamente-intentaron-robar-en-itagui-antioquia.html>
- El Tiempo (14 de noviembre de 2017a). En Ituango han ocurrido 3 asesinatos de miembros de Farc en 4 meses. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/homicidio-de-desmovilizado-de-las-farc-en-ituango-antioquia-150602>
- El Tiempo (22 de junio 2017). Policía liderará Fuerza de Tarea Conjunta contra el Clan Úsuga. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/crean-fuerza-de-tarea-conjunta-contra-el-clan-usuga-101904>
- El Tiempo. (1 de julio de 2017b): Capturan a presuntos integrantes del Clan del golfo, en Antioquia. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/varios-golpes-contra-el-clan-del-golfo-en-antioquia-104640>
- El Tiempo (22 de mayo de 2017c). Trabajos en puntos críticos de dos vías que llevarán al mar por Urabá. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-en-dos-vias-que-conducen-al-mar-por-uraba-en-antioquia-90674>
- El Tiempo (7 de febrero de 2017d). La Iglesia denuncia grave situación de orden público en Urabá. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/inseguridad-para-reclamentes-de-tierras-en-uraba-38427>
- El Tiempo. (28 de noviembre de 2016a). Ya hay quien construya el Puerto en Urabá. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/puerto-de-uraba-43277>
- El Tiempo. (25 de agosto de 2016b). Polémica en Medellín por recursos para las víctimas. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/reparacion-de-victimas-en-medellin-33861>

- El Tiempo. (7 de julio de 2016c). La millonaria cifra que deja el 'pagadiario' en Medellín. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16638677>
- El Tiempo. (7 de julio de 2014). Alias Tierra pagó \$8.000 millones en sobornos a autoridades en Urabá. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14757876>
- Environmental Justice Atlas. (2017). Atlas Global de Justicia Ambiental. Recuperado de: <https://ejatlas.org/conflict/proyecto-gramalote-antioquia-colombia>
- Equipo Nizkor. (4 de junio 2016). ¿Cuál fue la relación de la DEA y la CIA con Los Pepes? Recuperado de: <http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/pepes.html>
- Fundación Ideas para la Paz. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Bogotá, Colombia.
- Gobernación de Antioquia. (2017). Plan De Desarrollo de Antioquia. Piensa e grande. 2016- 2019. Medellín, Colombia.
- Indepaz. (2017a). Dejación de armas y sometimiento. XIII informe presencia de grupos narcoparamilitares. Bogotá, Colombia.
- Indepaz. (julio 2017b). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Recuperado de: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59b2f3940f71c.pdf>
- Instituto Popular de Capacitación. (2017a). Urabá Antioqueño. Recuperado de: <http://ipc.org.co/index.php/regiones/uraba-antioqueno/>
- Instituto Popular de Capacitación. (2017b). Norte Antioqueño. Recuperado de: <http://ipc.org.co/index.php/regiones/norte-de-antioquia/>
- Instituto Popular de Capacitación. (2017c). Valle de Aburrá. Recuperado de: <http://ipc.org.co/index.php/regiones/valle-de-aburra/>
- Instituto Popular de Capacitación. (2016). Política de seguridad de Medellín cae en el populismo punitivo. Recuperado de: <http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/08/12/politica-de-seguridad-de-medellin-cae-en-el-populismo-punitivo/>
- Instituto Popular de Capacitación. (2015). La paz como construcción: tensiones y realidades del conflicto y el posconflicto en Antioquia. Medellín, Colombia.
- La FM. (15 de mayo de 2017). Camacol: “Hemos tenido obras que no han podido arrancar por extorsiones en Medellín”. Recuperado de: <https://www.lafm.com.co/regional/camacol-tenido-obras-no-podido-arrancar-extorsiones-medellin/>
- La Prensaweb. (31 de julio de 2017). AGC, ofrece hasta a \$2 millones mensuales a jóvenes para reclutarlos”: Defensoría del Pueblo. Recuperado de: <https://www.laprensaweb.co/ciudad/agc-ofrece-hasta-a-2-millones-mensuales-a-jovenes-para-reclutarlos-defensoria-del-pueblo/>
- La República. HYPERLINK "<https://www.larepublica.co/empresas/puerto-de-pisisi-se-caracterizara-por-ser-amigable-con-el-medio-ambiente-2508526>" Puerto de Pisisí se caracterizará por ser amigable con el medio ambiente . Recuperado de: <https://www.larepublica.co/empresas/puerto-de-pisisi-se-caracterizara-por-ser-amigable-con-el-medio-ambiente-2508526>
- La Vanguardia. (12 de octubre de 2016). Capturan a 21 militares y policías por nexos con las bandas criminales. Recuperado de: <http://www.vanguardia.com/colombia/376281-capturan-21-militares-y-policias-por-nexos-con-las-bandas-criminales>
- Matta, N. (20 de marzo de 2016). Las fuerzas del crimen organizado en el Valle de Aburrá. El colombiano. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/las-fuerzas-del-crimen-organizado-en-el-valle-de-aburra-XH3779473>
- Medellín Cómo Vamos. (2017). Competitividad y desempeño económico. Recuperado de: <https://www.medellincomovamos.org/competitividad-y-desempe-o-econ-mico/>
- Minuto 30. (31 de julio de 2017). Capturados doce presuntos miembros de ‘Las Convivir’. Recuperado de: <https://www.minuto30.com/audio-capturados-doce-presuntos-miembros-de-las-convivir/448806/>

- Morales, C. (17 de Agosto de 2017). ¿Que matan líderes sociales? ¡Qué importa! El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/que-matan-lideres-sociales-que-importa-columna-708623>
- Proceso Social De Garantías Para La Labor De Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales, Defensores, Defensoras De Derechos Humanos De Antioquia. (2017). Presencia de las AGC controlando la vida campesina en el corregimiento el aro municipio de Ituango.
- Organización de las Naciones Unidas- Unidad Contra las Drogas y el Delito en Colombia. (2017). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Julio 2017. Bogotá: Colombia.
- Personería de Medellín. (2016). Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín. Medellín: Colombia.
- Portafolio. (2017). La agroindustria bananera creció 14 % en sus exportaciones. Recuperado de: <http://www.portafolio.co/economia/gobierno/agroindustria-bananera-crecio-14-exportaciones-491793>
- Programa Somos Defensores. (2017). Contra las cuerdas. Informe Anual 2016 Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de DDHH en Colombia SIADDHH. Recuperado de: <https://somosdefensores.org/attachments/article/144/Contra%20las%20cuerdas.%20Informe%20Anual%20Espan%CC%83ol%20220217227p.pdf>
- Programa Somos Defensores. (2017). Informe enero- junio de 2017. Agúzate. Recuperado de: <https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/146-aguzate>
- República de Colombia, Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia. (2010). Plan de expansión de referencia generación- transmisión 2010 - 2024. Bogotá, Colombia.
- Restrepo, Juan Diego. Noviembre 8 de 2012. “Los rastrojos” azotan el norte de Antioquia. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/4290-rastrojos-acosan-en-el-norte-de-antioquia/>
- Revista Semana. (3 de octubre de 2017a). Asegurados por presuntas extorsiones a constructores en el Aburrá norte. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/10/03/medellin/1507045163_830138.html
- Revista Semana. (28 de mayo de 2017b). Las comunicaciones secretas del Clan del Golfo. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-comunicaciones-secretas-del-clan-del-golfo/535318>
- Revista Semana. (25 de abril de 2017c). Urabá, el nido de los nuevos paramilitares. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/uraba-donde-se-expanden-los-nuevos-paramilitares/523151>
- Revista Semana. (23 de agosto de 2016a). Capturan a policías vinculados a la banda Los Chatas. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-capturan-a-policias-vinculados-a-la-banda-los-chatas/491021>
- Revista Semana. (2 de agosto de 2016b). En el 80 % de los barrios de Medellín hay extorsión. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/seguridad-medellin-en-el-80-de-los-barrios-hay-extorsion/459948>
- Revista Semana. (15 de abril de 2009). Esta es la historia criminal de “Don Mario”. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/esta-historia-criminal-don-mario/102071-3>
- Revista Semana. (27 de junio de 1994). Yo fui el creador de los PEPES. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/yo-fui-el-creador-de-los-pepes/22770-3>
- Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, (2 de febrero de 2015)- Sentencia- Radicado: 110016000253-2006-80018. [MP María Consuelo Rincón]
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2017). Registro Único de Víctimas. Recuperado de: <https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

ISBN: 978-958-7178-9-3

